



Consejo de Seguridad

Distr. general
30 de abril de 2021
Español
Original: inglés

Carta de fecha 29 de abril de 2021 dirigida al Secretario General y a los Representantes Permanentes de los miembros del Consejo de Seguridad por la Presidencia del Consejo de Seguridad

Tengo el honor de adjuntar a la presente copia de las exposiciones informativas ofrecidas por el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia, Sr. Mark Lowcock; el Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Sr. Peter Maurer, y el Presidente de la Junta Directiva de International Peace Institute, Sr. Kevin Rudd, así como de las declaraciones formuladas por el Ministro de Relaciones Exteriores de Viet Nam, Excmo. Sr. Bui Thanh Son; la Ministra de Relaciones Exteriores de Estonia, Excma. Sra. Eva-Maria Lijmets; el Ministro de Relaciones Exteriores y Defensa de Irlanda, Excmo. Sr. Simon Coveney; la Representante Permanente de los Estados Unidos de América y Miembro del Gobierno del Presidente Biden, Excma. Sra. Linda Thomas-Greenfield; el Viceministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Excmo. Sr. Jens Frølich Holte; el Viceministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, Excmo. Sr. Sergey Vershinin; y la Ministra de Estado a cargo de las Relaciones Exteriores y el Comercio Exterior de San Vicente y las Granadinas, Excma. Sra. Keisal Peters; así como de los representantes de China, Francia, la India, Kenya, México, el Níger, Túnez y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en relación con la videoconferencia sobre “La protección de los civiles en los conflictos armados: bienes de carácter civil indispensables”, celebrada el martes 27 de abril de 2021.

De acuerdo con el entendimiento alcanzado entre los miembros del Consejo en relación con esta videoconferencia, las siguientes delegaciones y entidades presentaron declaraciones por escrito, de las que también se adjunta copia: Afganistán, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bahrein, Bélgica, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, Etiopía, Unión Europea, Guatemala, República Islámica del Irán, Italia, Japón, Liechtenstein, Malta, Myanmar, Pakistán, Polonia, Portugal, República de Corea, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos.

De conformidad con el procedimiento establecido en la carta de fecha 7 de mayo de 2020 dirigida a los Representantes Permanentes de los miembros del Consejo de Seguridad por la Presidencia del Consejo (S/2020/372), acordado a raíz de las circunstancias extraordinarias relacionadas con la pandemia de enfermedad por coronavirus, las exposiciones informativas y las declaraciones adjuntas se publicarán como documento oficial del Consejo de Seguridad

(Firmado) **Dang Dinh Quy**
Presidente del Consejo de Seguridad



Anexo 1**Exposición informativa del Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia, Mark Lowcock**

En la actualidad, el mundo entero afronta la mayor crisis de nuestra época. Nuestra única batalla hoy debe ser luchar contra la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Ahora es el momento de acabar con todos los demás conflictos. No obstante, donde persiste el conflicto violento debemos fortalecer la protección de los civiles.

En los últimos 30 años se han logrado ciertos progresos en el cumplimiento del derecho internacional humanitario para proteger a los civiles y los bienes de los que dependen para sobrevivir, como los alimentos, las medicinas, los hospitales y las instalaciones hidráulicas. Sin embargo, no han sido suficientes.

En los últimos dos decenios hemos visto la aparición de grupos terroristas transnacionales que rechazan totalmente las leyes de la guerra, grupos que utilizan sus ideologías nihilistas para justificar actos de violencia indecible contra los civiles. Ni siquiera pretenden suscribir las normas humanitarias básicas. Consideran que los civiles, incluidos los trabajadores humanitarios, son objetivos legítimos.

Al mismo tiempo, las grandes Potencias militares están reorientando su planificación, entrenamiento y gastos militares para disuadir y derrotar a los Estados enemigos. Cuando los Estados y los grupos armados no respetan o socavan el derecho internacional humanitario, otros Estados y agentes no estatales lo consideran una invitación a hacer lo mismo.

Me preocupa profundamente lo que eso significa para nuestra capacidad de proteger decenios de progresos duramente ganados. Expondré el impacto del conflicto en cuatro esferas fundamentales.

En primer lugar, permítaseme hablar de los alimentos. En abril, el Sr. David Beasley, el Sr. Qu Dongyu y yo proporcionamos al Consejo de Seguridad información actualizada (véase S/2020/340) sobre el vínculo destructivo entre los conflictos y la seguridad alimentaria. El impacto de los conflictos armados en la seguridad alimentaria puede ser directo, como la destrucción de las reservas de alimentos y los activos agrícolas. Los ataques contra los recursos alimentarios fuerzan a las personas a desplazarse y alteran los sistemas alimentarios y los mercados, haciendo que solo unos pocos tengan la capacidad de comprar alimentos o acceder al agua y al combustible para preparar comida.

El año pasado, en Nigeria, un ataque contra una explotación arrocera ubicada en las afueras de Maiduguri mató al menos a 110 agricultores. El saqueo de alimentos y ganado fue objeto de denuncias generalizadas en Sudán del Sur entre 2013 y 2020. En el Yemen, los ataques aéreos y los bombardeos han causado daños en granjas, mercados, lugares de almacenamiento de alimentos y embarcaciones de pesca. Incluso ahora oímos informes sobre la destrucción sistemática de insumos e infraestructuras agrícolas en la región etíope de Tigré durante ese conflicto.

Todo ataque contra el suministro de alimentos y la infraestructura alimentaria es inaceptable. He informado al Consejo de Seguridad sobre el peligro de hambruna causada por los conflictos desde 2018. En todas las Naciones Unidas, junto con nuestras organizaciones no gubernamentales asociadas, hemos advertido recientemente del peligro de hambruna que se cierne sobre el Yemen, Sudán del Sur, el nordeste de Nigeria y otros lugares si no se adoptan medidas urgentes.

En segundo lugar, permítaseme hablar del agua. En enero de 2016, el Estado Islámico en el Iraq y el Levante cortó el suministro de agua a la provincia de Alepo, en Siria, lo cual afectó a unos 2 millones de personas. Se sabe que Boko Haram ha envenenado fuentes de agua como pozos y arroyos, haciendo que el uso del agua fuera peligroso tanto para las personas como para el ganado.

La interrupción del suministro de agua potable durante un conflicto provoca crisis sanitarias y de salud. Incluso un solo incidente que altere el suministro de agua puede tener enormes consecuencias para la salud. Se ha demostrado que incluso una única y breve interrupción del suministro de agua potable —de solo un día— puede aumentar el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera. Eso afecta especialmente a los niños muy pequeños, para los que la infección representa el mayor riesgo de muerte.

Los servicios de agua y saneamiento suelen verse afectados en los conflictos armados. En Ucrania y Libia, los combates han dañado la infraestructura de abastecimiento de agua y obstaculizado su mantenimiento, lo que ha llevado a cortes en el suministro y escasez de agua. La interrupción o el corte deliberados del suministro de agua también se utiliza como táctica de guerra. En Sudán del Sur, los soldados del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán robaron las bombas que los habitantes de Mboro utilizaban para bombear agua de los pozos perforados, privándoles así del acceso al agua tanto para el consumo como para el saneamiento.

En tercer lugar, permítaseme hablar de la atención médica. Los actos de violencia, los ataques y las amenazas contra la atención médica debilitan en gran medida la capacidad de los sistemas de salud de funcionar adecuadamente. Lo que me ha resultado especialmente difícil de digerir son los ataques sistemáticos contra los centros médicos en Siria. La Organización Mundial de la Salud contabilizó 250 ataques de ese tipo solamente entre 2018 y 2020. En esos ataques murieron unos 1.000 trabajadores sanitarios en el último decenio.

Además de tratarse de actos de pura crueldad, esos ataques han devastado el sistema sanitario sirio. Mis predecesores y yo hemos comparecido periódicamente ante el Consejo de Seguridad para denunciar esas violaciones y defender a las personas atrapadas en los combates. En Burkina Faso se quemaron ambulancias y se saquearon centros sanitarios. En Malí se destruyeron o saquearon equipos y medicamentos y se secuestraron vehículos.

Los ataques también tuvieron repercusiones para la respuesta a la COVID-19. En Libia, el año pasado, los ataques aéreos y los bombardeos causaron daños en los hospitales en los que se trataba a los pacientes de la COVID-19. En el Yemen, los centros de cuarentena resultaron dañados durante las hostilidades. A resultas de esos ataques frecuentes, los profesionales de la medicina huyen y a menudo los centros se ven obligados a cerrar, dejando a millones de personas sin acceso a la atención sanitaria. Los centros que siguen abiertos afrontan una grave escasez de personal, medicamentos y suministros. A finales de junio del año pasado, solo la mitad de los 113 hospitales sirios que fueron verificados eran plenamente operativos. En marzo del año pasado, hasta el 70 % del personal sanitario había abandonado el país.

En cuarto lugar, vemos casos horribles del uso de la violación y otros tipos de violencia sexual para tratar de lograr objetivos políticos y militares, y la destrucción deliberada de la infraestructura de apoyo a los supervivientes. Eso es lo que vimos como parte de un esfuerzo deliberado para expulsar a cientos de miles de rohinyás de Myanmar en 2017. Nunca olvidaré algunas de las historias —las mujeres que conocí en Bazar de Cox me contaron su experiencia— de violaciones sistemáticamente perpetradas por hombres uniformados en presencia de familias y niños. Es también

lo que hemos visto en los últimos seis meses en el norte de Etiopía; las violaciones allí no han cesado. Se organizan de forma deliberada y sistemática, son selectivas, por motivos étnicos y pretenden aterrorizar, humillar y embrutecer.

Podría dar muchos otros ejemplos de lo que he visto y escuchado en los últimos cuatro años. A veces, un conflicto puede tener resultados horribles, debidos no solo a quién o cuál es el objetivo, sino dónde y cómo se produce. El empleo de armas explosivas en zonas pobladas expone a un gran número de civiles al riesgo de morir o resultar heridos. Cuando se emplearon en zonas pobladas el año pasado, el 88 % de los muertos o heridos fueron civiles, frente a un 16 % en otras zonas.

El empleo de armas explosivas en las zonas urbanas también tiene efectos devastadores en las infraestructuras y los servicios esenciales. Un estudio realizado en el Yemen, en 2020, mostró la manera en que el empleo de armas explosivas pesadas en zonas pobladas ha puesto en peligro todos los recursos y sistemas del país, en particular el suministro de agua y electricidad, los hospitales y los sistemas de saneamiento. Menos personas desean regresar si se ha destruido el suministro de servicios vitales. Menos personas pueden regresar.

En un mundo cada vez más digitalizado, los ciberataques también suponen una amenaza a las infraestructuras esenciales. Como ha señalado el Secretario General, los ciberataques —con sus correspondientes efectos en las infraestructuras sanitarias, eléctricas y de abastecimiento de agua— pueden ser cada vez más frecuentes. La perturbación de las redes eléctricas puede privar de energía eléctrica a un gran número de personas. Los ciberataques han puesto en peligro los servicios de atención de la salud en países como el Reino Unido, la República Checa, Francia, España y los Estados Unidos, obligando algunas veces a retrasar las operaciones, poniendo en peligro los datos de los pacientes e interrumpiendo los servicios, en particular el procesamiento de las pruebas de detección de la COVID-19.

Imaginen una situación similar en un país ya afectado por un conflicto armado. No solo tendría efectos devastadores en la población a corto y largo plazos, sino que también dificultaría la respuesta humanitaria.

Hay tres maneras de reforzar la protección de los civiles y de los bienes indispensables para su supervivencia.

En primer lugar, hay que mejorar el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Se puede hacer definiendo mejor esos bienes indispensables y actualizando periódicamente las listas de blancos prohibidos que los incluyen. Asimismo, debemos responder a los daños causados a esos bienes y aprender de ellos. Al mismo tiempo, debemos seguir aprovechando el diálogo político, las sanciones y las decisiones relativas a la transferencia de armas, a fin de garantizar el respeto de la ley y la protección de los civiles y de los bienes de los que dependen para sobrevivir.

En segundo lugar, hay que evitar el empleo de armas explosivas con efectos de gran alcance en zonas pobladas, como ha pedido el Secretario General en repetidas ocasiones. Existen buenas prácticas —por ejemplo, en el Afganistán y Somalia, donde se ha restringido el empleo de determinadas armas lanzadas desde el aire o se ha limitado el uso de artillería y otras municiones de fuego indirecto por parte de las fuerzas multinacionales. En 2017, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios publicó una recopilación de políticas y prácticas militares para reducir las consecuencias humanitarias del empleo de armas explosivas en zonas pobladas.

En tercer lugar, a menos que haya rendición de cuentas, los malhechores no aprenderán la lección de que los delitos graves se pagan. En esencia, lo que no se castiga se incentiva. Si los crímenes de guerra quedan impunes, las cosas empeorarán. Garantizar la rendición de cuentas por las violaciones graves del derecho internacional

humanitario constituye uno de los mayores desafíos a que nos enfrentamos para reforzar la protección de los civiles. Reviste especial importancia garantizar la rendición de cuentas por violaciones graves cuando estas constituyen en sí mismas una táctica y una decisión deliberada de los perpetradores. Como ha dicho el Secretario General,

“nuestro poder en las Naciones Unidas es un poder de persuasión, es un poder para hablar y denunciar lo que se debe denunciar. No obstante, no podemos ordenar a los países que hagan lo que deben hacer”.

Contamos con un marco jurídico sólido que rige el comportamiento de las partes en tiempos de guerra y disponemos de un conjunto cada vez mayor de buenas prácticas para aplicarlo. Lo único que necesitamos ahora es la voluntad política de los Estados Miembros y de todas las partes en los conflictos armados en cuanto a respetar las normas y hacer lo correcto.

Anexo 2**Exposición informativa del Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja**

En el día de hoy, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) trae una advertencia al Consejo de Seguridad: si no se adoptan medidas urgentes para proteger los servicios esenciales en las zonas de conflicto, nos enfrentaremos a una catástrofe humanitaria a gran escala. Felicito al Consejo, bajo el liderazgo de Viet Nam, por haber promovido este debate y la resolución 2573 (2021) que lo acompaña, a fin de atraer la atención política hacia esta cuestión de carácter operativo.

Gracias a nuestra labor en Adén, Alepo, Bengasi, Gaza, Homs, Mosul y otros lugares, el CICR ha llegado a conocer los efectos graves y acumulativos en la población cuando los servicios esenciales, como la electricidad, la salud, la educación, el agua y el saneamiento, resultan dañados en los conflictos. Las consecuencias humanitarias son nefastas, y van desde las crisis sanitarias hasta el desplazamiento y la degradación del medio ambiente. A menudo, no hay agua potable para beber ni electricidad para abastecer los hogares ni servicios sanitarios para tratar a los heridos y los enfermos.

Los más afectados son los que ya se enfrentan a barreras y desventajas, especialmente las mujeres y los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad. En los conflictos prolongados, los niños menores de 5 años tienen 20 veces más probabilidades de morir a causa de enfermedades relacionadas con el agua no apta para el consumo y el saneamiento que por la violencia.

El CICR trabaja en medio de ese sufrimiento. Estamos presentes durante los largos años de guerra cuando no hay soluciones políticas, porque permitir que falle la infraestructura crítica, simplemente, no es una opción. Sustituir a las autoridades locales durante decenios en el transporte de agua en camiones cisterna o suministrar equipos médicos a clínicas situadas en sótanos remotos no es una opción.

Por consiguiente, el CICR se esfuerza por evitar el colapso de la infraestructura crítica que, por su importancia, no podemos permitir que se desplome, lo que sumiría a millones de personas en la crisis. Ello supone reparar y rehabilitar la infraestructura y el suministro de piezas, así como ofrecer capacitación y desarrollar capacidades, para los proveedores de servicios locales. Al hacerlo, intentamos mitigar las consecuencias humanitarias, reforzar la resiliencia de los servicios esenciales y frenar el retroceso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Sin embargo, es primordial prevenir esos daños desde el principio. El derecho internacional humanitario ofrece salvaguardias cruciales para garantizar la continuidad de los servicios esenciales durante los conflictos armados. Habida cuenta del enorme sufrimiento de los civiles, surgen serios interrogantes sobre la manera en que las partes en conflicto interpretan y aplican concretamente esas obligaciones, en particular en los entornos urbanos.

Esas normas consisten en la obligación de abstenerse de atacar, destruir, sustraer o inutilizar de algún modo los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil y, de manera más general, la exigencia de tener cuidado constante para evitar que la población civil y los bienes de carácter civil sufran daños en la ejecución de las operaciones militares, y respetar los principios básicos de distinción, proporcionalidad y precaución. Además, incluyen la prohibición de ataques indiscriminados y desproporcionados, la exigencia de tomar todas las precauciones posibles en los ataques y la gestión de sus efectos para proteger a los civiles y los bienes de carácter civil, y el cumplimiento de las normas que buscan proteger el medio natural y limitar los daños causados a este. Hoy pido al Consejo que haga cinco cosas.

En primer lugar, el Consejo debe velar por que todas las partes en los conflictos armados y quienes las apoyan se esfuercen por respetar mejor el derecho internacional humanitario. Eso incluye las normas sobre la conducción de las hostilidades que protegen a los civiles y los bienes de carácter civil, así como la infraestructura crítica que facilita la prestación de servicios esenciales, a fin de proteger al personal civil que opera, mantiene y repara esas infraestructuras.

En segundo lugar, el CICR sigue pidiendo que se adopte una “política de evitación” respecto del empleo de armas explosivas pesadas en las zonas pobladas. Esas armas no deben emplearse contra objetivos en zonas pobladas, a menos que se adopten suficientes medidas de mitigación a fin de reducir los riesgos para los civiles, incluidas las medidas encaminadas a limitar sus efectos de gran alcance. Los manuales, las estrategias y las reglas básicas militares deben adaptarse a las nuevas realidades de la guerra urbana y a una interpretación de las normas del derecho internacional humanitario, que haga justicia no solo a la necesidad militar sino también al principio de humanidad.

En tercer lugar, pedimos a todos los Estados que garanticen que los regímenes de sanciones y las medidas de lucha contra el terrorismo se ajusten al derecho internacional humanitario, en particular a las normas que rigen las actividades humanitarias. Es preciso establecer medidas paliativas eficaces, especialmente exenciones humanitarias duraderas y bien definidas, a fin de que las organizaciones humanitarias imparciales puedan garantizar la continuidad de la prestación de servicios esenciales.

En cuarto lugar, instamos a que se adopten medidas para que la asistencia sanitaria y los servicios interconectados, como el agua, el saneamiento y la electricidad, queden protegidos a fin de evitar los riesgos para la salud pública. Con frecuencia, vemos cómo las enfermedades infecciosas, como las epidemias de cólera, arrasan las comunidades donde las infraestructuras hídricas y de saneamiento han quedado destruidas durante los combates. Las enfermedades prevenibles están costando demasiadas vidas, a medida que las epidemias se propagan más allá de las fronteras de las zonas de guerra.

En quinto lugar, hacemos un llamamiento a los Estados para que adopten medidas que permitan comprender mejor los efectos de los conflictos en el medio ambiente natural y reducir al mínimo las consecuencias de las operaciones militares en el medio ambiente y en la población civil dependiente. Algunos elementos del medio natural son indispensables para la supervivencia de la población civil. Los daños causados a la infraestructura crítica plantean una amplia gama de amenazas al medio ambiente, que a su vez puede tener efectos devastadores en la salud ambiental. Los riesgos climáticos amplifican ahora los daños que sufren las comunidades dependientes.

Acogemos con beneplácito la continuación de los debates con los Estados sobre todas estas recomendaciones. El CICR ha desarrollado un conjunto de conocimientos basados en la práctica para respaldar nuestra experiencia en materia de derecho. Como organización humanitaria, nos hemos enfrentado a los límites de la respuesta humanitaria colectiva ante los graves daños y la destrucción de la infraestructura crítica, así como a su uso indebido por las partes en conflicto.

Si bien las organizaciones humanitarias son expertas a la hora de canalizar la ayuda hacia los más vulnerables, el riesgo que supone para las poblaciones el fallo de un sistema de servicios esenciales es alarmante. Cuando los sistemas fallan, la magnitud de las consecuencias supera con creces lo que la acción humanitaria puede acometer por sí sola.

Reconocer la necesidad de responder a gran escala nos ha llevado a forjar nuevas relaciones, en particular con los agentes en el desarrollo. Junto con el Banco Mundial y el UNICEF, hemos elaborado una serie de recomendaciones conjuntas

para el cambio sistémico en un informe sobre el agua y el saneamiento publicado recientemente, titulado *Joining Forces to Combat Protracted Crises*. Evidentemente, eso no sustituye la necesidad de que las partes beligerantes eviten, ante todo, los daños, la destrucción y el uso indebido de la infraestructura crítica.

Ante esta situación apremiante, hago un llamamiento para que trabajemos juntos, e insto al Consejo a que demuestre su liderazgo a fin de que no se agrave el sufrimiento de los hombres, las mujeres y los niños que han vivido los horrores de la guerra.

Anexo 3

Exposición informativa del Presidente de la Junta Directiva de International Peace Institute, Kevin Rudd

Deseo darles las gracias por haber invitado a International Peace Institute para que informe al Consejo de Seguridad sobre esta cuestión crucial. International Peace Institute se fundó hace más de 50 años en colaboración con el Secretario General U Thant y ha contribuido en gran medida a abordar esta cuestión, tanto aquí en Nueva York como sobre el terreno. Asimismo, quisiera reconocer el liderazgo de Viet Nam al celebrar este debate hoy.

Permítaseme ser claro: atacar bienes indispensables para la supervivencia de la población civil está prohibido en virtud del derecho internacional. Constituye una ofensa a la humanidad y un insulto a las aspiraciones de las Naciones Unidas y al compromiso de sus Miembros en favor de la paz, el desarrollo y los derechos humanos.

El Consejo ha recordado en varias ocasiones la obligación de proteger las infraestructuras civiles esenciales, incluso recientemente al aprobar la resolución 2565 (2021), sobre el acceso a las vacunas contra la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Sin embargo, los ataques, tanto deliberados como involuntarios, contra las infraestructuras humanas vitales y el medio natural siguen siendo una realidad cotidiana. Se trata de una acusación vergonzosa contra todos nosotros, y es importante que el Consejo de Seguridad –como órgano principal encargado de la paz y la seguridad internacionales– siga ocupándose de esta cuestión.

Ejemplos de ello son los repetidos ataques contra las instalaciones médicas e infraestructuras hídricas en el Yemen y el Sahel central, el robo de ganado y la destrucción de proyectos de saneamiento en Sudán del Sur, el corte del suministro de agua en Somalia, la detonación de torres de alta tensión en el Afganistán, la quema de campos de cultivo en el Iraq y Mozambique, los ataques contra los agentes humanitarios en el norte de Nigeria y el Níger y los ciberataques contra los hospitales.

Sin embargo, los ataques contra las infraestructuras civiles esenciales no se limitan a solo un contexto o autor. Se producen en conflictos internacionales y nacionales, en entornos urbanos y rurales, y tanto de forma intencionada como no intencionada. Es un problema que concierne a todas las partes en los conflictos armados, y todos tenemos la responsabilidad de proteger los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil.

El ataque contra infraestructuras y recursos naturales vitales nos afecta a todos: hombres, mujeres, niños y niñas. De manera más inmediata y directa, interrumpe el acceso a los bienes y servicios esenciales. Desde principios de año, la Organización Mundial de la Salud ha registrado más de 160 ataques contra los servicios de salud, es decir, más de un ataque por día. En el Yemen, más de 40 ataques entre 2018 y 2020 dañaron las infraestructuras hídricas, incluidas algunas gestionadas por organizaciones humanitarias, restringiendo así el suministro de agua para 185.000 hogares. Esa destrucción provoca la escasez de alimentos y agua, aumenta los precios y expone a la población, especialmente a los niños, a enfermedades prevenibles y al riesgo de desnutrición. Además, obliga a los niños a abandonar la escuela y genera desplazamientos masivos.

Esos efectos siguen haciéndose sentir en muchos lugares, ya que los recursos naturales y los medios de subsistencia se agotan y los servicios públicos se resienten. Esos efectos se ven agravados por el cambio climático y la degradación del medio ambiente, así como por las situaciones de emergencia de salud pública, en particular la actual pandemia de COVID-19.

Las crisis humanitarias se convierten en crisis de desarrollo, con una necesidad urgente de reconstrucción y rehabilitación de infraestructuras. No obstante, en lugares como el Afganistán y Siria, la prolongada violencia armada limita las posibilidades de reconstrucción. A largo plazo, los ataques contra infraestructuras vitales hacen que los Objetivos de Desarrollo Sostenible sean inalcanzables para millones de personas.

La consiguiente destrucción y las privaciones prolongadas también aumentan las perspectivas de que se produzcan nuevos ciclos de violencia, lo que genera quejas entre las poblaciones afectadas y acentúa los sentimientos de exclusión. La pertenencia a grupos armados a veces ofrece las mejores oportunidades para asegurarse un medio de subsistencia. Esta situación crea las condiciones óptimas para el reclutamiento en los grupos armados y la perpetuación de la violencia armada.

En última instancia, los ataques contra las infraestructuras vitales y los recursos naturales desencadenan un círculo vicioso, ya que socavan la consecución de los derechos humanos básicos, el desarrollo sostenible y la paz.

El sistema de las Naciones Unidas, en particular la Secretaría, tiene un importante papel que desempeñar para promover la protección de las infraestructuras vitales y garantizar un enfoque transversal entre los agentes humanitarios, de desarrollo y de paz. Existen cuatro ámbitos específicos en los que las Naciones Unidas pueden actuar.

En primer lugar, me referiré a la prevención. El Secretario General debe emplear sus buenos oficios para entablar un diálogo con todas las partes en el conflicto armado, incluidos los grupos armados no estatales, para pedirles contención y promover el cumplimiento del derecho de la guerra, recordándoles que la norma de precaución en los ataques exige que los combatientes protejan las infraestructuras civiles y el medio natural. Las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y los equipos en los países pueden apoyar la aprobación de estrategias nacionales para la protección de los civiles, que deben incluir la protección de los bienes de carácter civil vitales y la facilitación de las actividades humanitarias. Cuando sea posible, la prevención debe incluir esfuerzos para fomentar la cooperación sobre los recursos naturales, especialmente la diplomacia del agua, a fin de que esos recursos naturales dejen de ser fuentes de tensión y se conviertan en instrumentos de paz. El llamamiento del Secretario General en favor de un alto el fuego mundial es un paso importante en ese sentido.

En segundo lugar, las propias Naciones Unidas deben velar por la protección de la infraestructura civil, comenzando por el cumplimiento proactivo de la política de diligencia debida en materia de derechos humanos y garantizando que las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz demuestren su preparación en el ámbito de los derechos humanos.

En tercer lugar, la Secretaría –a petición del Consejo de Seguridad– puede estudiar la posibilidad de vigilar sistemáticamente los ataques contra todo tipo de infraestructura esencial. Con ese fin, puede considerar la posibilidad de fomentar las sinergias y ampliar el alcance de los mecanismos existentes, incluidos los de vigilancia de los ataques contra las instalaciones médicas, los trabajadores humanitarios y las escuelas. Disponer de un repositorio de datos sobre los ataques contra todas las infraestructuras esenciales permitirá que los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprendan de los fracasos en las operaciones militares y documenten las atrocidades. Todas estas son medidas necesarias para mejorar la prevención y la protección a largo plazo y, en última instancia, hacer que los autores rindan cuentas de sus actos. De hecho, los Estados deben investigar los ataques contra los bienes de carácter civil, el personal médico y humanitario y, cuando sea necesario, enjuiciar a los autores y asegurar la compensación de la población afectada. Lamentablemente, con demasiada frecuencia, las partes en conflicto no abren ninguna investigación. No podemos seguir haciendo la vista gorda.

Por último, las Naciones Unidas deben continuar trabajando con los asociados internacionales, regionales y nacionales a fin de coordinar un enfoque holístico de la rehabilitación y la reconstrucción. Los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas pueden ayudar a construir una imagen completa de las consecuencias directas e indirectas de las perturbaciones de la infraestructura humana y los recursos naturales esenciales, incluidas sus dimensiones de género y los efectos en el medio ambiente. Esto puede constituir el plan de recuperación y reconstrucción. La reconstrucción exigirá la coordinación entre los sectores humanitario y del desarrollo, en particular por conducto del Comité Directivo Conjunto para Promover la Colaboración en Cuestiones Humanitarias y de Desarrollo. Es necesario un enfoque que abarque todos los pilares con el fin de reforzar la resiliencia.

Sin embargo, las Naciones Unidas no pueden promover con éxito la protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil ni apoyar la reconstrucción sin contar con la voluntad política y los esfuerzos de sus Estados Miembros. Sé muy bien que, como Ministros, esta tarea les corresponde especialmente a todos ustedes.

El Consejo de Seguridad y sus miembros deben tomar la iniciativa de respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario, entre otras cosas, cumpliendo con su obligación de proteger los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil. Eso es lo mínimo, pero produciría el máximo de resultados para la protección de la infraestructura esencial y la mitigación de las consecuencias humanitarias y de desarrollo a largo plazo.

Si el Consejo decide aprobar una decisión general que aborde la protección holística de esos bienes, deberá asegurarse de que esa decisión siga siendo coherente con el derecho internacional. Además, debe salvaguardar un espacio para que los agentes humanitarios actúen sin restricciones en todas sus decisiones futuras, incluidas las relacionadas con la lucha contra el terrorismo y las sanciones.

El Consejo debe recordar también que los recursos naturales son compartidos y pueden ser instrumentos poderosos para la cooperación. La protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil está en el centro del papel del sistema de las Naciones Unidas y de sus Miembros para promover el respeto de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la paz.

Anexo 4**Declaración del Ministro de Relaciones Exteriores de Viet Nam,
Bui Thanh Son**

Deseo dar las gracias a los Sres. Lowcock, Rudd y Maurer por sus exposiciones informativas esclarecedoras y muy prácticas.

A menudo medimos las consecuencias de los conflictos por el número de víctimas directas de la violencia, pero las consecuencias indirectas y a largo plazo de los daños generalizados causados a la infraestructura básica son igualmente destructivas. Por ejemplo, en los conflictos prolongados, es mucho más probable que los niños mueran de enfermedades relacionadas con el agua no apta para el consumo y el saneamiento que a causa de la violencia relacionada con el conflicto.

Viet Nam lo sabe de primera mano. Decenios de guerras dejaron muy poco intacto en nuestro país. Se destruyeron las escuelas, los hospitales, las carreteras, las redes eléctricas y los sistemas hídricos y de saneamiento, y se contaminaron las tierras de cultivo y el medio ambiente.

Lamentablemente, la historia se repite. Las crisis se han proliferado por todas las regiones, desde la República Centroafricana, Sudán del Sur y Libia, hasta el Afganistán, el Yemen y Siria. Sin una infraestructura básica ni servicios esenciales, millones de personas, sobre todo mujeres y niños, se ven desplazadas y sometidas al hambre, a la enfermedad y a una sombría perspectiva de retorno, reasentamiento y recuperación. Los efectos de la destrucción de la infraestructura básica persiste mucho más allá del fin de los conflictos, lo que dificulta el desarrollo sostenible de las comunidades y las naciones.

La protección de los civiles ha estado en la primera línea de la labor del Consejo de Seguridad. No obstante, la mayoría de las veces, los debates del Consejo se han centrado en la protección de las personas, prestando poca atención a la garantía de los medios para su supervivencia.

Por consiguiente, el debate abierto de hoy es una buena oportunidad para que el Consejo delibere sobre esta cuestión a nivel temático, y espero que esto sea solo el comienzo. Es fundamental que el Consejo elabore una estrategia para proteger eficazmente la infraestructura y los bienes indispensables para la supervivencia de los civiles en los conflictos armados. Esa estrategia debe ser amplia y holística, y debe basarse en el cumplimiento y las alianzas. Permítaseme explicar con detalles.

En primer lugar, el Consejo debe hacer hincapié en el cumplimiento. Todas las partes en los conflictos, especialmente los Estados Miembros, deben adherirse a los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Deben cumplir el derecho internacional humanitario, en particular los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, así como la prohibición de atacar o destruir bienes indispensables para la supervivencia de la población civil. Las partes deben tener plenamente en cuenta los efectos a largo plazo de la infraestructura dañada en la supervivencia de la población civil y el medio ambiente.

En segundo lugar, la infraestructura básica, por naturaleza, está interconectada. La destrucción de la generación de energía y las redes eléctricas, por ejemplo, puede inutilizar las instalaciones hídricas y de saneamiento, lo que a su vez afecta al funcionamiento de los hospitales y las instalaciones de producción alimentaria.

Por lo tanto, es fundamental que el Consejo tenga en cuenta el carácter interconectado de los bienes y garantice la adopción de medidas para proteger todos los sistemas, y no solo los bienes individuales. También es importante proteger al personal esencial para el funcionamiento de esos sistemas y garantizar que los materiales y el equipo necesarios para su mantenimiento y reparación puedan llegar a su destino.

En tercer lugar, la cooperación y la alianza siguen siendo fundamentales a la hora de apoyar la recuperación y fomentar la resiliencia de los civiles en los conflictos armados. El Consejo debe alentar y facilitar una coordinación más estrecha entre los Estados Miembros, las organizaciones internacionales y los asociados humanitarios y para el desarrollo en la consolidación de la paz después de los conflictos, sobre todo en los esfuerzos encaminados a reconstruir la infraestructura básica y restablecer los servicios esenciales para la población civil. Esto podría desempeñar un papel crucial a la hora de salvar la vida de los civiles y proporcionarles apoyo a largo plazo.

Por último, la mejor manera de proteger a los civiles es prevenir los conflictos. Hay que abordar las causas fundamentales de los conflictos, como la pobreza, la injusticia, las políticas de poder y el incumplimiento del derecho internacional. La implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible debe seguir guiando los esfuerzos nacionales e internacionales para no dejar a nadie atrás.

La resolución 2573 (2021), presentada por Viet Nam y que se someterá a aprobación al final de la sesión de hoy, constituye el núcleo de esa estrategia. Espero que impulse la agenda para la protección de los civiles de manera más sostenible para hacer frente a un mundo cada vez más turbulento. Damos las gracias a los Estados Miembros de las Naciones Unidas por el enorme apoyo que prestaron durante la negociación del texto.

La paz puede significar muchas cosas diferentes, pero para los civiles, la paz se concreta en los elementos más fundamentales: la alimentación, el agua, el saneamiento, la atención médica y la educación. En nuestro debate de hoy hemos abordado la propia esencia de la paz a los ojos de los civiles.

Ha llegado el momento de que la comunidad mundial, empezando por el Consejo de Seguridad, acerque sus esfuerzos a las necesidades de los que se encuentran atrapados en la devastación de las guerras. Es hora de que apliquemos un enfoque que sea holístico y resiliente a fin de crear los cimientos de una paz y un desarrollo sostenibles.

Anexo 5**Declaración de la Ministra de Relaciones Exteriores de Estonia, Eva-Maria Liimets**

Deseo saludarlos cordialmente a usted, Sr. Presidente, y al pueblo de Viet Nam. Asimismo, acojo con agrado la participación de los Sres. Lowcock, Maurer y Rudd en esta sesión y les doy las gracias por sus exhaustivas exposiciones informativas.

Acogemos con beneplácito el tema de debate de hoy. Estonia ha situado el orden internacional basado en normas y el cumplimiento del derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, en el centro de su labor en el Consejo de Seguridad.

Ante todo, es importante señalar que corresponde a los Estados la responsabilidad primordial de garantizar la protección de su población. Eso incluye la protección que el derecho internacional humanitario confiere a los bienes esenciales para la supervivencia de la población civil, como los alimentos, el agua y los suministros médicos.

Lamentablemente, en el transcurso de la labor del Consejo de Seguridad, a medida que seguimos conociendo casos de incumplimiento, se nos recuerda una y otra vez que, con demasiada frecuencia, en la vida real, se incumple el marco normativo para la protección de los civiles.

La pandemia también añade un nuevo nivel de riesgos. Reitero el apoyo de Estonia al llamamiento del Secretario General en favor de un alto el fuego mundial durante la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), y a la resolución 2565 (2021), que aprobamos por unanimidad en febrero.

Los civiles, en particular los más vulnerables –las mujeres, los niños y los adolescentes– siguen viéndose afectados de manera desproporcionada por los conflictos.

Recuerdo la situación en Ucrania, donde 1,5 millones de desplazados internos se han visto obligados a abandonar sus hogares, y quisiera mencionar también los 2 millones de desplazados internos en el Sudán y los 6,2 millones de desplazados internos en Siria. A menudo, el retorno y el reasentamiento de las comunidades desplazadas se ven obstaculizados por la destrucción de los bienes esenciales y la disrupción de los servicios básicos.

Si bien el Consejo de Seguridad ha condenado la práctica de hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra, es necesario hacer más para ayudar a las personas sobre el terreno.

El conflicto en Tigré (Etiopía), ha obligado a 1,7 millones de personas a abandonar sus hogares para buscar protección y alimentos. Teniendo en cuenta los combates que se están librando, será imposible plantar las semillas para la próxima temporada. Eso dificultará aún más la seguridad alimentaria a largo plazo.

En el Afganistán, debido a la pobreza, la pandemia de COVID-19 y el conflicto actual, casi la mitad de los niños menores de 5 años padecen malnutrición aguda. En marzo, 17 millones de personas experimentaban los niveles más altos de inseguridad alimentaria, la segunda peor situación de este tipo en el mundo.

No estamos haciendo lo suficiente. En el plano internacional, también es necesario prestar la debida atención a los nuevos elementos: la urbanización cada vez mayor de los conflictos armados, el cambio climático y las consecuencias ambientales de los conflictos armados. Las nuevas tecnologías pueden ayudar a encontrar formas de mejorar la asistencia humanitaria.

Al mismo tiempo, seguimos observando actividades cibernéticas malintencionadas, que tienen como objetivo la infraestructura civil crítica, como la electricidad, el agua, el saneamiento y la atención de la salud. Como hemos dicho en el Consejo, el derecho internacional también se aplica en el ciberespacio. Las obligaciones derivadas del derecho internacional humanitario rigen las actividades de los Estados en los conflictos a fin de proteger a los civiles y la infraestructura civil. El derecho actúa para limitar el conflicto, no para facilitarlo.

A la hora de reconstruir para mejorar después de la pandemia, será fundamental reforzar la resiliencia tanto de los bienes indispensables como de los servicios esenciales, incluso mediante la creación de capacidad relacionada con la cibernética. Estoy seguro de que la ciberseguridad debe formar parte tanto de la prevención como de la solución de los conflictos.

La acción urgente que debemos emprender es doble.

En primer lugar, los Estados deben reforzar su capacidad para proteger con mayor eficacia a los civiles en tiempos de guerra. Es preciso capacitar al personal nacional y de las Naciones Unidas en materia de derecho internacional humanitario, lo cual se ha demostrado que arroja resultados positivos.

En segundo lugar, debemos asegurarnos de que nadie esté por encima de la ley. Ningún perpetrador debe escapar de la justicia. Los Estados tienen la responsabilidad de ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales y contar con la legislación nacional pertinente.

Cuando los Estados no cumplen con esa responsabilidad, la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad deben intervenir. El Consejo debe cumplir su mandato de detener las atrocidades y restablecer la justicia. La inacción del Consejo en situaciones en las que se cometen atrocidades dice mucho al respecto. Insto al Consejo de Seguridad a que haga uso de su facultad de remitir causas a la Corte Penal Internacional, cuando sea necesario.

Por último, permítaseme asegurarles que Estonia mantiene su compromiso en favor de la protección de los civiles a través de sus actividades a nivel nacional, regional e internacional, incluso aquí en el Consejo. Les deseo mucho éxito en sus esfuerzos por sensibilizar, mediante este debate, sobre la necesidad crucial de proteger a los civiles y los bienes esenciales durante los conflictos.

Anexo 6**Declaración del Ministro de Relaciones Exteriores y Defensa de Irlanda, Simon Coveney**

Doy las gracias a Viet Nam por haber organizado el debate de hoy sobre este importante tema. Asimismo, quisiera dar las gracias a Mark Lowcock, Peter Maurer y Kevin Rudd por haber compartido con nosotros su testimonio como expertos.

Han pasado 22 años desde que el Consejo de Seguridad aprobó la agenda de protección de los civiles por medio de la resolución 1265 (1999). Desde entonces, el Consejo ha fomentado una cultura de protección, que reconoce el carácter interconectado de los riesgos para los civiles en los conflictos armados.

Celebro que se haya aprobado la resolución 2573 (2021) sobre esta cuestión crítica que, trágicamente, estamos abordando cada vez con mayor frecuencia.

La destrucción de los bienes de carácter civil indispensables o los daños causados a estos, como los sistemas de alimentación, hídricos, de saneamiento, de atención de la salud y de educación –y la infraestructura de información crítica que los sustenta– tienen efectos devastadores. Más civiles mueren por esas causas indirectas del conflicto que por la propia violencia. También sabemos que las consecuencias pueden durar generaciones, lo cual dificulta aún más los caminos hacia la paz y la reconstrucción de las sociedades.

No debería ser así. El derecho internacional prohíbe, desde hace mucho tiempo, los ataques contra los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, por lo que es una dura crítica de nuestro mundo que el Consejo tenga que recordar a las partes en conflicto esa prohibición y rogarles que no priven a las poblaciones civiles de la alimentación, el agua, y la infraestructura básica que necesitan para su existencia diaria. Por consiguiente, debemos preguntarnos: ¿qué es lo que podemos hacer para proteger mejor a los civiles y los servicios esenciales que necesitan en las situaciones de conflicto armado?

Quisiera centrarme hoy en tres aspectos concretos a este respecto.

En primer lugar, debemos apoyar los sistemas alimentarios y proporcionar seguridad alimentaria. La resolución 2417 (2018), que el Consejo aprobó por unanimidad, es clara en cuanto a los vínculos que existen entre el conflicto, la destrucción de bienes de carácter civil y la inseguridad alimentaria. Durante los conflictos, la destrucción de los bienes que sustentan la producción agrícola y los medios de subsistencia no solo produce hambre, sino que también puede ser un factor de desplazamientos a largo plazo y otras consecuencias desestabilizadoras.

Cuando se derriban los molinos, las granjas, las viviendas y los graneros; cuando se confiscan y se queman los cultivos, los pastos y el ganado; cuando se destruyen o profanan las fuentes de abastecimiento de agua, estamos en el camino de la inanición, la hambruna y la migración forzosa.

Hacer padecer hambre a la población civil es un método de combate y se debe prohibir. Por consiguiente, tenemos la clara responsabilidad de proteger los bienes de carácter civil que actúan como baluarte contra la hambruna. Una dimensión añadida, como señala el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), es que, en la actualidad, la crisis climática define la forma en que las comunidades afectadas por el conflicto perciben su entorno natural. Esta convergencia de la crisis climática, la degradación del medio ambiente y los conflictos armados puede tener consecuencias humanitarias profundas y a largo plazo.

En segundo lugar, los efectos perjudiciales que tienen los conflictos en la salud se ven exacerbados por la obscena práctica de atacar las instalaciones y el personal médicos. Nunca se insistirá lo suficiente en el carácter indispensable de

las instalaciones médicas, los activos médicos y el personal sanitario en tiempos de conflicto. Su condición de protegidos en los conflictos armados está consagrada de manera inequívoca en el derecho internacional humanitario.

Sin embargo, hemos sido testigos de la atroz situación de los médicos en Alepo, que se ven obligados a trabajar en túneles subterráneos. Médicos Sin Fronteras y el CICR informan de frecuentes ataques contra las instalaciones y el personal médicos, como ocurrió recientemente en el Afganistán, la República Democrática del Congo, Etiopía y el Sudán.

Los ataques contra las instalaciones médicas se han convertido en algo demasiado común y como dijo con razón el ex Secretario General “cuando los llamados ataques quirúrgicos acaban destruyendo pabellones quirúrgicos, hay algo que no funciona muy bien” (*S/PV.7685, pág. 3*).

Los ataques contra las infraestructuras médicas privan a los enfermos, los heridos, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, los ancianos y los jóvenes de su dignidad más fundamental y de cuidados y una asistencia vitales cuando quizá más los necesitan.

Asimismo, nos preocupa cada vez más el hecho de que las ciberoperaciones se están convirtiendo en elementos del conflicto que pueden interrumpir el funcionamiento de la infraestructura crítica y los servicios vitales para la población civil, incluidas las instalaciones sanitarias y médicas que son vulnerables a los ciberataques.

La destrucción y ocupación de las escuelas por parte de las fuerzas armadas representa un ataque a los niños y a nuestro futuro colectivo. Esto es especialmente cierto en los conflictos prolongados como los de Siria y el Yemen, donde se está privando de educación a una generación de niños. Estos niños están creciendo sin las competencias que necesitan para contribuir a sus países y economías, exacerbando así situaciones ya desesperadas. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para evitar la destrucción de escuelas y hospitales en los conflictos.

En tercer lugar, con respecto al empleo de armas explosivas en las zonas pobladas, a Irlanda le siguen preocupando gravemente sus efectos y los daños causados a los civiles durante las hostilidades activas en las zonas pobladas.

Año tras año, el Secretario General informa de que más del 90 % de los muertos y los heridos a causa del empleo de armas explosivas en las zonas pobladas son civiles. Está bien documentado que la forma en que se emplean las armas explosivas en las zonas pobladas tiene efectos devastadores a corto y largo plazos. La pérdida generalizada de vidas y las lesiones físicas y psicológicas infligidas a los civiles, simplemente, son inaceptables.

Revisten especial pertinencia para el debate de hoy los efectos de las armas explosivas en las zonas pobladas sobre la infraestructura crítica, como carreteras, hospitales e instalaciones sanitarias. Esa infraestructura es fundamental para satisfacer las necesidades humanitarias inmediatas y para el desarrollo después del conflicto.

Por esos motivos, Irlanda dirige las negociaciones en Ginebra sobre una declaración política para abordar las consecuencias humanitarias derivadas del empleo de armas explosivas en las zonas pobladas. Se han logrado avances satisfactorios y estamos decididos a concluir una declaración que redundará en cambios positivos. Espero poder contar con el apoyo de mis colegas para lograrlo.

Por último, quisiera hacer una breve referencia a la necesidad de proteger los bienes culturales en los conflictos armados. La base jurídica de la protección es sólida, pero la necesidad de protección es incuestionable. La guerra es el enemigo del arte, de la cultura, de los monumentos y de nuestro patrimonio cultural. Los

bienes culturales reflejan la identidad de la población, su cultura y su patrimonio, y preservarlos –reconstruyendo las comunidades destruidas– puede ser un elemento importante en el camino hacia la paz.

Los terribles sufrimientos infligidos a los civiles se reducirían considerablemente si las partes en los conflictos cumplieran con sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Un desafío acuciante sigue siendo garantizar la rendición de cuentas por violaciones graves del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. El Consejo de Seguridad tiene la función de llamar la atención a los Estados y agentes que no cumplen con sus obligaciones y responsabilidades jurídicas, así como sus responsabilidades morales. Cuando el Consejo no lo hace, debemos estar dispuestos a aceptar que, en parte, también somos responsables de su fracaso.

Anexo 7**Declaración de la Representante Permanente de los Estados Unidos de América y miembro del Gobierno del Presidente Biden, Linda Thomas-Greenfield**

Doy las gracias al Ministro de Relaciones Exteriores de Viet Nam por haber puesto en el centro de la atención del Consejo de Seguridad este importante aspecto de la agenda de protección de los civiles. Acogemos con satisfacción los esfuerzos de Viet Nam respecto de la resolución 2573 (2021), que acompaña a este debate abierto, y nos enorgullece apoyarla. Asimismo, quisiera dar las gracias a nuestros ponentes por su completa y honesta exposición informativa sobre el desafío que supone la protección de la infraestructura civil en las situaciones de conflicto.

Nuestra misión –promover la paz y la seguridad– tiene que situar a las personas en primer lugar. Esa es la razón por la que estamos aquí: para proteger su vida, su dignidad y su bienestar. Si bien no hemos hablado antes tan extensamente de la cuestión específica de la infraestructura civil, me complace que lo hagamos ahora porque no es una exageración decir que todas las personas del mundo dependen de su sistema de infraestructura civil. No obstante, con demasiada frecuencia, agentes armados atacan esos servicios básicos. Debemos asegurarnos de que rindan cuentas, sobre todo cuando violan el derecho internacional humanitario.

Imaginen que su granja fuera destruida intencionalmente, que las tuberías de agua fueran contaminadas o dañadas de manera intencional, que las instalaciones sanitarias de su comunidad fueran el objetivo de un bombardeo. Imaginen que la población civil se viera obligada a abandonar sus hogares y comunidades para encontrar electricidad, agua corriente o suministros alimentarios suficientes en una búsqueda a menudo ardua y con demasiada frecuencia mortífera.

Esto no es algo hipotético; está ocurriendo ahora mismo en Tigré (Etiopía). Allí, los combates han diezmado los sistemas de comunicaciones civiles, han estropeado las redes eléctricas y han saqueado y destruido los hospitales protegidos. Para satisfacer sus necesidades básicas, la población de Tigré se ha visto obligada a huir y recorrer largas distancias, enfrentándose a menudo a amenazas de violencia, en particular la violencia sexual y de género. Sencillamente, esto es intolerable. Debe ponerse fin de inmediato a las hostilidades en Tigré.

Durante los conflictos, las escuelas y otros edificios públicos son esenciales por ser lugares en los que los niños pueden estar seguros. Esos edificios pueden funcionar como refugios, espacios para que las comunidades vuelvan a conectarse o lugares para la distribución de ayuda y servicios. Por eso, cuando esos edificios esenciales y protegidos son atacados deliberadamente, ello tiene efectos singulares y devastadores en las mujeres, los cuidadores y las familias. Cuando los agentes armados ocupan un centro de salud, las mujeres y las niñas que necesitan atención materna suelen morir como consecuencia de ello.

Una vez más, esto no es hipotético, está ocurriendo ahora mismo en Siria, donde el régimen de Al-Assad –con ayuda documentada de Rusia– ha devastado la infraestructura civil del país y ha desplazado a más de la mitad de la población con su campaña de atrocidades. Han atacado y destruido escuelas, hospitales, mercados, comunidades residenciales y lugares de culto protegidos. Ya vimos la depravación de ese régimen el 21 de marzo, cuando se destruyó el Hospital Quirúrgico de Atarib, en Alepo. Dieciséis personas resultaron heridas, la mayoría de ellas profesionales médicos. Seis pacientes murieron, entre ellos un niño.

Cuando las infraestructuras civiles son objeto de ataques intencionados, los agentes humanitarios también suelen llevarse la peor parte. Cuando se destruyen carreteras y puentes, cuando los establecimientos de salud son objeto de bombardeos, la capacidad de proporcionar el socorro y los suministros tan necesarios a quienes se encuentran en circunstancias difíciles se ve disminuida o denegada.

Por desgracias, eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo en el Yemen, donde la violencia que infligen todas las partes en el conflicto ha destruido escuelas, hospitales y mercados. Solo entre marzo de 2015 y marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud registró 142 ataques contra establecimientos de salud. La situación en el Yemen es la peor crisis humanitaria del mundo. No obstante, los trabajadores humanitarios que intentan ayudar, es decir, los bienhechores que arriesgan su vida o su integridad física para salvar a los demás, ven obstaculizada su labor debido a los ataques contra las infraestructuras básicas. Se trata de algo horrible y que no está bien. Debemos proteger a los civiles demostrando que haremos rendir cuentas a los agentes perniciosos cuando violen el derecho internacional humanitario.

Así pues, recordemos hoy nuestro deber. La Carta de las Naciones Unidas exige que mantengamos la paz y la seguridad internacionales. Ello implica proteger tanto a los civiles como los sistemas y las infraestructuras que les sirven de sustento.

Anexo 8**Declaración del Viceministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Jens Frølich Holte**

Quisiéramos dar las gracias a Viet Nam por haber organizado este debate y a los ponentes por preparar el terreno. La destrucción de las infraestructuras civiles tiene consecuencias devastadoras para la población civil, y acogemos con beneplácito la resolución 2573 (2021), que se ha aprobado hoy.

El carácter prolongado de los conflictos actuales, la repercusión del uso de armas explosivas en zonas pobladas y el uso malicioso de las nuevas tecnologías agravan ese problema. Hemos constatado con toda claridad que la falta de protección de la población civil y de las infraestructuras civiles fundamentales tiene ramificaciones humanitarias inmediatas y efectos a largo plazo para las personas y las comunidades.

La protección de las escuelas y universidades es esencial. El derecho a la educación debe defenderse tanto en tiempos de paz como en tiempos de conflicto armado. La educación protege a los niños y a los jóvenes frente a una gran variedad de violaciones y amenazas para su salud y su vida, como la violencia sexual y de género y el reclutamiento y la utilización por parte de las fuerzas y los grupos armados. Cada vez más, los centros educativos son objeto de ataques o se usan con fines militares. Se trata de una tendencia inaceptable y peligrosa, que dificulta el acceso seguro y el disfrute del derecho a la educación. Todos debemos tomar medidas para reforzar la protección de la educación en situaciones de conflicto. Por lo tanto, alentamos a todos los Estados a que se sumen a los 107 que ya han respaldado la Declaración sobre Escuelas Seguras y que están trabajando de consuno para aplicarla.

Los ataques cometidos contra los establecimientos, el personal y los medios de transporte sanitarios son inaceptables. Se están destruyendo las instalaciones y se está matando, mutilando o desplazando tanto a los pacientes como al personal. La destrucción de los sistemas de abastecimiento de agua y electricidad afecta a la salud de la población y a la calidad de los servicios de salud. Los servicios esenciales se desmoronan y desaparecen. Como ha demostrado la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), eso tiene consecuencias inmediatas sobre las personas y sus comunidades y una repercusión mundial sobre la salud. Ahora, más que nunca, debemos garantizar la protección de las infraestructuras sanitarias, en particular para poder responder a la pandemia de COVID-19 y a los brotes similares que puedan surgir. Pedimos la plena aplicación de las resoluciones 2286 (2016) y 2565 (2021).

Debemos reforzar la protección de los civiles frente a los daños humanitarios causados por el uso de armas explosivas en zonas pobladas. Respaldamos el liderazgo de Irlanda en la negociación de lo que esperamos que sea una declaración política sólida, una declaración que aliente a las partes en conflicto a que minimicen el uso de esas armas y a que elaboren políticas y prácticas que refuercen la aplicación del derecho internacional humanitario y aumenten la protección de los civiles en los conflictos armados.

La destrucción de las infraestructuras conduce a la degradación ambiental. Algunos ejemplos de destrucción que causa daños a largo plazo en el medio ambiente son Siria, donde se han ocasionado daños a las refinerías de petróleo y se ha producido la destrucción de los sistemas de gestión de agua y desechos; el Yemen, que ha sufrido la destrucción de las instalaciones de agua y saneamiento, y Tigré, donde las tierras de cultivo han quedado calcinadas.

En muchas zonas afectadas por conflictos, la degradación ambiental, unida a los efectos del cambio climático, tiene consecuencias devastadoras sobre la seguridad alimentaria, la salud y los medios de vida. En ese contexto, las Directrices sobre la

Protección del Medio Natural en los Conflictos Armados del Comité Internacional de la Cruz Roja son un instrumento útil que prevé una serie de medidas concretas. Conscientes de la magnitud y las consecuencias de esa cuestión, acogemos con satisfacción la oportunidad de debatirla en el Consejo de Seguridad.

Recordamos la resolución 2417 (2018), que vincula los conflictos armados, la inseguridad alimentaria originada por los conflictos y la amenaza de hambruna, y exhortamos a todas las partes a que prescindan de la infraestructura necesaria para la producción y distribución de alimentos. La práctica intencionada de hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra es un crimen de guerra. Instamos a los Estados partes en el Estatuto de Roma a que ratifiquen la reciente modificación para tipificar como crimen de guerra la práctica de hacer padecer hambre en los conflictos armados no internacionales.

Las operaciones cibernéticas hostiles que se llevan a cabo durante los conflictos armados plantean una grave amenaza para los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil y la prestación de servicios esenciales. Reafirmamos que el derecho internacional humanitario se aplica a ese respecto.

Básicamente, para proteger de verdad a la población civil, todas las partes en los conflictos armados deben respetar y aplicar plenamente las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional humanitario. Se debe poner fin a la impunidad de toda violación. Todos los Estados deben investigar, dentro de su jurisdicción, los ataques cometidos contra civiles y bienes de carácter civil, en particular contra los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil. Los responsables deben rendir cuentas.

Esperamos salir de este debate reconociendo de manera conjunta la necesidad de respaldar la rehabilitación humanitaria de las infraestructuras. La acción humanitaria orientada a mantener y reparar los bienes y las infraestructuras de carácter civil indispensables es fundamental para la supervivencia de la población civil. Reforzar la protección de los civiles y las infraestructuras civiles también es una parte importante para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular en materia de salud, educación, seguridad alimentaria, paz y justicia.

Durante los conflictos, la protección de los civiles y las infraestructuras civiles que prestan servicios esenciales puede determinar las perspectivas de lograr una paz y una reconciliación sostenibles. Afecta a la capacidad de garantizar el regreso voluntario y digno y la reintegración de las personas desplazadas y de evitar que el conflicto se repita. Recordamos las palabras del Secretario General Guterres en el debate de 2018 sobre la protección de los civiles: “[P]roteger a los civiles en los conflictos es [...] la única forma de echar los cimientos de una paz sostenida” (*S/PV.8264, pág. 3*). En resumen, solo se puede lograr una paz satisfactoria si la protección también lo es.

Anexo 9**Declaración del Viceministro de Relaciones Exteriores
de la Federación de Rusia, Sergey Vershinin**

[Original: ruso]

Para comenzar, permítaseme expresar mi agradecimiento al Ministro de Relaciones Exteriores de la República Socialista de Viet Nam, Sr. Bui Thanh Son, por haber convocado este debate del Consejo de Seguridad sobre un tema muy apremiante: “La protección de los civiles en los conflictos armados: bienes de carácter civil indispensables”.

Asimismo, damos las gracias a la Misión de Viet Nam por haber redactado un texto temático equilibrado para la resolución 2573 (2021). En general, el documento refleja los planteamientos respaldados por la comunidad internacional sobre la cuestión que examinamos hoy.

La protección de la infraestructura civil en los conflictos armados es un elemento inalienable del derecho internacional humanitario. En particular, en las disposiciones de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977 se aborda esta cuestión. También se menciona en varias resoluciones del Consejo de Seguridad aprobadas con anterioridad, en particular en la resolución 2417 (2018), relativa a la protección de los civiles.

Partimos de la base de que cualquier ataque deliberado contra la población civil o las instalaciones civiles indispensables es inaceptable. Esas instalaciones abarcan las reservas de alimentos, los cultivos, el ganado, el agua potable y los sistemas de riego, así como otros elementos de la infraestructura crítica. Permítaseme subrayar que, de conformidad con el derecho internacional humanitario, todas las partes en los conflictos armados deben diferenciar entre la población civil y los combatientes, así como entre las instalaciones civiles y las militares. La comunidad internacional debe cooperar para restablecer las infraestructuras dañadas y prestar asistencia oportuna a los países afectados por los conflictos. Consideramos que las Naciones Unidas, junto con otras organizaciones internacionales y regionales, desempeñan un papel importante en ese sentido. No obstante, esa asistencia solo debe prestarse a petición del Estado afectado.

En ese contexto, quisiéramos destacar concretamente la situación de Siria, que ya se ha mencionado durante este debate. La situación actual en ese país demuestra con claridad que los sirios necesitan ayuda urgente para restaurar la infraestructura civil crítica y una asistencia integral, sin politización ni condiciones previas.

Pese a una cierta estabilidad pertinente sobre el terreno, la situación humanitaria en Siria se ha deteriorado peligrosamente con el telón de fondo de un conflicto prolongado, la crisis económica, la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y las sanciones unilaterales que los Estados Unidos de América y la Unión Europea han impuesto a los sirios. Según los datos facilitados por los organismos humanitarios que trabajan sobre el terreno en Siria, la producción de energía ha disminuido en un 70 % y la de agua potable entre un 30 % y un 40 %, mientras que el número de sistemas de riego se ha reducido a la mitad en comparación con las cifras de 2011. Al parecer, la interrupción de las infraestructuras críticas de agua y energía tendrá efectos devastadores para millones de sirios, desde el riesgo de epidemias y desastres ambientales hasta otra migración masiva. Por no hablar de la construcción de edificios residenciales y la renovación de escuelas y hospitales, que constituyen actividades fundamentales para crear las condiciones adecuadas para el regreso de los refugiados y desplazados internos.

El efecto devastador de las sanciones unilaterales merece un comentario aparte. No solo causan un desastre humanitario para los sirios de a pie, sino que provocan deliberadamente consecuencias negativas para los organismos especializados, al obstaculizar las transacciones financieras y la importación de medicamentos y piezas de repuesto a Siria. He aquí un ejemplo de ello: mientras que antes de la guerra Siria fabricaba la mayoría de los medicamentos en su país y los exportaba a 23 países, ahora depende casi por completo de las entregas de ayuda médica externa.

Las sanciones antisirias se agravan a pesar de que el Secretario General pidió que se eliminaran las restricciones durante la pandemia de COVID-19. Según los datos facilitados por las Naciones Unidas, el 90 % de la población siria vive por debajo del umbral de la pobreza y el 70 % no tiene acceso a los alimentos. Al mismo tiempo, las restricciones no impiden que los estadounidenses que ocupan los campos petrolíferos y las tierras de cultivo en el nordeste de Siria intensifiquen el contrabando y el comercio ilegal de petróleo y cereales.

Otro hecho que cabe mencionar es que las sanciones occidentales no solo abarcan la región del trans-Éufrates, sino también la de Idlib, que se sabe que está bajo el control de Hay'at Tahrir al-Sham, incluido por el Consejo de Seguridad en la lista de grupos terroristas. Los Estados occidentales piden que se refuercen las entregas de asistencia humanitaria a esas zonas, sobre las que Damasco no tiene ningún control, y, además, piden que se haga a través del mecanismo transfronterizo y no a través del Gobierno sirio, a pesar de que ese mecanismo socava la soberanía y la integridad territorial de Siria, así como los principios rectores de la asistencia humanitaria que se contemplan en la resolución 46/182 de la Asamblea General.

Hacemos un llamamiento a los miembros responsables de la comunidad internacional para que se sumen a los amplios esfuerzos humanitarios de Rusia en las actividades relativas a las minas, la restauración de las instalaciones educativas y médicas y los edificios residenciales, la reconstrucción de las carreteras y las líneas eléctricas y el suministro de alimentos y asistencia médica.

Expresamos nuestro profundo agradecimiento al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como a las sociedades nacionales pertinentes. La asistencia humanitaria imparcial merece el mayor de los elogios. Rusia sigue cooperando con esos órganos, en particular mediante el patrocinio de programas en Siria, Nagorno Karabaj y Ucrania.

Anexo 10**Declaración de la Ministra de Estado a cargo de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de San Vicente y las Granadinas, Keisal M. Peters**

San Vicente y las Granadinas da las gracias a Viet Nam por haber convocado este oportuno debate abierto y, además, hace extensivo su agradecimiento a los ponentes por sus perspicaces observaciones.

La prohibición de atacar, destruir, sustraer o inutilizar bienes indispensables para la supervivencia de la población civil continúa siendo un principio básico del derecho internacional humanitario consagrado en los Convenios de Ginebra. Los objetivos militares nunca deben tener prioridad sobre la protección de los civiles y las infraestructuras civiles. Con demasiada frecuencia, tanto los agentes estatales como los no estatales han violado principios bien asentados del derecho de los conflictos armados, en particular los de distinción, proporcionalidad y precaución.

Las sanciones y las medidas mal planteadas de lucha contra el terrorismo siguen obstaculizando tanto el desarrollo como el acceso humanitario en muchos lugares, lo que causa un sufrimiento incalculable a la población local en un intento de lograr objetivos políticos estrechos. Sin duda, las operaciones de lucha contra el terrorismo son a veces necesarias para proteger a las personas y preservar la soberanía, la unidad y la integridad territorial de un país. No obstante, tanto las sanciones como las medidas de lucha contra el terrorismo deben respetar todos los principios del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

Las repercusiones socioeconómicas de los conflictos armados suelen dar lugar a crisis humanitarias peligrosas. Cuando se combinan con el cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos y la degradación ambiental, esos conflictos tienen enormes repercusiones sobre la población civil, en particular sobre las mujeres y los niños, y van más allá, lo que impide la recuperación general de los países afectados.

Hemos visto la realidad de esas repercusiones en todos los conflictos prolongados que figuran en el programa del Consejo de Seguridad. En el Yemen, el sistema de salud está paralizado y solo la mitad de los centros están operativos, lo que hace que el país no esté preparado para combatir la pandemia de enfermedad por coronavirus. La situación reviste una gravedad similar en Siria, donde diez años de guerra han hecho que más de 13 millones de sirios necesiten formas multidimensionales de asistencia humanitaria, sobre todo alojamiento, debido a los desplazamientos masivos, y atención sanitaria básica. En las zonas de Somalia afectadas por los conflictos, se han destruido las infraestructuras de agua y saneamiento, lo que reduce el acceso al agua limpia y aumenta el riesgo de padecer enfermedades prevenibles, como el cólera. La destrucción causada por los ataques deliberados e indiscriminados obstaculiza los esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La destrucción de los recursos necesarios para la actividad civil, la vida y la producción está causando un sufrimiento insoportable a demasiadas personas en todo el mundo. Los civiles y las infraestructuras civiles recibirán la protección que merecen solo si se respetan los principios del derecho internacional de manera estricta. Exhortamos a todas las partes en conflicto a que salvaguarden los puntos de abastecimiento de agua, los centros de atención de la salud y otras infraestructuras esenciales que se necesitan para reducir las vulnerabilidades y promover el desarrollo. Asimismo, se debe dar prioridad a la rehabilitación de las infraestructuras ya devastadas con el fin de aliviar la grave situación humanitaria. En ese sentido, continuamos alentando a la comunidad internacional a que contribuya a la restauración de las infraestructuras críticas en los países afectados por los conflictos.

armados, sin las cuales millones de personas se verán obligadas a seguir dependiendo de la asistencia humanitaria para cubrir sus necesidades básicas. La reconstrucción también es un elemento necesario que facilita el regreso seguro, voluntario y digno de los refugiados y desplazados internos a sus lugares de origen.

Los actos que contravienen el derecho internacional no deben tolerarse en ninguna circunstancia y deben ser condenados por la comunidad internacional. El vínculo entre la justicia y la paz está reconocido desde hace mucho tiempo. Por ello, reiteramos nuestro llamamiento para que los autores de esos actos abominables rindan cuentas.

Los civiles de todo el mundo han sufrido como consecuencia de una dinámica geopolítica sobre la que no tienen ni influencia ni control. Por ello, instamos a las partes en conflicto a que demuestren la voluntad política necesaria para lograr una paz y una estabilidad duraderas. El Consejo tiene la responsabilidad de defender a las víctimas de los conflictos armados. Debemos seguir alzando la voz para garantizar su protección y asegurarnos de que la comunidad internacional cumple con sus responsabilidades jurídicas y morales para salvaguardar la supervivencia de las personas afectadas por los conflictos en todo el mundo.

Anexo 11**Declaración del Representante Permanente de China ante las Naciones Unidas, Zhang Jun**

[Original: chino e inglés]

China le da de nuevo la bienvenida, Su Excelencia, como Presidente de la sesión del Consejo de Seguridad y agradece la iniciativa de Viet Nam de convocar este debate abierto y los preparativos minuciosos efectuados. Esperamos que el Consejo apruebe el proyecto de resolución S/2021/402 relativo a esta cuestión. Asimismo, quisiera dar las gracias al Secretario General Adjunto Mark Lowcock, al Presidente Peter Maurer y al Presidente Kevin Rudd por sus exposiciones informativas. Sus opiniones y recomendaciones ayudarán al Consejo a debatir y abordar mejor esta importante cuestión.

Los civiles son los más afectados por los conflictos armados. Las infraestructuras destinadas a la producción agrícola, la seguridad alimentaria, el agua, el suministro de energía y la atención de la salud, entre otras instalaciones, son fundamentales para garantizar la subsistencia de la población civil y mejorar la situación humanitaria. La protección de esas instalaciones es un requisito explícito del derecho internacional humanitario. En el contexto de la actual pandemia mundial, es aún más importante y una prioridad compartida por la comunidad internacional que se garantice la accesibilidad y la seguridad de las instalaciones médicas para los civiles afectados por los conflictos.

China respalda el proyecto de resolución preparado por Viet Nam y ha participado activamente en los debates y las consultas con otros miembros. En el proyecto de resolución se insta a que se aborden las causas fundamentales de los conflictos, se garantice la funcionalidad de las infraestructuras en los países afectados por los conflictos, se intensifiquen los esfuerzos para promover la recuperación tras la pandemia y se facilite una paz sostenida, y se acoge con beneplácito la cooperación internacional y regional en ese sentido. Son elementos constructivos y prácticos. La comunidad internacional debe adherirse al enfoque centrado en el ser humano, por el que se aborden tanto los síntomas como las causas fundamentales, y adoptar medidas eficaces y concretas con el fin de impulsar un proceso de paz y crear las condiciones necesarias para la protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil.

En primer lugar, debemos ceñirnos al concepto de gobernanza sistémica y abordar las causas fundamentales de los conflictos mediante esfuerzos incesantes. Los conflictos armados conllevan riesgos sistémicos para los civiles. Nadie sale indemne de esas situaciones. En caso de conflicto o guerra, es difícil garantizar la seguridad absoluta de los civiles y los bienes de carácter civil. Para solucionar ese problema, debemos tener una visión general de la situación y abordar sus causas profundas. La gran mayoría de los conflictos armados son consecuencia de la pobreza extrema y la escasez de recursos. La promoción del desarrollo para la paz es la salida fundamental de esta problemática. La comunidad internacional debe coordinar la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a fin de ayudar a los países y las regiones afectados por los conflictos a afrontar los retos de la reducción de la pobreza y el control de las pandemias, de forma que se eliminen gradualmente las causas fundamentales de los conflictos.

En segundo lugar, debemos adherirnos a las soluciones pacíficas de los conflictos a través del diálogo, los buenos oficios y las negociaciones. En la actualidad, varios de los temas candentes que figuran en el programa del Consejo de Seguridad se encuentran en una etapa decisiva. La comunidad internacional debe aprovechar la oportunidad

para respaldar el diálogo y las consultas, reforzar la mediación y los buenos oficios, intensificar los esfuerzos diplomáticos y evitar la escalada de tensión con el objetivo de liberar a los civiles del calvario de la guerra lo antes posible. El Consejo de Seguridad y otros órganos de las Naciones Unidas deben desempeñar un papel de coordinación y respaldar a las organizaciones regionales que tienen la ventaja de encontrar soluciones regionales a los conflictos regionales, a fin de crear una sinergia para promover las conversaciones de paz. Todas las partes en conflicto deben responder de manera positiva al llamamiento del Secretario General en favor de un alto el fuego mundial y hacer avanzar el proceso político mediante un diálogo inclusivo.

En tercer lugar, debemos ayudar a los países receptores a reforzar la creación de capacidad a partir de responsabilidades claramente definidas. Los Gobiernos de los países afectados por un conflicto deben asumir la responsabilidad primordial de proteger los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil. Todas las partes en conflicto deben cumplir las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional relativas a la protección de los civiles y los bienes de carácter civil, distinguir correctamente entre bienes de carácter militar y civil, garantizar el funcionamiento de las infraestructuras y dar prioridad a las necesidades de los grupos vulnerables, como las mujeres y los niños. La comunidad internacional debe respetar la soberanía de los países receptores, centrarse en sus necesidades, escuchar sus opiniones y ayudarlos a adquirir la capacidad de operar y proteger las infraestructuras por sí mismos. Debemos estar alerta ante las fuerzas terroristas que intentan controlar o destruir infraestructuras e incluso lanzar ciberataques contra infraestructuras críticas mediante el uso de la tecnología digital.

La comunidad internacional debe colaborar para proteger a los civiles y los bienes de carácter civil y garantizar el acceso sostenible de los civiles a los servicios esenciales. La Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Comisión de Consolidación de la Paz y las oficinas residentes de las Naciones Unidas deben, de conformidad con sus respectivos mandatos, aportar sus propias ventajas y fortalecer la coordinación con las organizaciones regionales y los órganos internacionales, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, para que las actividades de socorro humanitario y asistencia para el desarrollo pasen a centrarse en los civiles y los bienes de carácter civil, y desempeñar un papel más importante en la reconstrucción después de los conflictos. Los Estados Miembros también pueden hacer sus propias aportaciones. A ese respecto, China está dispuesta a compartir su experiencia.

A lo largo de los años, al alinear la Iniciativa de la Franja y la Ruta con la Agenda 2030, China ha aumentado la cooperación con las organizaciones nacionales, regionales e internacionales pertinentes con el fin de ayudar a los países en desarrollo a crear sus infraestructuras, impulsar el empleo y mejorar los medios de vida de la población. China ha ayudado a construir 24 centros de demostración de tecnología agrícola en África, lo que ha beneficiado a más de 500.000 africanos. El fondo subsidiario de desarrollo del fondo fiduciario de las Naciones Unidas para la paz y el desarrollo ha ejecutado 34 proyectos, que han contado con la participación de múltiples organismos de las Naciones Unidas y han beneficiado a decenas de países. Desde el brote de la enfermedad por coronavirus, China ha prestado asistencia médica de emergencia a varios países afectados por los conflictos y ha enviado equipos médicos para ayudarlos a combatir la pandemia. De cara al futuro, China seguirá colaborando con la comunidad internacional para ayudar a los países afectados por un conflicto a crear capacidades de desarrollo independiente y de protección de los civiles.

Anexo 12**Declaración del Representante Permanente de Francia ante las Naciones Unidas, Nicolas de Rivière**

[Original: francés]

Doy las gracias a los Sres. Lowcock, Maurer y Rudd por sus exposiciones informativas. Quisiera centrarme en tres aspectos.

Como han señalado todos los participantes en este debate, los conflictos armados tienen repercusiones devastadoras sobre las infraestructuras civiles esenciales para la supervivencia de la población. Me refiero, en particular, a los hospitales y las instalaciones médicas, a las instalaciones que dan acceso al agua y a la electricidad, así como a los cultivos y a las infraestructuras agrícolas. La población civil, sobre todo de Siria, el Yemen, el Sahel y la cuenca del lago Chad, sufre a diario las consecuencias, entre las que destacan el aumento de las necesidades humanitarias y la inseguridad alimentaria, el desplazamiento y la propagación de epidemias.

Algunas partes en conflicto llegan incluso a incorporar a sabiendas violaciones del derecho internacional humanitario en su estrategia militar, a fin de privar a la población de todo tipo de socorro y garantizar su rendición. Eso es inaceptable y corresponde al Consejo de Seguridad reafirmarlo de manera clara y sistemática.

Hasta en la guerra existen normas. El respeto del derecho internacional humanitario no es optativo; es obligatorio para todas las personas. Nuestra responsabilidad colectiva es encontrar los medios operativos para velar por que se respete la ley.

Ese es el sentido del Llamamiento a la Acción Humanitaria, impulsado por Francia y Alemania en 2019 y respaldado ya por 47 Estados Miembros y la Unión Europea. En ese llamamiento se determinan las medidas concretas que los Estados pueden adoptar para fortalecer el respeto del derecho internacional humanitario, e instamos a todos nuestros asociados a que lo respalden.

Asimismo, exhortamos a los países que aún no lo han hecho a que ratifiquen los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949.

Todo Estado tiene la responsabilidad de garantizar el respeto del derecho internacional humanitario. Pienso, en particular, en la capacitación. El año pasado, Francia finalizó su plan nacional de capacitación en derecho internacional humanitario, dirigido a todos los agentes franceses: militares, diplomáticos y altos funcionarios. Ese plan también prevé actividades de capacitación para nuestros asociados extranjeros. Lo estamos haciendo sobre todo en el Sahel.

En tercer lugar, debemos reforzar la lucha contra la impunidad. Los responsables de las violaciones del derecho internacional humanitario deben comparecer ante la justicia. Recuerdo que la práctica de hacer padecer hambre a los civiles como método de guerra y los ataques a hospitales e infraestructuras médicas constituyen crímenes de guerra.

Francia seguirá prestando su pleno apoyo a los mecanismos de lucha contra la impunidad. Debemos fortalecer las capacidades nacionales para que se lleven a cabo investigaciones imparciales e independientes y para que se respalde el uso de mecanismos internacionales allí donde los nacionales sean insuficientes o inadecuados. Francia reitera su llamamiento a la universalización del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Asimismo, debemos sancionar de forma más sistemática a los autores de violaciones graves del derecho internacional humanitario en el marco de los regímenes de sanciones de las Naciones Unidas y de Europa.

Por último, quisiera encomiar la iniciativa de Viet Nam de preparar una resolución del Consejo de Seguridad sobre la protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil. El respeto del derecho internacional es una prioridad fundamental para nuestra diplomacia y seguiremos prestando especial atención a esas cuestiones, que son vitales en el sentido estricto de la palabra.

Anexo 13**Declaración del Representante Permanente de la India ante las Naciones Unidas, T.S. Tirumurti**

Para comenzar, permítaseme dar las gracias a Su Excelencia el Ministro de Relaciones Exteriores de Viet Nam y a la delegación vietnamita por haber organizado un debate abierto sobre esta importante cuestión. También doy las gracias al Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock, al Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, y al Honorable Presidente de la Junta Directiva de International Peace Institute, Kevin Rudd, por sus exposiciones informativas. Las exposiciones informativas han sido útiles para comprender las consecuencias que tiene la destrucción de bienes indispensables para la supervivencia de la población civil en situaciones de conflicto armado. La India también da las gracias a Viet Nam por impulsar con éxito el proyecto de resolución S/2021/402 sobre ese tema.

La responsabilidad primordial de satisfacer las necesidades de protección de la población, en particular el mantenimiento de los servicios esenciales, recae sobre el Gobierno de cada país. No obstante, tras decenios de práctica y marcados por la experiencia desgarradora de las guerras destructivas, ahora contamos con un conjunto de principios y jurisprudencia internacionales que atribuye la misma responsabilidad al agresor para garantizar que los civiles y las infraestructuras civiles no sean objeto de ataques en los conflictos armados.

La historia nos ha demostrado que la muerte de civiles y la devastación de infraestructuras civiles se han utilizado como armas legítimas de guerra, sobre todo durante las dos guerras mundiales. Además de la muerte y la destrucción que provocaron, recordamos el Plan Marshall, que respaldó las iniciativas de reconstrucción de Europa para aportar cierta normalidad a la vida de la población. De todo ello surgieron no solo las propias Naciones Unidas, sino también una amplia jurisprudencia internacional sobre la responsabilidad de quienes emprenden guerras y ataques militares de aislar y proteger plenamente de sus ataques a la población civil inocente y a las infraestructuras indispensables para la supervivencia.

Sin embargo, es preocupante que hasta la fecha en los conflictos armados se considere a la población civil y a las infraestructuras civiles casi como objetivos legítimos, lo que ha provocado la mutilación y la muerte de miles de personas y ha dejado a millones más sin hogar. La situación no ha hecho más que empeorar, habida cuenta de que la población civil y las infraestructuras civiles indispensables se han convertido en un blanco fácil para los grupos terroristas y los agentes no estatales, en particular los patrocinados por agentes estatales. Países con una gran historia y patrimonio cultural, como Siria y el Afganistán, se enfrentan actualmente a las graves amenazas de los conflictos armados, que han hecho estragos no solo entre la población, sobre todo entre las mujeres y los niños, sino también en las infraestructuras civiles indispensables y los lugares históricos. Hay otros países que todavía se tambalean por acciones militares que se llevaron a cabo sin tener debidamente en cuenta la protección de la población civil y las infraestructuras. Por lo tanto, la cuestión de la protección de los civiles y los bienes de carácter civil en los conflictos armados debe ubicarse en el marco del derecho internacional aplicable y debe abordarse cumpliendo estrictamente el principio del respeto de la soberanía de los Estados.

La India condena enérgicamente el uso de la violencia opresiva contra civiles inocentes y los ataques a bienes de carácter civil en los conflictos armados, independientemente de quién los cometa.

En los últimos años, los civiles y las infraestructuras civiles críticas de las zonas urbanas se han convertido en un blanco fácil en situaciones de conflicto armado. En los países afectados por los conflictos armados, el acceso a la asistencia

humanitaria puede correr peligro debido a la destrucción de hospitales y a los ataques contra el transporte médico y los servicios esenciales. Los ciberataques dirigidos a las infraestructuras civiles, incluidas las sanitarias, se han convertido en algo habitual y han continuado incluso durante la pandemia.

Es sumamente preocupante que, en situaciones de conflicto armado, las partes no respeten las normas bien definidas, como el respeto del derecho internacional humanitario aplicable y el derecho de los derechos humanos pertinente, ni tampoco la protección de los bienes de carácter civil y la garantía de un acceso seguro y sin trabas para los organismos médicos y humanitarios. Eso es más evidente en los conflictos armados en los que las partes reciben el apoyo de Estados Miembros que actúan como intermediarios. Se trata de una tendencia peligrosa a la que hay que hacer frente. Es necesario reflexionar sobre esas situaciones si queremos dar un sentido de realismo al debate sobre la protección de los bienes de carácter civil.

En situaciones de conflicto armado, el personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se ve sometido a una presión cada vez mayor en lo que respecta a la protección de los bienes de carácter civil. Las misiones y el personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas no son la panacea para todos los problemas que ocurren en situaciones de conflicto. La tendencia a cargar al personal de mantenimiento de la paz con responsabilidades que deberían recaer principalmente en el Estado debe cesar. Ello desincentiva a la comunidad internacional de prestar más atención al fortalecimiento de las fuerzas nacionales de seguridad para que puedan asumir esa responsabilidad del personal de mantenimiento de la paz. Por lo tanto, es importante proporcionar mandatos minuciosamente elaborados al personal de mantenimiento de la paz en estrecha consulta con los países que aportan contingentes, habida cuenta de que la protección del personal de mantenimiento de la paz es tan importante como la de los civiles. Si no se cuenta con el equipo, la capacitación y los recursos adecuados para cumplir los objetivos del mandato y si no se rinden cuentas de manera clara en todos los niveles, la expectativa de que las operaciones de mantenimiento de la paz protejan los bienes de carácter civil no es realista.

La rehabilitación y la reconstrucción de las infraestructuras civiles y el restablecimiento de los servicios esenciales deben tener una gran prioridad en el contexto posterior a los conflictos, habida cuenta de que facilitarán la recuperación socioeconómica y la consolidación de la paz. Debido a los importantes costes que conllevan, los países donantes y los organismos de las Naciones Unidas deben prestar asistencia financiera y técnica para la creación de capacidad.

En lo que a nosotros respecta, tras el fin del conflicto armado de Sri Lanka en 2009, la India ayudó al Gobierno de Sri Lanka a restaurar de inmediato algunas de las infraestructuras civiles más básicas y esenciales. La India desplegó siete equipos de desminado con carácter urgente, lo que permitió a los desplazados internos regresar a sus hogares y recuperar sus medios de vida. La India contribuyó ampliamente a la reconstrucción de infraestructura básica en el norte de Sri Lanka, incluidas 46.000 casas para los desplazados internos. La cartera de asistencia para el desarrollo de la India, que en el caso del Afganistán asciende a más de 3.000 millones, busca reconstruir las capacidades y las aptitudes de los ciudadanos y las instituciones afganas. Además de varios proyectos de infraestructura y desarrollo comunitario, la India construyó la Presa Amistad Afgano-India y ahora está enfrascada en la construcción de la presa de Shahtoot para suministrar agua potable a los dos millones de habitantes de la ciudad de Kabul.

Para concluir, debo decir que, como parte de un empeño más amplio, la India está dispuesta a apoyar los esfuerzos encaminados a fortalecer la estructura normativa para la protección de los bienes indispensables para la población civil y para la prestación de asistencia humanitaria en los conflictos armados. Esa estructura normativa debería respetar los principios de soberanía, independencia política, integridad territorial y unidad de los países afectados por conflictos armados.

Anexo 14**Declaración del Representante Permanente Adjunto de Kenya ante las Naciones Unidas, Michael Kiboino**

La delegación de Kenya agradece al Excmo. Sr. Bui Thanh Son por presidir el debate abierto de hoy. Asimismo, damos las gracias a todos los distinguidos ponentes por sus exposiciones informativas.

Kenya condena los ataques deliberados contra bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, que son empleados como un método de guerras. Más allá del sufrimiento inmediato que provocan, esos ataques causan daños duraderos a las economías, los medios de vida, la educación y los sistemas sociales. Esos daños persisten mucho tiempo después de que el conflicto inmediato ha concluido, e incluso después de que se han decretado altos el fuego y se han concertado acuerdos de paz. Por ello acogemos con beneplácito el debate de hoy.

De hecho, este debate representa una oportunidad para subrayar la importancia de que todas las partes en conflicto protejan los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, incluidas la infraestructura asociada con la alimentación, la agricultura, el agua y el saneamiento, los servicios médicos y la energía. Aunque este principio está bien establecido en el derecho internacional humanitario, consideramos necesario recordarlo constantemente con miras a que se tenga presente en la conducción de la guerra y en las respuestas de la comunidad internacional.

El interés del Consejo de Seguridad en esta cuestión es claro, pero aun cuando sea correcto referirse a ella, no debemos perder de vista a los peligrosos agentes que se están haciendo fuertes en múltiples países y regiones. Nos referimos a la creciente explotación del espacio humanitario y sus bienes de carácter civiles asociados a esos espacios por parte de grupos terroristas como Al-Qaida y el Estado Islámico en el Iraq y el Levante. Esos grupos son conscientes de las preocupaciones humanitarias que rodean a los civiles que son víctimas de los conflictos y, por lo tanto, utilizan a la población para generar recursos financieros, enmascarar sus operaciones y reclutar a refugiados traumatizados y desarraigados. También utilizan objetivos civiles como cobertura para iniciar ataques, esperando atraer represalias que den lugar a daños colaterales que luego utilizarán con fines propagandísticos.

Lamentablemente, no se realizan suficientes esfuerzos para negarles el espacio en el cual llevan a cabo esas acciones manipuladoras y atroces. En cualquier caso, los grupos terroristas sienten cada vez más que el espacio humanitario es un activo estratégico. Esto está prolongando los conflictos y debilitando la capacidad de las misiones de mantenimiento de la paz y los organismos nacionales de seguridad para proteger realmente la paz y los civiles. Esperamos que se adopten más medidas para abordar este problema creciente.

Permítaseme hacer hincapié en algunas medidas prácticas que, de aplicarse, favorecerían una protección más eficaz de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil en las situaciones de conflicto.

En primer lugar, el Consejo de Seguridad debe insistir en que las partes en un conflicto armado respeten el derecho internacional humanitario y protejan tanto a la infraestructura civil sobre la que se sustenta la prestación de servicios esenciales, como a los trabajadores que las operan y mantienen.

En segundo lugar, el Consejo debe incorporar la cuestión de la protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil en su proceso de toma de decisiones, incluidas, entre otras cosas, la aplicación de sanciones severas a individuos y grupos para los que la explotación del espacio humanitario sea un componente clave en sus estrategias y operaciones terroristas; la elaboración

de mandatos de mantenimiento de la paz que se ajusten al propósito de disuadir y combatir ese tipo de explotación; y la conformación de misiones con una sólida capacidad para la divulgación pública de mensajes y contraargumentos.

Por otra parte, ha llegado el momento de empezar a hacer hincapié en una asistencia humanitaria que se sustente en la resiliencia, lo que comprende la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura civil, el restablecimiento de los servicios esenciales y el suministro de equipos y tecnología modernos. Eso facilitará el desarrollo socioeconómico, la mejora de la capacidad de adaptación de la población local y la reducción de la dependencia de la asistencia humanitaria.

Las instituciones financieras internacionales también pueden hacer más para reducir el riesgo de las inversiones en entornos frágiles en la etapa posterior a los conflictos, en las que a menudo existen dificultades para atraer la inversión tradicional. Además, el Consejo de Seguridad debería hacer un uso más vigoroso de la función asesora de la Comisión de Consolidación de la Paz en situaciones posteriores a los conflictos.

Para concluir, quisiera reafirmar el apoyo de Kenya a las medidas que pondrá en práctica el Consejo de Seguridad, incluida la aprobación del proyecto de resolución contenido en el documento S/2021/402 con el que se busca desalentar la destrucción de bienes indispensables para la supervivencia de la población civil.

Anexo 15**Declaración del Representante Permanente de México ante las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente Ramírez**

[Original: español]

México agradece a los señores Lowcock, Maurer y Rudd por sus informativas exposiciones.

Igualmente, felicitamos a Viet Nam por la convocatoria a este debate a la luz de los retos actuales por el incremento de la urbanización de los conflictos y el uso de nuevas tecnologías. Coincidimos especialmente en la necesidad del respeto irrestricto del derecho internacional humanitario, y la importancia de proteger los bienes que resultan indispensables para la supervivencia de la población civil, en especial las instalaciones y suministros de agua potable, las plantas eléctricas, las instalaciones médicas y las escuelas, por mencionar algunos que nos parecen esenciales.

Es motivo de alarma para México que persistan ataques a estos espacios indispensables a pesar de estar prohibidos por los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra de 1977. Expresamos nuestra enérgica condena a este tipo de ataques y a la falta de cumplimiento a las normas del derecho internacional humanitario. No hay lugar a excepciones para condonar ataques deliberados contra la infraestructura esencial. El punto de partida es evitar a toda costa el sufrimiento de la población civil en cualquier conflicto.

Enfocaré mis comentarios específicos en dos puntos en particular.

En primer lugar, en cuanto al fortalecimiento de la protección de los civiles mediante el respeto al derecho internacional humanitario, es cierto que, desde la adopción de la agenda de Protección a Civiles en 1999, este Consejo ha impulsado resoluciones relacionadas con la alimentación, la protección al personal médico y la educación; no obstante, siempre será necesario continuar ampliando el espectro de la protección. Es por ello que nos hemos sumado con entusiasmo al copatrocinio de la resolución propuesta por Viet Nam (S/2021/402), que refuerza el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito de la protección de los bienes indispensables.

La mención específica a los civiles que operan, reparan, y dan mantenimiento a estos bienes, representa en sí misma, una contribución significativa al fortalecimiento del derecho internacional humanitario. Más aún, la inclusión de un subtema dedicado a la protección de bienes indispensables en los informes del Secretario General sobre Protección de Civiles coadyuvará a dar más visibilidad a este tema y, en especial, a fortalecer el sistema de rendición de cuentas.

En segundo lugar, en lo que respecta a las consecuencias para la población civil de los ataques a bienes indispensables, además de los ataques a las instalaciones de agua potable o a las plantas eléctricas que interrumpen la prestación de servicios básicos, la pandemia por COVID-19 ha hecho todavía más evidente el vínculo entre el acceso al agua y la salud. Sin agua no se puede cumplir con las medidas de higiene y prevención de enfermedades. Los daños a las cosechas y al ganado afectan la disponibilidad de alimentos, creando condiciones de inseguridad alimentaria, y se puede llegar aún al uso del hambre como herramienta de guerra. Por ello, México considera que, además del respeto al derecho internacional humanitario, resulta imperativo invertir en el mantenimiento y la resiliencia de la infraestructura para asegurar que los servicios continúen funcionando en situaciones de conflicto, así como para mitigar sus consecuencias que pueden generar condiciones humanitarias realmente precarias.

Preocupa también a mi delegación que las mujeres y las niñas sean afectadas de manera desproporcionada por la falta de servicios básicos, al igual que los pueblos indígenas. Por ejemplo, el cierre de escuelas por ataques o falta de agua o electricidad repercute a largo plazo en la educación y el desarrollo de la población infantil y el desarrollo de la comunidad. Las escuelas son también espacios donde las niñas y los niños reciben alimento y apoyo psicosocial. Sus instalaciones deben respetarse sin excepción. En ese sentido, me complace anunciar que México se ha sumado a la Declaración sobre Escuelas Seguras. Seguiremos apoyando los esfuerzos encaminados a la protección de las escuelas y de todos los centros educativos.

En suma, tenemos la obligación de prevenir más daños y consecuencias para la población civil en situaciones de conflicto armado. Debemos velar por el cumplimiento irrestricto del derecho internacional humanitario en cualquier pronunciamiento o acción del Consejo de Seguridad, a la par de reforzar el conocimiento de estas normas a nivel nacional, así como para asegurar que los responsables de actos contrarios al derecho internacional humanitario no gocen de impunidad.

Anexo 16**Declaración del Representante Permanente del Níger ante las Naciones Unidas, Abdou Abarry**

[Original: francés]

El tema que nos ocupa es pertinente en la medida en que los esfuerzos realizados para frenar la propagación de la enfermedad por coronavirus han agudizado la vulnerabilidad de los civiles que viven en zonas de conflicto y han planteado nuevos retos a los agentes estatales y humanitarios en lo que respecta a la protección de esa población y de las infraestructuras necesarias para su supervivencia.

En varios escenarios de conflicto, ya sea en Siria, el Yemen, el Afganistán o el Sahel, se ha producido un recrudecimiento de los ataques cobardes e indiscriminados perpetrados por grupos armados contra objetivos civiles, en contravención de los principios de distinción, de prohibición de ataques indiscriminados, de proporcionalidad y de adopción de medidas de precaución en la conducción de las hostilidades, tal y como se estipula en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales. Ha llegado el momento de que el Consejo de Seguridad refuerce su compromiso en esa esfera, transmitiendo claramente la idea de que defiende el respeto del derecho internacional humanitario y la rendición de cuentas de quienes lo infrinjan.

Llegados a este punto, me gustaría agradecer a Viet Nam que haya incluido esta importante cuestión entre las prioridades de su Presidencia en el Consejo de Seguridad este mes y de su mandato como miembro no permanente. También nos gustaría dar las gracias a los Sres. Lowcock y Maurer, así como al representante de International Peace Institute, por sus exposiciones informativas y su dedicación a esta importante cuestión.

Una cosa está clara: las consecuencias humanitarias de los ataques a infraestructuras y objetos civiles, como las instalaciones energéticas, sanitarias, educativas e hídricas y la destrucción de cosechas y reservas de alimentos en tiempos de conflicto, no solo se sienten a corto plazo sino también a largo plazo.

A corto plazo, esos actos contribuyen a agravar la complejidad de la situación humanitaria de la población atrapada entre las partes en conflicto. Al atacar una central eléctrica, por ejemplo, se está atacando el sistema de distribución de agua corriente, el funcionamiento de los hospitales y el sistema de tratamiento de aguas residuales de una comunidad. Ello favorecerá la aparición de enfermedades transmitidas por el agua y otras interrupciones en la prestación de servicios básicos, así como el desplazamiento de la población vulnerable.

A largo plazo, el camino para reconstruir un país cuya infraestructura civil ha quedado destruida por el conflicto es largo y requiere de una cantidad ingente de recursos. Los daños causados por la guerra están retrasando el desarrollo económico y social y situando al país que se encuentra en una situación de posconflicto en riesgo de contraer deudas enormes.

Por tanto, habida cuenta de todo lo antedicho, para proteger a los civiles, así como los objetos esenciales para su supervivencia, es necesario que adoptemos un enfoque holístico. A ese respecto, quisiera formular algunas recomendaciones que harían de la protección de la infraestructura crítica una cuestión central en la protección de los civiles en tiempos de conflicto.

En primer lugar, debemos respaldar las recomendaciones del Secretario General relativas a la aprobación de marcos políticos nacionales y mundiales en materia de protección de los civiles que se centren en la prevención y la mitigación de los daños provocados a las infraestructuras de las que depende la población civil y

la respuesta a esos daños. En ese sentido, quisiera encomiar y destacar los esfuerzos desplegados por los Estados miembros del Grupo de los Cinco del Sahel, a saber, el Chad, Mauritania, Burkina Faso, Malí y mi país, el Níger, con objeto de desarrollar y aplicar políticas nacionales y otros marcos relativos a la protección de la población civil y de las infraestructuras para la prestación de servicios esenciales, sobre la base de un enfoque proactivo con el fin de reducir los efectos sobre la población civil.

El siguiente paso radica en garantizar el acceso equitativo e inclusivo de los agentes de la sociedad civil a los procesos de desarrollo de programas a fin de mejorar la resiliencia de la infraestructura civil y de los servicios esenciales, y, al elaborar esas medidas, en tener en cuenta la agenda sobre la juventud y la paz y la seguridad, así como la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad y las recomendaciones recogidas en la resolución 1325 (2000).

Además, ya que 6 de las 10 mayores operaciones de mantenimiento de la paz se llevan a cabo en los países más expuestos al cambio climático, es esencial que adoptemos medidas para que comprendamos mejor la correlación entre los conflictos y los efectos del cambio climático. El Níger, junto con Irlanda y el Grupo de Amigos sobre el Clima y la Seguridad, sigue trabajando para abordar el cambio climático en situaciones de conflicto.

Por último, cualquier esperanza real de poner fin a esas violaciones en las zonas de conflicto conlleva, por fuerza, la adopción de medidas concretas para silenciar las armas y poner fin a su proliferación. Por consiguiente, queremos recordar a los Estados su obligación de respetar el Tratado sobre el Comercio de Armas e invitar al Consejo de Seguridad a examinar el papel que desempeñan algunos agentes en la circulación de estas armas, especialmente en el Sahel.

Para concluir, dado que el debate de hoy es el último acto de alto nivel previsto durante la Presidencia vietnamita, permítaseme expresar mi sincera felicitación al Presidente del Consejo de Seguridad y a su Gobierno por el éxito de su Presidencia, que ha quedado reflejado en la aprobación, por parte del Consejo, de un gran número de documentos durante este mes.

Anexo 17**Declaración del Representante Permanente de Túnez ante las Naciones Unidas, Tarek Ladeb**

[Original: árabe]

Ante todo, quisiera dar las gracias a Viet Nam por haber organizado este importante debate. También doy las gracias al Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia, Mark Lowcock; al Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer; y al Presidente de International Peace Institute, Kevin Rudd.

De la realidad de las crisis humanitarias que asolan numerosas regiones en todo el mundo, especialmente en el mundo árabe y en África, se desprende que la perturbación o la interrupción, durante años o incluso décadas, de los servicios esenciales necesarios para la supervivencia como consecuencia de un conflicto armado prolongado y de la ocupación es una característica distintiva de dichas crisis. Esas situaciones se han vuelto complejas, y su costo para la población civil y las instalaciones civiles es cada vez mayor a medida que se agravan las crisis económicas, los fenómenos climáticos y las catástrofes naturales.

El deterioro de servicios esenciales como el agua, la energía, el saneamiento y la atención de la salud ha exacerbado sin duda las deficiencias y vulnerabilidades y ha tenido grandes repercusiones sobre las infraestructuras civiles de las zonas de conflicto, lo que plantea una amenaza para la seguridad alimentaria, los medios de vida y la salud. Al impulsar y prolongar las oleadas de desplazamientos forzados, también ha socavado la seguridad y la estabilidad y ha impedido que las poblaciones afectadas alcancen los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La eficacia del sistema de servicios esenciales y de la respuesta humanitaria en general en situaciones de conflicto armado está más en juego que nunca, habida cuenta del problema que plantea el brote de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). Por lo tanto, la comunidad internacional y en particular el Consejo de Seguridad deben trabajar para lograr un planteamiento más coherente, inclusivo y sostenible que tenga en cuenta la gran interdependencia de la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible. A ese respecto, quisiera señalar también lo siguiente.

En primer lugar, será necesario ir más allá del enfoque tradicional que consiste en aportar soluciones humanitarias a corto plazo para los problemas causados por la interrupción de los servicios esenciales, a fin de abordar las causas fundamentales de las crisis y encontrar soluciones proactivas y duraderas.

En ese sentido, poner fin a los conflictos debe convertirse en la máxima prioridad, que debe abordarse mediante un esfuerzo eficaz del Consejo de Seguridad que esté reforzado por el consenso entre sus miembros. Insistimos en la necesidad urgente de fortalecer los cimientos de la paz a través de acuerdos políticos y de la búsqueda activa de medios pacíficos para evitar que se produzcan y repitan los conflictos armados, de forma que se alcance y consolide la paz.

En segundo lugar, es necesario establecer una base firme para minimizar la interrupción de los servicios esenciales en situaciones de conflicto, mediante la consagración de los conceptos de la protección y el interés superior de los grupos vulnerables y mediante una respuesta eficaz que esté firmemente arraigada en el derecho internacional humanitario y derecho internacional de los derechos humanos.

Para hacer frente a los problemas asociados a la disminución de la prestación de servicios esenciales, es necesario que las partes en un conflicto armado se comprometan, en primer lugar, a respetar las normas del derecho internacional de los

derechos humanos y del derecho internacional humanitario, sobre todo las normas de prudencia y proporcionalidad. Las partes beligerantes deben abstenerse de atacar a la población civil, las infraestructuras y las personas que participan en la prestación de servicios básicos, a la vez que facilitan el acceso imparcial a esos servicios y garantizan la rendición de cuentas para evitar que se repitan ese tipo de violaciones.

La rehabilitación de los servicios básicos es más eficaz cuando se hace en el momento y lugar adecuados, en particular tras aprobar una tregua humanitaria y establecer un alto el fuego. Aprovechamos esta oportunidad para reiterar la necesidad de establecer un alto el fuego mundial en respuesta al llamamiento del Secretario General y a la resolución 2532 (2020), con objeto de poner fin a los ataques y mantener las instalaciones esenciales. De ese modo, se contribuirá a satisfacer las necesidades humanitarias y médicas con mayor eficacia, se promoverán los esfuerzos para combatir la pandemia de COVID-19 y se facilitará el regreso voluntario y digno de las personas desplazadas a sus hogares.

En tercer lugar, es fundamental adoptar un planteamiento que trascienda los marcos y las deficiencias de la gestión actual, convencional y a corto plazo de los problemas relativos a los servicios esenciales, a fin de incluir la reducción de la vulnerabilidad, la preservación de la dignidad y el cambio de vida de las personas.

Para lograr ese planteamiento, es necesario tomar medidas destinadas a contener el deterioro de las infraestructuras durante los conflictos antes de que sea irreversible. Con ese fin, hay que hacer más por interrelacionar los planes humanitarios y de desarrollo de los organismos especializados de las Naciones Unidas, armonizar los esfuerzos de recuperación temprana y promover proyectos integrados que abarquen actividades humanitarias, de desarrollo y de consolidación de la paz.

En ese sentido, valdría la pena seguir fomentando las capacidades de las comunidades e instituciones afectadas para garantizar la recuperación y la resiliencia a largo plazo en las crisis, en particular mediante la rehabilitación de hospitales, escuelas, carreteras, servicios de abastecimiento de agua y suministro de energía y saneamiento, al tiempo que se ponen a disposición de los grupos afectados medios de vida dignos y sostenibles, de forma que se mejoren sus expectativas de una vida mejor.

Por último, a mi delegación le complace copatrocinar el proyecto de resolución de índole humanitaria propuesto por Viet Nam sobre el tema de la sesión de hoy, que figura en el documento S/2021/402. El objetivo del proyecto de resolución es dar prioridad a la protección de los civiles y las instalaciones civiles durante los conflictos armados, consagrando así las normas del derecho internacional, en particular el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad.

Anexo 18**Declaración del Representante Permanente Interino del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, James Roscoe**

Damos las gracias a los Sres. Lowcock, Maurer y Rudd por sus exposiciones informativas. El Reino Unido da las gracias a Viet Nam por haber convocado este debate y se complace en copatrocinar la resolución de Viet Nam sobre la protección de los bienes indispensables para la supervivencia del ser humano (resolución 2573 (2020)).

Nos ha consternado lo que los ponentes han dicho hoy. Han enumerado ejemplos, todos ellos concretos, de violaciones infames del derecho internacional humanitario. En el Consejo de Seguridad se suele oír hablar de ese tipo de pruebas: pruebas de la devastación que ese tipo de ataques contra las infraestructuras indispensables causan en la población civil. Se acostumbra a hablar de ese tipo de casos por separado, así que el hecho de que se relaten conjuntamente tiene un efecto contundente. Cada uno de esos casos pone de manifiesto que el Consejo no ha cumplido su mandato. Somos responsables de esos fracasos porque no adoptamos las medidas que podrían haberlos evitado.

Así como nuestros ponentes expusieron los ejemplos y las repercusiones de las violaciones, también expusieron la forma en que pueden evitarse, a saber, con un mayor cumplimiento del derecho internacional humanitario, una práctica militar adecuada y, muy importante, la rendición de cuentas de quienes convierten esos ataques en una táctica. La aprobación de esta resolución en el día de hoy debería reflejar la unidad del Consejo a la hora de condenar esos ataques. No obstante, solo se empezará a abordar esta cuestión si nos tomamos en serio la adopción de medidas conjuntas.

Nuestro primer paso debe ser garantizar que todas las partes en los conflictos armados comprendan las obligaciones jurídicas que les incumben en virtud del derecho internacional humanitario, respeten las normas y actúen con moderación. Por ello, el Reino Unido ofrece capacitación especializada a ese respecto mediante sus programas de asociación con las fuerzas armadas de otros Estados Miembros. Nuestra capacitación abarca el derecho internacional humanitario, los acuerdos internacionales y el sistema de justicia militar. Nuestro objetivo es fomentar el conocimiento y el cumplimiento y respaldar a unas fuerzas de defensa y seguridad más responsables.

Sin embargo, cuando se atacan los bienes indispensables con pleno conocimiento de las obligaciones dimanantes del derecho internacional y se decide hacer caso omiso de ellas, nosotros, como Consejo, debemos tomar medidas. Pero lo que ocurre con demasiada frecuencia es que se actúa con impunidad. La existencia de mecanismos eficaces de rendición de cuentas en los planos nacional e internacional es fundamental para hacer justicia a las víctimas y prevenir ese tipo de ataques mediante la disuasión. Cabe destacar que, en virtud de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, los Estados tienen la obligación de respetar y hacer respetar esos instrumentos.

Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay tres medidas inmediatas que podemos adoptar para proteger los bienes indispensables y evitar el sufrimiento que causan los ataques cometidos contra ellos en violación del derecho internacional humanitario, mediante el uso de los mecanismos disponibles.

En primer lugar, debemos mejorar los sistemas de presentación de informes y recopilación de pruebas. Los Gobiernos y los agentes armados deben garantizar la recopilación y la presentación de información oportunamente para evitar daños a los civiles y a los bienes de carácter civil, en particular los bienes indispensables. Asimismo, debemos garantizar que los mecanismos vigentes de las Naciones Unidas para presentar información se utilicen de manera eficaz en el Consejo de Seguridad y la Secretaría como base para la toma de decisiones.

En segundo lugar, el Consejo de Seguridad debe actuar con respecto a las denuncias. A pesar de lo dispuesto en la resolución 2417 (2018), el Consejo no ha alentado a ningún Estado que proceda a una investigación independiente sobre la práctica de hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra. Tenemos los medios para hacerlo, pero no se ha actuado al respecto. En la declaración que formulamos ante el Consejo en el debate abierto del 11 de marzo sobre los conflictos y la inseguridad alimentaria (véase S/2021/250), recalcamos esas inquietudes con respecto a Tigré, el nordeste de Nigeria, el Yemen y Sudán del Sur.

En tercer lugar, deberíamos esforzarnos más por hacer rendir cuentas a quienes hayan cometido ataques contra bienes indispensables en violación del derecho internacional humanitario. Seguiremos presionando para que se investiguen de manera completa, rápida e imparcial todos los incidentes en los que se ataquen bienes indispensables para la población civil y para que se garantice que los responsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario rindan cuentas. El Consejo de Seguridad también debe estar dispuesto a considerar la posibilidad de imponer sanciones a quienes ataquen bienes de carácter civil o transgredan de otro modo el derecho internacional humanitario, como ya ha hecho en ocasiones anteriores, en particular en el contexto de Sudán del Sur.

Quisiera destacar el compromiso inquebrantable del Reino Unido con la aplicación y el cumplimiento correctos del derecho internacional humanitario. En marzo de 2019, publicamos nuestro primer *Informe Voluntario sobre la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en el Plano Nacional*. Ahora estamos colaborando con la Cruz Roja británica para respaldar a otros Estados Miembros en la elaboración de sus propios informes sobre la aplicación nacional, como medida práctica para alentar a que se mejore constantemente el cumplimiento de las normas del derecho internacional humanitario. El hospital quirúrgico de Atarib, en el noroeste de Siria, fue bombardeado hace poco más de un mes, lo que nos vuelve a recordar el costo devastador que suponen los ataques contra infraestructuras indispensables para la población civil. Los agresores perpetraron el ataque porque consideraron que actuaban con impunidad. Ningún Estado debería decir al Consejo que cree en el derecho internacional humanitario ni que desea proteger los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil si no está dispuesto a tomar medidas para impedir esos ataques y hacer rendir cuentas a quienes los cometen.

Anexo 19**Declaración de la Representante Permanente del Afganistán ante las Naciones Unidas, Adela Raz**

En primer lugar, quiero dar las gracias al Ministro de Relaciones Exteriores de Viet Nam, Excmo. Sr. Bui Thanh Son, por presidir esta sesión y, al mismo tiempo, a su delegación por organizar este debate. También deseo dar las gracias al Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia, Sr. Mark Lowcock; al Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Sr. Peter Maurer, y al Presidente de la Junta Directiva de International Peace Institute, Sr. Kevin Rudd, por sus perspicaces exposiciones informativas.

Los debates sobre la protección de los civiles requieren que la situación de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil se plantee con un enfoque matizado. Ya se trate de sistemas de energía, instalaciones médicas, fuentes de alimentos y agua o infraestructuras de control de desechos, la interrupción de esos servicios puede agravar las emergencias humanitarias y tener efectos catastróficos para las infraestructuras esenciales, sobre todo los hospitales.

La pandemia ha puesto de relieve la importancia de garantizar que las partes en los conflictos armados cumplan las normas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y que se protejan las infraestructuras críticas, en particular las relativas a la prestación de servicios humanitarios y de salud. La necesidad de una pausa humanitaria para hacer frente a los efectos de la pandemia y garantizar que la vacuna se distribuya de manera eficaz es urgente y subraya la importancia de la reunión de hoy. Por ello, el Afganistán reitera el llamamiento del Secretario General a un alto el fuego humanitario mundial.

Como país en situación de conflicto, comprendemos que el hecho de no proteger los bienes indispensables puede ser nefasto. Sin embargo, nuestros enemigos continúan perpetrando ataques, llegando a hacer uso de las infraestructuras públicas. Incluso usan a sus propios hermanos y hermanas afganos como escudos humanos. En respuesta a esa estrategia atroz, nuestras fuerzas armadas se han ceñido a nuestra política nacional de prevención y mitigación de las bajas civiles, que define reglas estrictas de enfrentamiento centradas en la protección de los civiles y los bienes indispensables.

A medida que la pandemia ha ido avanzando, también hemos observado nuevas estrategias de ataques indiscriminados y selectivos contra periodistas, defensores de los derechos humanos y trabajadores humanitarios, así como contra las infraestructuras de las que dependen. Hemos presenciado ataques contra torres de telefonía móvil, centrales eléctricas, infraestructuras de transporte y, lo más importante, nuestra infraestructura humanitaria. Se trata de una campaña cobarde que se ha cobrado la vida de más de 1.000 personas desde principios de año, un año que los afganos empezaron con la esperanza de lograr la paz y un futuro mejor.

El deterioro de las condiciones de seguridad, la pandemia y el cambio climático han contribuido a un aumento de casi el 100 % del número de afganos necesitados, que alcanzó los 18,4 millones de personas en enero. Además, el número de personas que sufren inseguridad alimentaria ha aumentado a 14 millones y el número de personas que huyeron del conflicto en 2020 fue superior a 80.000. Aunque esa situación es peligrosa e insostenible, sería posible mitigarla si los talibanes hicieran un esfuerzo mayor, auténtico, firme y comprometido por lograr la paz.

Desde el inicio de la pandemia, el Gobierno del Afganistán se ha mantenido firme en su mensaje de que es necesario un alto el fuego humanitario para garantizar la protección de los civiles y los bienes indispensables. Es un mensaje que compartieron los miembros del Consejo de Seguridad en innumerables ocasiones y que se amplió

con el llamamiento del Secretario General a un alto el fuego mundial. No obstante, esos llamamientos no se han materializado, lo que ha dado lugar a otro año de dolor para el inocente pueblo del Afganistán.

La falta de un alto el fuego repercutirá directamente en nuestros esfuerzos en materia de vacunas, habida cuenta de que las vacunas contra la enfermedad por coronavirus (COVID-19) comienzan a llegar al Afganistán gracias a la labor del Mecanismo para el acceso mundial a las vacunas contra la COVID-19 y a las generosas donaciones bilaterales. Para derrotar la pandemia, es necesario contar con un enfoque centrado, que no puede lograrse si se continúan atacando las infraestructuras necesarias para la distribución satisfactoria de la vacuna.

En ese sentido, damos las gracias al Consejo de Seguridad por aprobar la resolución 2565 (2021), relativa a la facilitación del acceso equitativo y asequible a las vacunas contra la COVID-19 en situaciones de conflicto armado, situaciones de posconflicto y emergencias humanitarias. Esperamos que los talibanes comprendan la urgencia de la situación, pongan fin a las hostilidades y los ataques selectivos contra las infraestructuras y el personal indispensables y trabajen realmente a favor de la seguridad de nuestro pueblo.

Además de los llamamientos y las resoluciones que el Consejo de Seguridad ya ha emitido, consideramos que este también tiene un papel fundamental que desempeñar a la hora de ayudarnos a mejorar la protección de los civiles y los bienes indispensables en el Afganistán. La aplicación eficaz de sanciones continúa siendo un instrumento que puede utilizarse para alentar a los talibanes a que cumplan las normas del derecho internacional humanitario. Al no hacer caso de los llamamientos a un alto el fuego humanitario durante la pandemia y al intensificar los ataques contra las infraestructuras y el personal indispensables, los talibanes nos hacen cuestionar su verdadero compromiso con la paz. El Consejo no debe pasarlo por alto a la hora de decidir sobre futuras inclusiones o exclusiones de la lista de sanciones. Nuestros esfuerzos deben seguir siendo firmes y concretos.

Además, con la conferencia de Turquía por delante, consideramos que hay un margen de esperanza para lograr la paz, que requiere que las Naciones Unidas desempeñen un papel importante, con el apoyo de los asociados regionales e internacionales, a fin de aprovechar el impulso y consolidar todos los esfuerzos para poner fin al conflicto en el Afganistán. Solo mediante una paz global y duradera podremos garantizar la estabilidad en el Afganistán y, de ese modo, maximizar nuestros esfuerzos para garantizar la protección de los civiles y los bienes indispensables.

Por último, permítaseme reiterar nuestro compromiso de proteger y salvaguardar a todos los ciudadanos afganos durante el conflicto actual y la lucha contra los grupos terroristas y armados, de forma que rindamos homenaje también a nuestro personal esencial y a nuestras fuerzas armadas. Esos héroes han seguido trabajando incansablemente durante la pandemia, luchando por proteger la vida de sus compatriotas afganos, incluso cuando eso supone poner en peligro su propia vida. Honraremos su sacrificio continuando nuestros esfuerzos firmes e incansables por lograr la paz. La paz es el mandato que nos encomendó nuestro pueblo. Seguiremos cumpliéndolo.

Anexo 20**Declaración del Representante Permanente de Armenia ante las Naciones Unidas, Mher Margaryan**

Me gustaría agradecer a la presidencia de Viet Nam la organización de este debate abierto sobre el tema “Protección de los objetos indispensables para la supervivencia de la población civil”. También doy las gracias al Secretario General Adjunto, Mark Lowcock; al Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, y al Presidente de la Junta Directiva de International Peace Institute, Kevin Rudd, por haber puesto de relieve los retos que plantea la protección de las infraestructuras civiles esenciales en situaciones de conflicto armado y de emergencia humanitaria.

Los conflictos armados en los que se utiliza de forma masiva armamento pesado y se llevan a cabo ataques indiscriminados contra zonas residenciales pueden tener unas consecuencias devastadoras en la infraestructura civil, crucial para la supervivencia de la población civil. En los tiempos de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), las hostilidades militares a gran escala y los ataques contra instituciones sanitarias, redes eléctricas y tuberías de agua merman la capacidad de las autoridades para responder ante la propagación de la enfermedad en las zonas afectadas por el conflicto.

El derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos constituyen marcos fundamentales para la protección de la población y la infraestructura civiles. Armenia concede la máxima importancia al pleno cumplimiento por todas las partes en conflicto de las obligaciones que emanan de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, sin ninguna condición política previa. La comunidad internacional debe detectar y atajar cualquier intento de politizar la asistencia humanitaria a la población necesitada.

Mientras que en muchas partes del mundo el llamamiento del Secretario General a un alto el fuego mundial ha sido decisivo para reducir las tensiones, en nuestra región, la guerra a gran escala que Azerbaiyán planificó de antemano y lanzó en septiembre de 2020, con el apoyo directo de Turquía y la participación de combatientes terroristas extranjeros, ha sido la mayor escalada militar en tiempos de pandemia. Desde el primer día de las hostilidades, las fuerzas armadas de Azerbaiyán lanzaron ataques deliberados e indiscriminados contra bienes, edificios residenciales e infraestructuras civiles en 170 comunidades de Artsaj, entre ellas la capital, Stepanakert, así como en Martakert, Shushá, Martuní y Hadrut, que causaron heridos, muertos y el desplazamiento de miles de personas y provocaron una gran crisis humanitaria.

Durante su ofensiva, Azerbaiyán utilizó ampliamente todo tipo de armamento pesado, como sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, artillería, misiles, diversos tipos de vehículos aéreos no tripulados, aviones militares y armas prohibidas, como bombas en racimo y armas incendiarias, para llevar a cabo ataques selectivos contra la población y las infraestructuras civiles, violando flagrantemente el derecho internacional humanitario. Los bombardeos aéreos deliberados, la artillería y los ataques con misiles causaron graves daños a varios centros médicos, entre ellos el ala de maternidad del Centro de Salud Materno-Infantil de Stepanakert y el hospital de Martakert. También se llevaron a cabo ataques selectivos contra instituciones educativas, en los que se destruyeron 18 escuelas y 6 guarderías de Artsaj, y se privó a 28.000 niños de su derecho a la educación. Las violaciones del derecho humanitario por parte de Azerbaiyán han sido ampliamente documentadas por diversas organizaciones internacionales humanitarias y de derechos humanos, como Human Rights Watch.

Haciendo caso omiso de los llamamientos de la comunidad internacional, incluidos los realizados por los copresidentes del Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y el Secretario General, para que cesen inmediatamente las hostilidades, y violando tres acuerdos consecutivos de alto el fuego humanitario, Azerbaiyán ha seguido lanzando ataques masivos contra la población civil y las infraestructuras civiles de Nagorno-Karabaj, con el objetivo de hacer imposible la vida en Nagorno-Karabaj, en una clara demostración de la intención genocida de su agresión.

Dicha intención genocida también quedó de manifiesto en la destrucción deliberada de iglesias, santuarios y monumentos culturales armenios llevada a cabo por parte de las fuerzas armadas de Azerbaiyán. Un ejemplo destacado de esta política es la destrucción selectiva de catedrales armenias, como la catedral del Santo Salvador Ghazanchetsots y la iglesia armenia de San Juan Bautista en Shushí, que continuó incluso después de establecerse un alto el fuego.

La crisis humanitaria provocada por la agresión armada de Azerbaiyán se vio agravada por la propagación de la COVID-19 en Nagorno-Karabaj. Los ataques deliberados y selectivos de Azerbaiyán, que causaron graves daños en centros sanitarios, gasoductos y conductos de agua, limitaron gravemente la capacidad de las autoridades de Artsaj para contener y combatir la pandemia.

Tras la agresión, los centenares de bombetas de racimo, submuniciones y otros restos explosivos de guerra que hay esparcidos por asentamientos civiles y tierras agrícolas siguen constituyendo un gran peligro para los civiles, lo cual tiene un efecto adverso duradero en la situación humanitaria y socioeconómica de Nagorno-Karabaj.

Es indispensable dar una respuesta adecuada al uso por parte de Azerbaiyán de municiones incendiarias, como el fósforo blanco, que provocó incendios forestales masivos en Nagorno-Karabaj y causó graves lesiones físicas y psicológicas e importantes daños medioambientales, con el fin de garantizar las medidas de reparación y rendición de cuentas.

Armenia agradece las actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja y del centro de respuesta humanitaria de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la Federación de Rusia, que han sido fundamentales para atender las necesidades vitales inmediatas de la población afectada por el conflicto. Sigue siendo una prioridad crucial rehabilitar adecuadamente las infraestructuras dañadas, como los centros médicos, los sistemas de abastecimiento de agua, las redes eléctricas y las líneas de comunicación, y resolver la cuestión de los restos explosivos de guerra que contaminan grandes extensiones para dar una respuesta humanitaria integral y a largo plazo.

Los intentos de Azerbaiyán de convertir en un arma la cuestión del acceso humanitario seguro y sin obstáculos de los organismos de las Naciones Unidas a la zona de conflicto de Nagorno-Karabaj contravienen los principios humanitarios fundamentales y tienen como objetivo explícito socavar las iniciativas internacionales para realizar una evaluación exhaustiva de las necesidades humanitarias, de protección y de recuperación temprana, así como de la situación de los derechos humanos de la población afectada.

Reafirmamos la imperiosa necesidad de actuar en pleno cumplimiento de las obligaciones derivadas del derecho internacional humanitario y de garantizar el acceso humanitario seguro y sin obstáculos de las Naciones Unidas a Nagorno-Karabaj, en consonancia con los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia.

Anexo 21**Declaración de la Misión Permanente de Austria ante las Naciones Unidas**

Austria da las gracias a Viet Nam por convocar tan oportunamente la videoconferencia pública sobre la protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil en el marco del punto del orden del día “Protección de los civiles en los conflictos armados”, y se adhiere plenamente a las declaraciones formuladas en nombre de la Unión Europea (anexo 32) y del Grupo de Amigos sobre la protección de los civiles en los conflictos armados (anexo 47). Además, quisiéramos destacar algunas de nuestras prioridades nacionales.

En primer lugar, reiteramos nuestro llamamiento al pleno cumplimiento del derecho internacional humanitario, que prevé, entre otras cosas, la protección especial de los bienes civiles, entre ellos los objetos indispensables para la supervivencia de la población civil. La aplicación estricta y coherente de los principios del derecho internacional humanitario por todas las partes en los conflictos, tanto internacionales como no internacionales, es de suma importancia. Austria sigue siendo una firme defensora de los debates intergubernamentales y las iniciativas multilaterales sobre el modo de fortalecer el derecho internacional humanitario.

A este respecto, cabe mencionar que el derecho internacional humanitario considera que cualquier bien que no contribuya a la acción militar es un bien de carácter civil, y, consecuentemente, le concede una protección concreta. En caso de duda, un bien debe considerarse de carácter civil. Esto es especialmente importante en las zonas pobladas, donde los civiles están representados desproporcionadamente y también se ven afectados desproporcionadamente por los ataques, que a menudo contravienen el derecho internacional humanitario. El uso de armas explosivas en estas zonas plantea un problema especial, ya que casi nueve de cada diez bajas resultantes del uso de armas explosivas en zonas pobladas son civiles. Por otra parte, además de las consecuencias inmediatas que tienen las armas explosivas para los bienes indispensables para la supervivencia de los civiles, como los centros médicos, las infraestructuras de agua y saneamiento y las redes eléctricas, los daños causados se ven agravados por los efectos indirectos o posteriores. Por ello, defendemos la pronta adopción de una declaración política firme para mejorar eficazmente la protección de los civiles en el contexto del uso de armas explosivas en zonas pobladas.

En segundo lugar, la pandemia de enfermedad por coronavirus se ha sumado a los ya numerosos problemas que tiene la población civil en los conflictos armados, en particular las mujeres y los niños, lo que ha perjudicado aún más sus medios de vida y ha aumentado aún más la gran demanda de necesidades humanitarias, como los alimentos, el albergue, el acceso al agua potable y a instalaciones de saneamiento y los servicios médicos. Por lo tanto, Austria acoge con beneplácito la iniciativa del Secretario General de crear un Equipo de Tareas de Alto Nivel para la Prevención de la Hambruna como un avance importante.

En tercer lugar, la protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil y la posibilidad de una asistencia eficaz por parte de los agentes humanitarios guardan una estrecha relación. Por consiguiente, es de suma importancia garantizar un acceso humanitario seguro, completo, sin obstáculos y sostenido, conforme a lo establecido en el derecho internacional humanitario, para llegar a todas las personas necesitadas, en particular a las más vulnerables. La comunidad internacional debe adoptar una postura más abierta para condenar las restricciones de acceso y encontrar soluciones políticas y prácticas para eliminarlas. Dada nuestra preocupación por la incidencia de los ataques directos e indiscriminados contra el personal humanitario y médico, también debemos intensificar nuestros esfuerzos para garantizar su seguridad.

Por último, consideramos que la rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad por las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario son fundamentales para lograr la reconciliación y una paz sostenible. En ese sentido, deseamos destacar el papel único e inestimable que desempeña la Corte Penal Internacional. Quisiéramos expresar nuestro apoyo constante e inquebrantable a la Corte y alentamos encarecidamente a todos los Estados partes en el Estatuto de Roma a que ratifiquen con prontitud la enmienda del Estatuto de Roma de diciembre de 2019, por la que se permite a la Corte investigar y enjuiciar como crimen de guerra la práctica de hacer padecer hambre a los civiles de forma deliberada como método de guerra, en particular en los conflictos armados no internacionales.

Anexo 22**Declaración del Representante Permanente de Azerbaiyán ante las Naciones Unidas, Yashar Aliyev**

Para comenzar, quisiera dar las gracias a la delegación de Viet Nam por haber convocado esta importante reunión para poner de relieve las experiencias, los problemas y las recomendaciones relativos a la protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil en los conflictos armados.

La protección de los civiles frente a los ataques directos e indiscriminados es uno de los objetivos fundamentales del régimen jurídico humanitario internacional y existen numerosas prohibiciones de actos que socavan ese objetivo. El principio de distinción ocupa un lugar central en ese régimen. A los bienes de carácter civil se aplican muchas de las medidas destinadas a proteger a los propios civiles.

Azerbaiyán se encuentra entre los países que han sufrido enormemente los efectos devastadores de los conflictos. Como es sabido, a principios de la década de 1990, Armenia desató una guerra total contra Azerbaiyán. Como consecuencia, una parte importante del territorio de Azerbaiyán fue ocupada y permaneció bajo ocupación durante casi 30 años.

Durante el conflicto, Armenia ha violado en numerosas ocasiones la prohibición de los ataques dirigidos a civiles y bienes de carácter civil o que les causen daños indiscriminados o desproporcionados. La guerra se cobró la vida de decenas de miles de personas; en todas las zonas capturadas se procedió a la depuración étnica de más de 700.000 azerbaiyanos, y la mayoría de las ciudades, pueblos y aldeas ocupados fueron arrasados. Además, la comunidad internacional ha calificado la destrucción a gran escala y el daño irreversible del medio natural por parte de Armenia como una forma de agresión ambiental.

Desde 2015 se ha producido una nueva escalada en los territorios ocupados de Azerbaiyán y sus alrededores. En abril de 2016 y julio de 2020, Armenia provocó hostilidades a gran escala a lo largo de la primera línea y en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán. En mayo de 2016, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados denunció los daños que los bombardeos de artillería y las municiones sin detonar habían causado a los bienes de carácter civil en las aldeas azerbaiyanas cercanas a la zona de conflicto. En julio de 2020, los ataques transfronterizos de las fuerzas armadas de Armenia plantearon una amenaza para los oleoductos y gasoductos internacionales estratégicos y el ferrocarril Bakú-Tiflis-Kars en el territorio de Azerbaiyán.

Un nuevo acto de agresión que llevó a cabo Armenia a finales de septiembre de 2020 y las acciones de combate posteriores causaron numerosas bajas entre los civiles azerbaiyanos. Se infligieron enormes daños a las infraestructuras civiles de varias ciudades importantes de Azerbaiyán fuera de la zona de conflicto. Las fuerzas armadas de Armenia también atacaron la infraestructura energética de Azerbaiyán. El misil balístico que se lanzó sobre la ciudad de Mingachevir cayó en las inmediaciones del edificio de la central termoelectrica de Azerbaiyán, en el complejo hidroeléctrico de Mingachevir, el mayor embalse de agua del Cáucaso meridional.

Como resultado de la operación de contraofensiva emprendida y completada con éxito por las fuerzas armadas de Azerbaiyán, se liberaron de la ocupación unos 10.000 km² del territorio de Azerbaiyán, entre los que se encontraban más de 300 ciudades, pueblos y aldeas. La magnitud de la destrucción, el vandalismo, el saqueo y el pillaje que quedó patente en esos territorios tras su liberación es impactante y no tiene precedentes. La mayor parte de esas zonas se ha convertido literalmente en una tierra fantasma, habida cuenta de que toda la infraestructura civil

fue objeto del saqueo y la destrucción. Además, las fuerzas armenias en retirada y los colonos ilegales armenios que desalojaban esos territorios desmontaban y luego quemaban las casas, las escuelas y otras infraestructuras civiles, cortaban los cables y postes eléctricos, destruían gasolineras, talaban árboles y prendían fuego a los bosques en un intento de no dejar nada en pie.

La destrucción de las infraestructuras civiles y los extensos campos de minas en las zonas liberadas plantean grandes problemas para el regreso de los desplazados internos a sus hogares y propiedades en condiciones de seguridad. El Gobierno de Azerbaiyán ha dado prioridad a la rehabilitación y reconstrucción de esos territorios y a la restauración de las viviendas, los servicios esenciales y las instalaciones de transporte y comunicaciones en ellos con el fin de garantizar una recuperación socioeconómica rápida y la consolidación de la paz después del conflicto. Mientras tanto, se están preparando los planes maestros de todas las ciudades y se están ejecutando varios proyectos, que cuentan con la participación de asociados internacionales.

Al mismo tiempo, la rendición de cuentas por las violaciones graves del derecho internacional debe ser una consecuencia inevitable de los delitos cometidos. La lucha contra la impunidad también es un instrumento importante de prevención y un requisito fundamental para alcanzar una paz duradera y una auténtica reconciliación.

Anexo 23**Declaración del Representante Permanente de Bahrein ante las Naciones Unidas, Jamal Alrowaiei**

[Original: árabe]

Para comenzar, quisiera dar la bienvenida al Ministro de Relaciones Exteriores de la República Socialista de Viet Nam, Excmo. Sr. Bui Thanh Son, que preside esta sesión. Doy las gracias a la Misión Permanente de la República Socialista de Viet Nam, que ha ocupado la Presidencia del Consejo de Seguridad durante el mes de abril, por haber convocado esta importante reunión en un momento en el que los conflictos armados en las zonas urbanas van en aumento, lo que supone una amenaza no solo para la vida de los civiles, sino también para las instalaciones civiles que prestan los servicios esenciales que hacen posible que se cuente con condiciones de vida dignas.

Quiero dar las gracias a los ponentes: el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia, Mark Lowcock; el Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer; y el Presidente de la Junta Directiva de International Peace Institute, Kevin Rudd.

Si bien los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977 ofrecen un marco jurídico para la protección de los civiles y los bienes de carácter civil en los conflictos armados, la población civil y sus bienes conexos siguen siendo los principales objetivos de dichos conflictos armados, en especial a medida que los conflictos armados en las zonas urbanas surgen con mayor asiduidad, cobrándose vidas inocentes y destruyendo bienes de carácter civil y tierras agrícolas. Según el informe que presentó el Secretario General ante el Consejo de Seguridad relativo a la protección de los civiles en los conflictos armados (S/2020/366), los ataques directos o indiscriminados de las partes en conflicto dañaron y destruyeron viviendas, escuelas, hospitales, mercados, lugares de culto e infraestructuras civiles esenciales. Asimismo, dado que los conflictos siguen haciendo mella en los hospitales y en las infraestructuras esenciales, el brote de la pandemia de enfermedad por coronavirus está debilitando la capacidad de los países afectados por un conflicto para prestar los servicios sanitarios necesarios a fin de contenerla. Del mismo modo, la inseguridad, la inestabilidad y la protección inadecuada del personal humanitario y sanitario dificultan la prestación de la ayuda humanitaria necesaria para aliviar el sufrimiento de la población civil. Habida cuenta de ello, Bahrein apoya el sentido llamamiento del Secretario General en favor de un alto el fuego inmediato.

Las milicias huzíes respaldadas por el Irán siguen utilizando drones cargados de explosivos y misiles balísticos contra la Arabia Saudita, dirigidos contra civiles inocentes y bienes de carácter civil, en violación manifiesta del derecho internacional humanitario. Bahrein ratifica su solidaridad con la Arabia Saudita respecto de todas las acciones emprendidas por ese país para disuadir a las milicias terroristas y preservar su seguridad, estabilidad e integridad territorial. Asimismo, apoyamos el hecho de que la Arabia Saudita considere que la comunidad internacional debe colaborar a fin de detener esos ataques flagrantes.

En conclusión, la protección de la población civil —en especial de los grupos vulnerables y de los bienes de carácter civil, incluidas las instalaciones civiles esenciales— en los conflictos armados debe seguir siendo una prioridad para la comunidad internacional. Reiteramos nuestro apoyo al llamamiento del Secretario General en favor de un alto el fuego mundial, que es más urgente que nunca.

Anexo 24**Declaración de la Misión Permanente de Bélgica ante las Naciones Unidas**

[Original: francés]

Bélgica suscribe las declaraciones escritas presentadas en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros (anexo 32) y del Grupo de Amigos sobre la protección de los civiles (anexo 47).

Los informes del Secretario General sobre la protección de los civiles en los últimos años nos instan a tomar medidas relativas a la creciente falta de respeto por el derecho internacional humanitario, la ausencia de protección y las trágicas consecuencias que estas carencias tienen en la mayoría de los países que figuran en el programa del Consejo de Seguridad. Los heridos y los enfermos, así como el personal médico, están siendo atacados de forma deliberada. Los agentes humanitarios imparciales siguen viéndose perjudicados y se enfrentan a limitaciones de acceso persistentes y generalizadas, y millones de civiles se ven obligados a abandonar sus hogares para dirigirse a un destino peligroso en el que se enfrentarán a unas necesidades de protección y asistencia mayores. Los informes detallan las preocupantes tendencias de los ataques indiscriminados contra civiles y bienes de carácter civil —incluidas las instalaciones médicas y las escuelas, así como los bienes e instalaciones indispensables para la supervivencia de la población—, que parecen producirse con una frecuencia desoladora.

En este contexto, Bélgica quisiera señalar a la atención del Consejo las siguientes observaciones.

En primer lugar, permítaseme abordar el destino de los niños. Esos ataques causan un sufrimiento humano inmenso, con efectos a largo plazo que en ocasiones perduran durante varias generaciones, y, en consecuencia, ponen en peligro las perspectivas de una paz duradera. Descuidar a las generaciones de niños en situaciones de conflicto armado condena a sus sociedades al fracaso, incluso mucho después de que el conflicto haya finalizado.

En el último año, hemos presenciado ciberataques dirigidos a instalaciones y organizaciones médicas, y a otros que se encuentran en la primera línea de lucha contra la pandemia de la enfermedad por coronavirus. Estas acciones ponen en riesgo vidas humanas al afectar o perturbar la capacidad de las instituciones críticas para operar, distribuir suministros o prestar servicios esenciales. Por ello, Bélgica apoya el llamamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja a los Gobiernos para que tomen medidas inmediatas y decisivas con el objetivo de poner fin a todos los ciberataques contra infraestructuras e instalaciones civiles y médicas. A este respecto, los Gobiernos deben trabajar de consuno, también en las Naciones Unidas, para reafirmar y volver a comprometerse con las normas internacionales que prohíben tales acciones, en particular el derecho internacional humanitario.

En efecto, el derecho internacional humanitario es el instrumento más importante para lograr tales objetivos. El respeto del derecho internacional humanitario no es una cuestión de tecnicismo jurídico, sino, ante todo, de decencia humana y de voluntad política. Se trata de la voluntad política de respetar el derecho internacional humanitario a la hora de ejecutar acciones hostiles; de consagrar esas normas en la formación de los combatientes y en las prácticas militares; de poner en marcha mecanismos legislativos e institucionales adecuados para hacer frente a las violaciones del derecho internacional humanitario; y de velar por que los responsables de crímenes de guerra rindan cuentas de sus actos.

Por lo tanto, ¿cómo podemos reforzar la aplicación del derecho internacional humanitario? Bélgica quisiera compartir hoy algunas buenas prácticas.

En primer lugar, debemos promover la aplicación y difusión del derecho internacional humanitario a nivel nacional. En este sentido, las comisiones nacionales de derecho humanitario y las Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja desempeñan un papel crucial. Asimismo, resulta imposible seguir promoviendo el derecho internacional humanitario y la protección de los civiles sin la colaboración de los grupos armados no estatales, ya que solo a través del diálogo podemos difundir información, fomentar el respeto de las normas y negociar el acceso humanitario. Por lo tanto, hay que velar por que las medidas antiterroristas no dificulten este compromiso y, en consecuencia, no supongan un obstáculo para la acción humanitaria basada en los principios humanitarios.

Además, es importante proporcionar una formación adecuada a las fuerzas armadas. En Bélgica, el derecho internacional humanitario es una parte esencial de la formación del personal militar. Asimismo, estamos invirtiendo en capacitación en materia de protección de los civiles para países que aportan contingentes, en especial en francés.

En segundo lugar, los Estados que apoyan a las partes en un conflicto armado, ya sea a través de una coalición de Estados o apoyando a un grupo armado no estatal, deben respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario, es decir, tratar de ejercer toda la influencia posible sobre el comportamiento de las partes beligerantes a fin de garantizar que se atengan al derecho internacional humanitario.

En tercer lugar, corresponde a los Estados, en virtud de las obligaciones que les impone el derecho internacional humanitario, dotarse de los medios necesarios para garantizar que quienes cometen violaciones rindan cuentas de sus actos, así como para disuadir de la comisión de nuevas atrocidades. Por lo tanto, Bélgica ha establecido la jurisdicción universal, que se aplica tan pronto como la situación lo permite. A este respecto, recordamos la contribución de la Corte Penal Internacional a la lucha contra la impunidad por los delitos más graves, incluidos los crímenes de guerra. Asimismo, recordamos que privar a los civiles de bienes esenciales para su supervivencia, como la obstrucción deliberada de la entrega de ayuda o servicios con el fin de hacer padecer hambre a la población de manera intencionada, es un crimen de guerra y, como tal, puede ser llevado ante la Corte Penal Internacional.

Para concluir, la comunidad internacional debe ser más constante en su condena de estas flagrantes violaciones del derecho internacional humanitario. No cabe duda de que el Consejo de Seguridad tiene un papel fundamental en este sentido. Podría alentar la formación en derecho internacional humanitario del personal de mantenimiento de la paz, dar la importancia adecuada al derecho internacional humanitario en las iniciativas para restablecer el estado de derecho en las situaciones posteriores a los conflictos, promover la rendición de cuentas y añadir a los autores de los delitos más graves a las listas de sanciones o hacer un mejor uso de los mecanismos de control e investigación existentes.

Anexo 25**Declaración de la Misión Permanente del Brasil ante las Naciones Unidas**

El Brasil felicita a Viet Nam por su iniciativa de promover este oportuno debate sobre la protección de bienes indispensables para la supervivencia de la población civil. Esta cuestión es fundamental para la protección de los civiles, que en general sufren las nefastas consecuencias de unos conflictos armados cada vez más largos y complejos. Como destaca acertadamente la nota conceptual (S/2021/335, anexo), mueren más civiles por los efectos indirectos de los conflictos armados que por las hostilidades y los ataques.

El derecho internacional humanitario proporciona un marco sólido para la protección de los bienes civiles, y concede también una protección especial a los que son indispensables para la supervivencia de la población. Va más allá de los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. Los Protocolos Adicionales I y II de los Convenios de Ginebra establecen una clara prohibición de privar deliberadamente de dichos bienes a la población civil y disponen unas normas detalladas al respecto. El derecho internacional humanitario moderno refleja, por tanto, una decisión consciente de reforzar la protección y limitar los medios y métodos de guerra para minimizar el sufrimiento humano.

Sin embargo, a pesar de las novedades normativas que regulan los conflictos armados, el Consejo de Seguridad recibe con mucha frecuencia informes sobre la destrucción de bienes indispensables para la supervivencia de la población civil. La clara prohibición de matar de hambre a los civiles como método de guerra no ha impedido esta espantosa práctica en los conflictos actuales. Las nefastas consecuencias de estas violaciones pueden dejarse sentir durante generaciones, no solo por los elevados costes de recuperación, sino también por la pérdida de vidas y medios de subsistencia.

Está claro que el problema no es la ausencia de normas, sino su incumplimiento y la falta de respeto por ellas. Por lo tanto, el Consejo de Seguridad debería pedir que se respete y se acate el derecho internacional humanitario de forma constante. Si se producen infracciones, hay que responder a ellas con una rendición de cuentas independiente y no selectiva, entre otros medios, por los instrumentos pertinentes del derecho penal internacional. Los Estados Miembros, por su parte, deben poner más empeño en difundir las normas y principios del derecho internacional humanitario a nivel interno, incluso en tiempos de paz.

Es igualmente importante abordar las causas fundamentales de los conflictos armados. Al fin y al cabo, la mejor manera de proteger a los civiles y los bienes indispensables para su supervivencia es evitar que se produzcan conflictos. Al hacer hincapié en la diplomacia y la cooperación se reducen los riesgos de los conflictos armados y los costes humanos derivados de ellos. La comunidad internacional debe demostrar su compromiso renovado de hacer uso de los instrumentos establecidos por la Carta de las Naciones Unidas para la prevención de conflictos y la solución pacífica de disputas.

Las operaciones de mantenimiento de la paz también pueden ayudar a los Estados Miembros a crear la capacidad necesaria para desempeñar su responsabilidad primordial de proteger a sus ciudadanos. Los proyectos de efectos rápidos, por ejemplo, pueden proporcionar un alivio inmediato a la población civil y mejorar las condiciones para aumentar la eficacia de la ejecución de los mandatos de protección de la población civil. A la hora de abordar la protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil de una manera más global también hacen falta soluciones a largo plazo que aumenten la resiliencia, reduzcan la dependencia de

la ayuda humanitaria y ayuden a los Estados a avanzar por la vía de la reconciliación política y el desarrollo. Este aspecto también sirve para resaltar la importancia de integrar los esfuerzos de consolidación de la paz en las Naciones Unidas, y los beneficios de que exista una mayor interacción entre el Consejo y la Comisión de Consolidación de la Paz.

Para concluir, todo conflicto armado causará inevitablemente destrucción, pondrá en peligro la infraestructura civil e interrumpirá los servicios esenciales. Aunque respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario es fundamental para reducir al mínimo el sufrimiento humano, la forma más eficaz de proteger a los civiles es prevenir los conflictos y, si surgen, promover incansablemente soluciones políticas para lograr una paz duradera.

Anexo 26**Declaración de la Representante Permanente Adjunta de Costa Rica ante las Naciones Unidas, Maritza Chan Valverde**

En primer lugar, Costa Rica desea dar las gracias a Viet Nam por convocar este debate abierto de alto nivel sobre “Infraestructuras críticas: la protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil”. Costa Rica se complace en verlo a usted, Ministro Bui Thanh Son, presidiendo esta importante reunión. Apreciamos enormemente las exposiciones informativas ofrecidas por el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock; el Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, y el Presidente de la Junta Directiva de International Peace Institute, Kevin Rudd.

Costa Rica lamenta profundamente que las partes en conflicto, tanto las estatales como las no estatales, no hayan distinguido entre objetivos militares y población y bienes civiles, ni hayan tomado todas las precauciones posibles en sus hostilidades. Gran parte de los daños que sufren los civiles en los conflictos son indiscriminados y permanentes, pero también se pueden evitar. Al respecto, Costa Rica desea destacar dos cuestiones.

En primer lugar, a pesar de las protecciones jurídicas internacionales existentes, la población y los bienes civiles siguen sufriendo grandes daños: se destruyen negocios y mercados locales, se demuelen escuelas y se incapacita la infraestructura de salud pública. Esto afecta a las fuentes de ingresos de las personas y sus comunidades y debilita la sensación de seguridad y el sentido de dignidad. La vida cotidiana se ve alterada, y la comunidad internacional no está cumpliendo con su obligación de proteger a los civiles en los conflictos si seguimos permitiendo la destrucción de infraestructuras y servicios civiles al ignorar los efectos directos, indirectos y posteriores del uso de armas explosivas en zonas pobladas. Por consiguiente, Costa Rica apela a los Estados Miembros a unirse para apoyar una firme declaración política destinada a fortalecer la protección de los civiles contra el daño humanitario infligido por el uso de armas explosivas en zonas pobladas.

En segundo lugar, los daños medioambientales relacionados con los conflictos pueden tener consecuencias devastadoras en las vidas y los medios de subsistencia de los civiles, tales como efectos perjudiciales en la salud y sufrimiento humano, como el Secretario General señaló en sus informes de 2019 y 2020 sobre la protección de los civiles en los conflictos armados (S/2019/373 y S/2020/366). La protección del medio ambiente es indispensable para la supervivencia, por lo que proteger el medio ambiente en los conflictos armados es proteger a los civiles.

La destrucción del medio ambiente, por ejemplo, por la exposición a la contaminación causada por el conflicto o a los restos tóxicos de la guerra, puede hacer insostenible la vida de los civiles y afectar a la prestación de servicios esenciales a la población civil. Por ejemplo, la contaminación de los recursos hídricos relacionada con los conflictos y la destrucción de las infraestructuras de agua, saneamiento e higiene pueden impedir el acceso al agua potable y la eliminación de residuos, lo que resulta especialmente preocupante a la hora de frenar la propagación de enfermedades transmisibles, como el cólera y la enfermedad por coronavirus. El cierre deliberado de instalaciones de bombeo de agua sigue teniendo consecuencias devastadoras para la vida de millones de personas en las zonas afectadas por el conflicto en Oriente Medio y el este de Ucrania, además de tener consecuencias perjudiciales para la producción agrícola. Mientras tanto, debido a los daños sufridos por las estaciones de bombeo de agua e infraestructuras energéticas relacionadas en Ucrania, se corre el riesgo de que las minas que almacenan residuos nucleares y tóxicos se inunden, lo cual podría ocasionar una catástrofe medioambiental regional.

Los civiles que viven en zonas de conflicto están aún más expuestos a los riesgos climáticos, ya que la violencia interrumpe la gobernanza medioambiental y hunde las infraestructuras de mitigación esenciales para combatir estos impactos, así como la crisis climática y sus efectos. Costa Rica exhorta al Secretario General y al Consejo de Seguridad a que tomen medidas para garantizar el seguimiento y la evaluación periódicos de esos riesgos en situaciones de conflicto armado, con miras a comprender mejor las repercusiones de la degradación ambiental relacionada con el conflicto en los bienes de carácter civil indispensables y hallar soluciones que mejoren la prevención, la mitigación y la rehabilitación ambiental como medio para proteger mejor a la población civil en los conflictos armados.

La labor de proteger a los civiles en los conflictos es cada vez más compleja, y la cuestión de cómo protegerlos se torna especialmente pertinente. Asegurar una protección eficaz comienza por comprender qué amenazas existen para la seguridad humana y cómo difieren en el seno de una población. Sin embargo, pese a las buenas intenciones, la población civil sigue sufriendo daños que es preciso abordar para preservar la credibilidad. La pandemia de enfermedad por coronavirus ha reducido aún más la capacidad de los miembros de la comunidad internacional para centrarse en sus responsabilidades de protección en caso de una crisis grave en su territorio. Es evidente que puede y debe trabajarse más para prestar apoyo a la población civil y a los desplazados internos. No obstante, el carácter transversal de la protección de los civiles confiere a esta cuestión una importancia particular en el contexto, a menudo compartimentado, del sistema de las Naciones Unidas y las diversas partes interesadas.

Anexo 27**Declaración del Representante Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, Pedro Luis Pedroso Cuesta**

La humanidad se enfrenta a una situación compleja y a desafíos colosales. La paz y la seguridad internacionales se encuentran amenazadas por el aumento de los conflictos y de la guerra no convencional, mientras que la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha desencadenado una crisis de efectos múltiples y devastadores, que trascienden el ámbito de la salud y afectan a la economía, el comercio y a nuestras sociedades en general.

Es preciso erradicar las causas profundas del conflicto e instaurar un orden internacional justo, democrático y equitativo. Los cuantiosos recursos destinados a la industria armamentística deben invertirse en desarrollo sostenible y en dotar a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de los medios necesarios para su aplicación. La Carta de las Naciones Unidas debe cumplirse estrictamente, en particular sus propósitos y los principios de no injerencia en los asuntos internos de los Estados y de respeto por la soberanía y la integridad territoriales.

Compartimos la preocupación reflejada en los informes más recientes del Secretario General sobre la protección de los civiles en los conflictos armados, en los que se señala que los civiles siguen conformando la inmensa mayoría de las víctimas en situaciones de conflicto y son objeto de ataques indiscriminados y otros abusos.

Los desafíos a los que nos enfrentamos en la labor de proteger a los civiles, sobre todo en situaciones de conflicto, son múltiples y abarcan, entre otros, las transferencias de armas a agentes no estatales y no autorizados, el incremento de los programas de desarrollo relativos a sistemas de armas autónomas letales, el uso de aeronaves militares no tripuladas para ataques militares, el aumento del gasto militar y el uso malicioso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Los recursos asignados al desarrollo de esas tecnologías deberían contribuir al desarrollo económico y social de los pueblos.

El Consejo de Seguridad debe cumplir con su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentando el respeto del derecho internacional y el arreglo pacífico de las controversias. Debe abstenerse de respaldar aventuras militares y de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza en la solución de conflictos.

La responsabilidad de prevenir los conflictos y de proteger a los civiles radica en los Estados. La comunidad internacional, las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregionales pueden prestar asistencia constructiva, pero no ejercer el papel que corresponde al Estado afectado. Cuando así se requiera, deben respaldar y complementar, de manera imparcial e incondicional, los esfuerzos de los Gobiernos nacionales, respetando estrictamente su soberanía, integridad territorial e independencia política.

Es inaceptable que se manipulen iniciativas de protección de los civiles para promover los intereses geopolíticos de determinados Estados y que se utilicen como excusa para eludir e infringir los principios de la Carta de las Naciones Unidas e intervenir en los asuntos internos de otros Estados.

Condenamos enérgicamente que se mate a personas inocentes, así como la utilización indiscriminada y desproporcionada de la fuerza contra la población inocente. La protección de los civiles no puede ser un pretexto para legitimar intervenciones militares que tengan por objeto imponer un cambio de régimen y derrocar el orden político, económico y social establecido legítimamente en Estados soberanos.

Reconocemos que la asistencia humanitaria constituye un componente fundamental de la protección de los civiles en los conflictos armados y que debe prestarse de conformidad con los principios de la Carta, el derecho internacional, el

derecho internacional humanitario y la resolución 46/182 de la Asamblea General. Deben respetarse los principios rectores de la asistencia humanitaria, a saber, los de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, y la prestación de asistencia debe ser conforme al derecho internacional y a la legislación nacional de los países afectados, además de contar con el consentimiento de los Estados beneficiarios.

Nos oponemos a la manipulación de la asistencia humanitaria con fines políticos. La aplicación y la proliferación de medidas coercitivas unilaterales, en contravención del derecho internacional, causan penurias y daños humanos graves a la propia población civil que se pretende proteger. Esas medidas arbitrarias e ilegales generan dificultades adicionales en el contexto actual de la lucha contra la pandemia de COVID-19.

Reiteramos la plena vigencia de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada por los Jefes de Estado y de Gobierno de toda la región.

Todas las partes involucradas en hostilidades deben acatar las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional humanitario, consagradas en los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales.

Eso se aplica también a las operaciones de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz, en particular las que tienen el mandato de proteger a la población civil y están desplegadas en contextos de seguridad variables. En ese caso debe haber mandatos realistas y factibles, con objetivos concretos y claramente definidos, además de los recursos necesarios para no poner en peligro la seguridad y la protección del personal de mantenimiento de la paz.

La protección de los civiles, sobre todo en situaciones de conflicto armado, requiere voluntad y compromiso políticos. Reiteramos nuestro apoyo al llamamiento urgente del Secretario General en favor de poner fin a las hostilidades, acabar con el flagelo de la guerra y crear oportunidades para la diplomacia y la cooperación, lo que nos permitirá afrontar de consuno la temible pandemia de COVID-19.

Todos los Estados, y en especial los miembros del Consejo de Seguridad, tienen el deber de defender el multilateralismo y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos, el respeto de la igualdad soberana de los Estados y su independencia política, su unidad y su integridad territorial; el arreglo pacífico de las controversias; y la abstención del uso o la amenaza de uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

Anexo 28**Declaración de la Misión Permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas**

[Original: español]

Sr. Presidente: Deseo expresarle el aprecio de mi delegación por la convocatoria a esta reunión sobre la protección de objetos indispensables para la sobrevivencia de la población civil, asunto clave en los esfuerzos de las Naciones Unidas por promover y asegurar la vida y la dignidad de las poblaciones en las zonas de conflicto, así como el pleno respeto de sus derechos. Junto con la paz, se trata aquí del tema central que justifica la existencia del Consejo de Seguridad y de las Naciones Unidas. Su inclusión en la agenda formal del Consejo, hace 32 años, ha permitido avanzar en la materia, aunque todavía existen grandes desafíos.

En 2019 celebramos el 70° aniversario de los Convenios de Ginebra, establecidos en 1949, pero, a pesar de contar con un marco normativo robusto, es poco lo que hemos logrado como comunidad internacional en los últimos años luego de dicha conmemoración. En 2021, tenemos el reto particular de recuperar el terreno perdido como consecuencia de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), de la que estamos saliendo poco a poco, pero que dismanteló los esfuerzos y proyecciones del primer año de la Década de Acción —que fue 2020— de cara a un mundo de paz en 2030.

En las circunstancias actuales de crisis de salud global, todos los Miembros de esta Organización y todos sus órganos, incluido de manera particular el Consejo de Seguridad, debemos estar a la altura de este desafío existencial. Para ello es indispensable asegurar la implementación del cese al fuego a nivel mundial.

A tal efecto, es clave la implementación de las resoluciones 2532 (2021) y 2565 (2021) del Consejo de Seguridad para facilitar los accesos y corredores de ayuda humanitaria, y todas las resoluciones orientadas a la protección de la población. Pero también es indispensable ampliar los dispositivos del Consejo de Seguridad sobre la protección de objetos vitales para la población civil.

El último informe del Secretario General (S/2020/525) daba cuenta de una situación absolutamente precaria y de las enormes brechas que persistían y que se ampliaron con la COVID-19. Los bienes de carácter civil continuaron siendo destruidos o dañados en los últimos tres años, y es el momento de una respuesta contundente por parte del Consejo de Seguridad. Destaco en ese sentido las presentaciones de esta mañana realizadas por Viet Nam, así como por el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia y Jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock. Destaco también la presentación del Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, y del Presidente de la Junta Directiva de International Peace Institute, Kevin Rudd.

La destrucción de accesos significa barreras adicionales para las personas con discapacidad. Destaco, por tanto, la resolución 2475 (2019), que reconoce el impacto discriminado de los conflictos armados sobre esas personas.

Asimismo, es lamentable que las mujeres, los niños, los desplazados internos y los refugiados sigan siendo los más afectados por los ataques a bienes civiles vitales. Es central que el Consejo considere en este tema el impacto diferenciado que sufren las mujeres por violencia y conflicto y que fomente y asegure la participación de las mujeres en los procesos de prevención de conflictos y consolidación de la paz, incluidos los esfuerzos para la protección de civiles.

El Ecuador rechaza y condena los continuos ataques a los servicios de salud, incluida la destrucción de hospitales, al igual que el uso militar o el ataque a las escuelas. Condenamos y rechazamos también el uso del ciberespacio para destruir o afectar infraestructura crítica, incluida el área de salud.

El Ecuador continuará impulsando los esfuerzos de la Organización contra el uso de explosivos en zonas pobladas y, en esta ocasión, insistimos en nuestra condena del uso de esas armas, así como nuestro compromiso de continuar apoyando los esfuerzos de la Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la sociedad civil para promover la implementación efectiva del derecho internacional humanitario y aliviar el impacto y sufrimiento que generan los conflictos.

Defendemos la solución pacífica de las controversias y rechazamos el uso de armas con efectos indiscriminados, prohibidas por el derecho internacional humanitario. Promovemos además el desarme universal. Por esa razón, rechazamos también el uso de armas letales autónomas. La autonomía de las armas, además de bajar los umbrales de los orígenes de nuevos conflictos, no favorece el cumplimiento cabal del derecho internacional humanitario, que requiere un control humano absoluto.

La responsabilidad y la rendición de cuentas son clave. Por esa razón, el Ecuador se sumó en enero de 2020 a la iniciativa franco-mexicana que promueve la suspensión del uso del veto en el caso de atrocidades masivas, y suscribimos en noviembre de 2018 el Código de Conducta para la respuesta del Consejo de Seguridad en casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra del Grupo para la Rendición de Cuentas, la Coherencia y la Transparencia. Seguimos exhortando a que todos los países se sumen.

No quiero dejar de mencionar las consecuencias humanitarias de las armas nucleares. Ningún marco internacional de protección de civiles puede ser integral y suficiente si no abarca la prohibición completa de las armas nucleares. La sola existencia de esas armas desafía la existencia de la humanidad. Ni el mecanismo más sofisticado en el país más desarrollado podría contener o mitigar el impacto devastador de las armas nucleares sobre la población, por lo que su existencia es una negación de la protección de civiles.

Finalmente, confirmo que el Ecuador se sumó al copatrocinio del proyecto de resolución S/2021/402, que consideramos como una herramienta valiosa para los esfuerzos del Consejo de Seguridad en esta materia.

Anexo 29**Declaración de la Misión Permanente de Egipto ante las Naciones Unidas**

Celebramos la convocatoria de este importante debate abierto del Consejo de Seguridad y damos las gracias a Viet Nam por esta oportuna iniciativa.

En efecto, el mundo está presenciando desafíos ingentes y sin precedentes en lo que respecta a la protección de los civiles en los conflictos armados. Esos desafíos están presentes en múltiples conflictos y en conflictos que se están exacerbando, y van acompañados de un aumento de las violaciones contra los civiles y de las mayores olas de desplazamiento y migración desde la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de esos conflictos recaen sobre los civiles, especialmente sobre los grupos más vulnerables, a saber, las mujeres y los niños.

Se ha determinado que la destrucción de bienes indispensables para la supervivencia de la población civil y la interrupción de los servicios esenciales constituyen un desafío considerable para el retorno seguro y el reasentamiento voluntario de las comunidades desplazadas. En un contexto de posconflicto, se debe otorgar prioridad a la rehabilitación y la reconstrucción de la infraestructura civil y al restablecimiento de los servicios esenciales a fin de facilitar la recuperación socioeconómica y la consolidación de la paz. Debido a los importantes costos que conllevan la rehabilitación y reconstrucción de las infraestructuras, la ayuda de los asociados internacionales para el desarrollo de capacidades podría desempeñar un papel esencial en el apoyo a los esfuerzos en pro de la consolidación de la paz. A ese respecto, Egipto reafirma la importancia de que todas las partes en los conflictos armados acaten las disposiciones del derecho internacional y del derecho internacional humanitario.

En 2016, Egipto, junto con otros países amigos, lideró una iniciativa en el Consejo de Seguridad con objeto de presentar un proyecto de resolución sobre la protección médica en los conflictos armados, que posteriormente se aprobó por consenso y con un amplio apoyo de la comunidad internacional como resolución 2286 (2016) al comienzo mismo de la Presidencia egipcia del Consejo de Seguridad, en mayo de 2016. Esa resolución se basó en todos los marcos jurídicos existentes que obligan a todas las partes en conflicto en lo que respecta a la protección de los enfermos y heridos, el personal sanitario, los hospitales y las instalaciones médicas.

De acuerdo con el derecho internacional, la responsabilidad principal de proteger a los civiles incumbe a los Estados. Se debe seguir otorgando la debida prioridad a la promoción del conocimiento, el respeto y la observancia por parte de los Estados de las obligaciones asumidas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

En los últimos años, hemos sido testigos de atrocidades perpetradas por agentes no estatales, lo que obliga a las Naciones Unidas a adoptar un enfoque exhaustivo para la protección de los civiles, en particular a través de sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo. A ese respecto, todas las partes en un conflicto tienen, en virtud de los Convenios de Ginebra de 1949, la obligación internacional de proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los civiles. Todas las partes, en particular los Estados, deben respetar los principios de distinción y proporcionalidad en los conflictos armados. Todas las partes deben abstenerse de atacar instalaciones médicas y bienes de carácter civil y permitir el acceso a quienes prestan asistencia humanitaria.

Asimismo, se deben respetar los principios de igualdad soberana, independencia política e integridad territorial de todos los Estados, así como el de no intervención. Es imprescindible contar con el consentimiento del país antes de que la asistencia humanitaria acceda a su territorio, y ese consentimiento debe mantenerse vigente durante todo el tiempo de actuación de las operaciones de ayuda.

Para concluir, deseamos subrayar la importancia de la contribución que hacen las misiones de mantenimiento de la paz a la protección de los civiles en los conflictos armados. Las misiones de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz constituyen uno de los recursos más eficaces de los que dispone la Organización para proteger a la población civil en situaciones de conflicto armado. Somos partidarios de dotar a dichas misiones del mandato y las capacidades que se necesitan para que puedan ejercer con mayor eficacia su labor de protección. Egipto subraya la importancia de que las misiones de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz asuman el principio del respeto de la soberanía y las especificidades culturales de los países receptores. Además, las misiones de mantenimiento de la paz dotadas de ese tipo de mandato deben ejercer sus tareas sin menoscabar la primacía de la responsabilidad de protección de los civiles, que corresponde a los Gobiernos de los países receptores.

Anexo 30**Declaración de la Misión Permanente de El Salvador ante las Naciones Unidas**

[Original: español]

Agradecemos a la Presidencia vietnamita del Consejo de Seguridad por haber organizado este importante debate abierto sobre la protección de la infraestructura esencial para la supervivencia de la población civil en zonas de conflicto. El Salvador brinda una gran relevancia a este tema, ya que son los civiles quienes continúan representando la gran mayoría de las víctimas en los conflictos y quienes sufren sus efectos inmediatos y en el corto y largo plazo.

El Salvador lamenta, tal como lo señala el Secretario General en su último informe sobre el estado actual de la protección de civiles en los conflictos armados (S/2020/366), el incremento de los ataques directos o indiscriminados de las partes en conflicto contra los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, incluidos aquellos que figuran como objeto de protección en los Convenios de Ginebra, así como otra infraestructura indispensable para la prestación de servicios de protección social básica, como la educación, la salud, el agua potable, la alimentación, la energía y los lugares de culto, entre otros. Es por ese motivo que El Salvador condena enérgicamente los ataques, la destrucción, la sustracción o la inutilización de los objetos indispensables para la supervivencia de la población civil, por ser prácticas contrarias al Protocolo Adicional I de 1977 de los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales, así como por sus graves consecuencias en el corto y largo plazo para la salud mundial, el desarrollo humano y la paz y porque esas mismas consecuencias tienen la capacidad de provocar desplazamientos dentro y fuera de las fronteras de los países afectados, poner en riesgo la seguridad alimentaria y ser un catalizador del cambio climático.

El Salvador lamenta que, a pesar del llamado realizado por el Secretario General en marzo de 2020 a un cese al fuego a nivel mundial para centrar la atención en la lucha contra la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), vemos que se han visto incrementados los ataques a los hospitales en diferentes países y regiones del mundo, lo que hace imperativo incrementar la protección, no solo de las instalaciones médicas, sino, principalmente, de los trabajadores humanitarios y sanitarios.

El Salvador reconoce que las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones representan una importante oportunidad para promover el desarrollo económico y social de los Estados. Sin embargo, el uso malintencionado de estas tecnologías se extiende también a los ataques cibernéticos contra la infraestructura esencial, particularmente en los sectores de la salud y el energético, que son los más vulnerables a los ciberataques. Hemos visto cómo, durante la pandemia de COVID-19, se han incrementado los ciberataques a los sistemas nacionales de salud, poniendo así en riesgo la vida de miles de personas. Aprovechamos esta oportunidad para condenar, en particular, los ciberataques contra la Organización Mundial de la Salud y los intentos de suplantación de identidad que han tenido lugar durante los últimos meses. El incremento de la interconectividad supone que estos ataques podrían verse incrementados en los próximos años, por lo que se debe seguir trabajando en su prevención y en una codificación del derecho internacional orientada a prevenir la mala utilización de las nuevas tecnologías y que reconozca la interrelación con el derecho internacional humanitario aplicable, incluso en el ámbito de las operaciones cibernéticas durante los conflictos armados.

Acogemos con satisfacción los esfuerzos del Consejo de Seguridad por debatir esta importante amenaza de manera sustantiva, con vistas a ofrecer soluciones eficaces. En ese sentido, celebramos la aprobación de la resolución 2573 (2021), presentada por Viet Nam, sobre la protección de la infraestructura esencial, e instamos al Consejo a que continúe con estos importantes debates, dejando de lado cualquier interés político o particular.

Debemos continuar trabajando en la rendición de cuentas y cerrar las puertas a la impunidad. En ese sentido, El Salvador considera que, para que no se repitan los crímenes de guerra, es indispensable facilitar el acceso de las víctimas a la justicia, así como la reparación para las víctimas y sobrevivientes. Los procesos incoados por la comisión de crímenes de guerra deben comprender la investigación y la posterior condena de los penalmente responsables, independientemente de quienes sean y de donde se hayan producido estos crímenes, todo ello de conformidad con el derecho penal internacional aplicable. Hacemos un llamado a los Estados a que continúen cooperando con los mecanismos de investigación y judiciales a nivel internacional para reducir escenarios de impunidad en este sentido.

Finalmente, El Salvador expresa la urgencia de seguir trabajando en el fortalecimiento de la coordinación y cooperación de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales; la capacitación de los miembros de las fuerzas armadas y los grupos armados sobre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos; y la mejora de las capacidades para dar seguimiento, investigar, llevar a juicio y condenar a los culpables de haber cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, actos de genocidio y otras violaciones del derecho internacional humanitario, así como ofrecer oportunidades de reparación e inserción en la sociedad a las víctimas y los sobrevivientes de dichos flagelos.

Anexo 31**Declaración del Representante Permanente de Etiopía ante las Naciones Unidas, Taye Atskeselassie Amde**

Deseo encomiar la fructífera labor de Viet Nam en la Presidencia del Consejo de Seguridad durante este mes de abril de 2021. Asimismo, doy las gracias a la Presidencia vietnamita por haber organizado el importante debate de hoy sobre la protección de los civiles y los bienes de carácter civil indispensables para su supervivencia.

El derecho internacional humanitario recogido en los Convenios de Ginebra no puede ser más claro en cuanto al régimen aplicable a la protección de los civiles y los bienes de carácter civil. Mi país es uno de los Estados signatarios de los Convenios de Ginebra desde 1949 y del Convenio de Ginebra relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra desde 1969.

En los conflictos armados convencionales, que han afectado a la mayoría de los Estados, la aplicación de esas normas se ha topado con graves retrocesos y lagunas. Pese a ello, se ha establecido una distinción entre conducta correcta e incorrecta y el sistema internacional está mejor preparado para reparar las infracciones. No obstante, los conflictos y las amenazas actuales no dejan de evolucionar y adoptan dinámicas complejas. Por ello, en estos momentos conviene prestar atención al comportamiento de agentes no estatales que causan estragos al tomar como objetivo a la población civil y los bienes de carácter civil con el fin de cometer atropellos y socavar la autoridad nacional. Al considerar esos enfrentamientos no convencionales, el sistema internacional debe ir más allá de la tentación inmediata de adoptar una postura hostil ante las posiciones de los Gobiernos nacionales, en particular los de los países en desarrollo, y, en cambio, buscar soluciones sobre la base de los factores geopolíticos que estén realmente en juego.

Los ataques contra la población y los bienes civiles no son solo una transgresión del marco normativo, sino que también son un delito que pone en peligro la paz sostenible y los logros en materia de desarrollo que tanto han costado conseguir. Postergan el establecimiento de la paz y la reconciliación y pueden debilitar el tejido social. Esa es la razón por la que los agentes irresponsables que se empeñan en aniquilar naciones por completo se dedican a destruir lugares civiles, como escuelas, hospitales, centrales de generación de energía eléctrica, mercados y otros lugares de excepcional importancia pública.

Los efectivos etíopes han hecho y siguen haciendo enormes sacrificios en su misión colectiva de proteger a los civiles en diferentes rincones del mundo. Nuestra voluntad de cooperar con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y la protección de los civiles es histórica y perdurable.

Permítaseme pasar ahora a un problema contemporáneo al que se enfrenta mi país y destacar brevemente las violaciones por parte de agentes no estatales de la solemne obligación de proteger a la población y los bienes civiles. Desde principios de noviembre, un grupo de traidores ha cometido todo tipo de delitos contra la población y ha atacado a las Fuerzas Nacionales de Defensa de Etiopía. Al fracasar su inútil intento de conseguir la victoria, el Frente de Liberación Popular de Tigré comenzó un ataque contra la población civil. Este grupo criminal se propuso destruir deliberadamente hospitales e instalaciones sanitarias, carreteras, puentes, redes eléctricas y aeropuertos, que el pueblo etíope había construido con mucho esfuerzo. El grupo atacó los aeropuertos civiles de Bahir Dar, Gondar y Axum y causó considerables destrozos.

La operación de las fuerzas del orden en Tigré, junto con los problemas de seguridad imperantes en otras partes de Etiopía, plantean un desafío excepcional por medio del cual el Gobierno trata de proteger a los civiles y los bienes civiles contra los ataques orquestados por grupos delictivos frustrados. Como Estado independiente y una larga historia de gobernanza, Etiopía tomará las medidas necesarias para proteger su unidad e integridad territorial. Además, se esforzará al máximo para proteger a su población de cualquier forma de delito, incluidos los ataques de grupos delictivos nacionales que pretenden desestabilizar la nación.

Cumplimos con nuestras obligaciones en virtud de la legislación nacional e internacional. Además, cumpliremos con nuestra obligación de hacer justicia y de exigir cuentas a los autores de delitos, independientemente de su condición o afiliación. En este sentido, aplaudimos la ayuda humanitaria prestada a nuestros ciudadanos hasta la fecha y animamos a los países amigos a aumentar su apoyo.

Anexo 32**Declaración de la Delegación de la Unión Europea ante las Naciones Unidas, en su calidad de observadora**

Tengo el honor de formular esta declaración en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros.

Se adhieren a esta declaración la República de Macedonia del Norte y Montenegro; Bosnia y Herzegovina, país del Proceso de Estabilización y Asociación y posible candidato, y la República de Moldova.

Acojo con satisfacción este debate abierto sobre la protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, que es de suma importancia en las crisis actuales, así como la aprobación de la resolución 2573 (2021).

La Unión Europea está sumamente preocupada por las violaciones flagrantes y continuas del derecho internacional humanitario y de los principios humanitarios, la reducción del espacio humanitario y los ataques constantes al personal humanitario y sanitario. También está preocupada por las repercusiones de la destrucción o los daños generalizados y deliberados causados a bienes civiles, como escuelas y hospitales, en los conflictos armados actuales mediante ataques realizados en clara violación del derecho internacional humanitario. Las consecuencias directas e indirectas de esta realidad son uno de los retos más cruciales para la protección de la población civil y un importante factor generador de inestabilidad social y económica a largo plazo y de desplazamientos. Los ataques a los centros sanitarios tienen importantes consecuencias para la supervivencia y el bienestar de los civiles, y en la actualidad también están socavando gravemente los esfuerzos para luchar contra la pandemia de enfermedad por coronavirus.

Desgraciadamente, este fenómeno se está presenciando en varias crisis actuales. La situación en el Yemen se caracteriza por violaciones generalizadas del derecho internacional humanitario por parte de todas las partes del conflicto, cuya magnitud y naturaleza son estremecedoras. Resulta vital obligar a rendir cuentas por estas violaciones. Los constantes ataques indiscriminados están matando e hiriendo a civiles y dañando infraestructura vital como centros de salud, escuelas, mercados y granjas. Como consecuencia del conflicto, la economía se ha hundido y la situación humanitaria es alarmante: hay más de 4 millones de desplazados internos, el 80 % de la población vive por debajo del umbral de pobreza, solo están funcionando menos del 50 % de las clínicas, unos 8 millones de niños no asisten a la escuela, los servicios de agua y electricidad son inestables e inasequibles para la gran mayoría de la población y los sistemas de seguridad alimentaria están sometidos a una gran presión.

Las restricciones impuestas por las partes del conflicto a los suministros y al acceso humanitarios aumentan el riesgo de hambruna. Las actuales restricciones en aeropuertos, puertos marítimos y por tierra, junto con los continuos combates, impiden aún más la distribución de la ayuda humanitaria y afectan a la capacidad de los civiles yemeníes para acceder a alimentos, medicinas y combustible, esenciales para la supervivencia de la población civil. Se prevé que unos 16,2 millones de yemeníes —más de la mitad de la población total— sufrirán una gran inseguridad alimentaria en el Yemen en junio de 2021.

Nigeria es el país con el mayor número de atentados contra centros sanitarios de África Occidental y Central. También es donde se registraron más de 500 incidentes que afectaron a colegios y alumnos entre 2015 y 2019. Tan solo entre enero de 2020 y marzo de 2021, se registraron 59 episodios de violencia o amenazas contra servicios sanitarios, y se dañaron 11 centros de atención médica. Los ataques a los trabajadores humanitarios son generalizados. Los civiles corren un gran riesgo de que se violen sus derechos humanos y de sufrir otras violaciones del derecho internacional humanitario.

También están asistiendo a la destrucción deliberada de los bienes económicos que garantizan el sustento de la población, a saber, cultivos y ganado, en particular en el centro-norte de Nigeria, en el marco del conflicto entre pastores y agricultores. En abril de 2021, durante una serie de ataques contra la ciudad de Damasak, en el estado de Borno, en el noreste de Nigeria, grupos armados no estatales saquearon e incendiaron viviendas privadas, almacenes de organismos humanitarios, una clínica y un centro de protección de las Naciones Unidas.

Estos actos aceleran los desplazamientos forzados que se están produciendo y aumentan la vulnerabilidad de los civiles en las zonas afectadas por la crisis. En el noreste de Nigeria, 2,2 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares, y en el noroeste se están produciendo cada vez más ataques contra centros educativos, hasta con secuestros masivos de alumnos. En los estados del noreste del país se producen regularmente ataques contra escuelas, universidades y estudiantes como consecuencia de la insurgencia de Boko Haram.

La crisis en Siria es también una crisis de protección. La Unión Europea condena enérgicamente los ataques deliberados contra la población y las infraestructuras civiles por parte del régimen sirio y sus aliados, que han sido documentados por la Junta de Investigación sobre Siria. Deben respetarse los derechos de todas las personas de acuerdo con el derecho internacional humanitario, los derechos humanos y el derecho de los refugiados, que incluyen la protección de los civiles, incluido el personal humanitario y médico, y la protección de infraestructuras civiles como escuelas y hospitales. Se calcula que en Siria necesitan asistencia humanitaria más de 13 millones de sirios, la mitad de los cuales son niños.

Aunque la necesidad de disponer de servicios sanitarios sigue siendo elevada, en 2021, el 50 % de los centros de salud sirios no están funcionando o solo lo hacen parcialmente. Además, se calcula que 11,5 millones de personas están expuestas a los riesgos que supone la presencia generalizada de minas y restos explosivos de guerra en Siria. De hecho, el país sufre posiblemente la mayor contaminación por armas que se ha visto en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, con partes del país convertidas en campos de minas. Esto significa que se necesitarán décadas para que la tierra y las ciudades vuelvan a ser seguras.

Es importante garantizar que las actuaciones humanitarias para salvar y mantener vidas no se vean interrumpidas ni sean objeto de ataques y que se garantice un acceso seguro, pleno, sin obstáculos y constante a las personas más vulnerables de Siria por todas las vías disponibles, incluidas las transfronterizas. Es esencial que en julio se prorrogue la decisión del Consejo de Seguridad sobre la autorización de la asistencia transfronteriza. De lo contrario, la asistencia humanitaria a más de tres millones de personas correrá peligro y la respuesta a las necesidades de la población podría verse comprometida. Ante esta realidad, la comunidad internacional tiene el deber moral y jurídico de actuar.

En primer lugar, la Unión Europea recuerda que todas las partes en los conflictos armados deben respetar el derecho internacional humanitario y tienen la responsabilidad primordial de garantizar la protección de la población y de los bienes civiles que están bajo su control. A este respecto, la Unión Europea seguirá haciendo del derecho internacional humanitario el eje de su acción exterior. La Unión Europea se compromete a seguir esforzándose por promover el derecho internacional humanitario de forma global, entre otras cosas, impartiendo cursos y realizando ejercicios, en particular para las fuerzas militares y de seguridad. La Unión Europea también trabaja para luchar contra la impunidad y obligar a rendir cuentas por las violaciones del derecho internacional humanitario. En este sentido, destacamos el papel tan importante que desempeña la Corte Penal Internacional. Reiteramos nuestro llamamiento al Consejo de Seguridad para que remita la situación en Siria a la Corte.

En segundo lugar, el uso ilegal de ciertos tipos de armas en situaciones concretas puede tener consecuencias desproporcionadas y devastadoras en el entorno natural, y provocar la degradación de las tierras agrícolas y efectos devastadores para la salud. Recordamos que todos los medios y métodos de guerra deben cumplir plenamente el derecho internacional, en particular el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, y que quienes emplean esas armas deben rendir cuentas y ser responsables de su uso. Garantizar el cumplimiento del derecho internacional humanitario es particularmente importante, ya que cada vez con más frecuencia los conflictos armados tienen lugar en zonas urbanas, por lo que la población y la infraestructura civiles se ven expuestos a peligros sustanciales. A este respecto, reconocemos los problemas relacionados con el empleo de armas explosivas en zonas densamente pobladas y sus consecuencias para la población civil, e instamos a todas las partes en conflictos armados a respetar plenamente el derecho internacional humanitario.

En tercer lugar, cinco años después de la aprobación de la resolución 2286 (2016), redactada y negociada por España, junto con Egipto, el Japón, Nueva Zelanda y el Uruguay, debemos redoblar nuestros esfuerzos para procurar que la aplicación de la resolución y que las instalaciones médicas, y en un sentido más amplio el personal humanitario y médico, no sean objeto de ataques que contravengan el derecho internacional. A este respecto, quisiera recordar que la Unión Europea, junto con Alemania, Francia, México, Noruega, Níger y Suiza, está organizando una serie de debates sobre la protección del personal humanitario y médico en los conflictos armados. También debemos seguir defendiendo la protección de las escuelas y los centros educativos en situaciones de conflicto, y acogemos con satisfacción la labor de los Estados Miembros de las Naciones Unidas que han respaldado la Declaración sobre Escuelas Seguras.

En cuarto lugar, en el *Global Report on Food Crises 2020* se demuestra que los conflictos provocaron seis de las diez peores crisis alimentarias del mundo y generaron casi el 60 % de las necesidades humanitarias. La destrucción de bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, como las infraestructuras y los recursos hídricos, puede llevar en muchos contextos a situaciones de hambre relacionada con los conflictos. La Unión Europea insta a todas las partes en los conflictos armados, tanto estatales como no estatales, a que cumplan plenamente sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, incluida la prohibición de hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra, y a que permitan y faciliten el libre paso del socorro humanitario. En ese sentido, recordamos que, en 2019, la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional votó por unanimidad ampliar el crimen de guerra de hacer padecer hambre a los conflictos armados no internacionales.

En quinto lugar, para adoptar una estrategia más integral para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, habría que reforzar el nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la paz con un enfoque basado en las necesidades y en los derechos humanos. Es necesario que los donantes y la sociedad civil colaboren de forma más coherente en los análisis comunes sobre países y los marcos de cooperación de las Naciones Unidas para lograr resultados colectivos de manera que todas las partes interesadas puedan encontrar soluciones duraderas, lo que aumentaría la resiliencia. Para responder a los retos y reconstruir para mejorar, debe existir una comprensión común de las necesidades de cada contexto a partir de un análisis, una planificación y un seguimiento conjuntos, que incluyan datos e información con base empírica. Con iniciativas conjuntas es como podemos garantizar la protección de la población civil y mejorar la prestación de unos servicios que tengan en cuenta las cuestiones de género.

Por último, la comunidad internacional debe pedir claramente y sin reservas a todas las partes en conflicto que respeten el derecho internacional humanitario, que condenen sus violaciones y encuentren soluciones políticas y prácticas para proteger los bienes que son vitales para la población civil y que lleven a cabo investigaciones de determinación de los hechos y obliguen a rendir cuentas por las violaciones. El Consejo de Seguridad desempeña un papel esencial a la hora de dirigir estos esfuerzos y garantizar la rendición de cuentas. Confiamos en el Consejo de Seguridad y el conjunto de la comunidad internacional para que respalden dichos esfuerzos.

Anexo 33**Declaración de la Misión Permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas**

Guatemala deja constancia de su agradecimiento a la República Socialista de Viet Nam, en su calidad de Presidente del Consejo de Seguridad durante el mes de abril, por haber convocado este debate abierto por videoconferencia sobre el tema “Protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil”, así como a todos los ponentes por sus esclarecedoras presentaciones.

En las dos últimas décadas, las misiones de mantenimiento de la paz han ido adaptando gradualmente sus estrategias de protección, adoptando un enfoque integral que implica intervenciones militares, policiales y civiles coordinadas, así como la incorporación de asesores sobre derechos humanos, violencia sexual en los conflictos y protección de la infancia. Guatemala alienta a los países que aportan contingentes y fuerzas de policía a que tomen todas las medidas necesarias relativas a la protección de la población civil, tal como se refleja en el consenso del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y en los principios del derecho internacional humanitario. Al respecto, Guatemala toma nota de que esta interpretación no se recoge en la Política del DOMP y el DAAT sobre la Protección de los Civiles en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas (2019).

Guatemala reitera que la responsabilidad principal de proteger a la población civil, así como de proteger y promover los derechos humanos, corresponde al Estado receptor. La protección de los civiles por parte de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas es un objetivo de toda la misión que requiere un enfoque amplio e integrado entre los componentes civil, policial, militar y penitenciario, en coordinación con las autoridades nacionales, las comunidades locales y las organizaciones humanitarias pertinentes, a fin de crear un clima seguro para los civiles.

Además, mi delegación reitera que para proteger efectivamente a la población civil hacen falta mandatos bien definidos, realistas y alcanzables; voluntad política, liderazgo, desempeño y rendición de cuentas a todos los niveles; la movilización de recursos y activos adecuados, y personal militar, civil y de policía bien entrenado y preparado y equipado adecuadamente.

La piedra angular de este debate es la resolución 2417 (2018), en la que se condenan los actos que privan a los civiles de los bienes indispensables para su supervivencia. Reiteramos a todas las partes en los conflictos armados que deben cumplir las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional humanitario, incluida la obligación de abstenerse de atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil. En un contexto marcado por la enfermedad por coronavirus (COVID-19), Guatemala recuerda que es crucial proteger la infraestructura civil que resulta vital para la entrega de ayuda humanitaria y la prestación de servicios esenciales de vacunación y atención médica conexa en situaciones de conflicto armado y emergencias humanitarias complejas.

Las amenazas a la protección están aumentando y se están agravando durante esta pandemia. Las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, en particular, deben adaptarse rápidamente y encontrar soluciones creativas para cumplir sus funciones de protección sobre el terreno. Guatemala condena enérgicamente el hecho de que algunos grupos armados hayan atacado abiertamente hospitales y centros de salud contra la COVID-19, y que otros hayan aprovechado la pandemia y la menor presencia de los agentes estatales e internacionales para operar y fortalecer su bastión.

No es la primera vez que se pone a prueba a las operaciones de mantenimiento de la paz en una epidemia. La propagación del cólera por parte del personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Haití y los problemas planteados por la lucha contra el ébola mientras se protegía a la población civil en el este del Congo ofrecen ya muchas lecciones. Una lección importante es reforzar la comunicación estratégica y trabajar meticulosamente en los mensajes públicos para combatir los discursos de odio, los rumores y la desinformación. Es fundamental informar al público sobre la COVID-19 y ser transparente sobre el hecho de que la misión se ve afectada y limitada por el virus.

La comunidad internacional debe trabajar colectivamente con el objetivo de velar por que la protección de los civiles sea el eje de todas las actividades, como las iniciativas de creación de capacidades y el apoyo a las partes interesadas nacionales. Todas las misiones deben colaborar con los agentes regionales, nacionales y locales a favor del cese de las hostilidades y de los actos violentos y para abogar por dar respuestas a la pandemia que estén orientadas a la protección.

Guatemala continuará encomendando a sus fuerzas especiales proteger a la población civil con la mayor eficacia y eficiencia, cumpliendo así con su compromiso, sin reservas, de contribuir al mantenimiento y sostenimiento de la paz.

Anexo 34**Declaración del Representante Permanente de la República Islámica del Irán ante las Naciones Unidas, Majid Takht Ravanchi**

Aunque la prohibición del uso de la fuerza, salvo en los dos casos excepcionales autorizados por la Carta de las Naciones Unidas, es un principio fundamental y una norma preventiva del derecho internacional, los conflictos armados siguen siendo una realidad de nuestro tiempo.

Sin embargo, según el derecho internacional humanitario, que rige la conducta de los Estados en los conflictos armados, hay ciertas normas que deben cumplir las partes en los conflictos. Los principios más destacados en los que se basa el derecho internacional humanitario son los principios de humanidad y los dictados de la conciencia pública. La Corte Internacional de Justicia también se ha pronunciado oficialmente al respecto, al afirmar que “la consideración primordial de la humanidad” es “el núcleo” de los principios y normas de derecho aplicables en los conflictos armados. Según este principio, está prohibido infligir “sufrimientos innecesarios”, incluso a los “combatientes”, y menos aún causar ningún sufrimiento a la población civil, cuya protección es el objetivo principal de muchos instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes que constituyen el derecho internacional humanitario.

La distinción es otro principio del derecho internacional humanitario, según el cual las partes en conflicto deben distinguir entre la población civil y los combatientes y entre los bienes civiles y los objetivos militares. Además, de conformidad con párrafo 1 del artículo 35 del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I), la elección de los “métodos o medios de guerra no es ilimitada”.

En consecuencia, como también ha afirmado claramente la Corte Internacional de Justicia, “los Estados no deben hacer nunca de las personas civiles el blanco de un ataque” y, como se estipula en el artículo 18 del Cuarto Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949, los bienes civiles, tales como los hospitales, “en ninguna circunstancia, podrán ser objeto de ataques...; deberán ser siempre respetados y protegidos por las Partes en conflicto”.

Asimismo, debe evitarse matar de hambre a la población civil como método de guerra o atacar o inutilizar objetos indispensables para la supervivencia de la población civil.

Estas normas explícitas indican que actualmente nuestro problema no es la falta de normas vinculantes adecuadas para la protección de la población o los bienes civiles, sino que, más bien, es el incumplimiento de dichas normas y, lo que es más importante, la inacción del Consejo de Seguridad cuando se incumplen de forma material e incluso sistemática.

Un buen ejemplo de ello son las prácticas inhumanas e ilegales que el régimen israelí lleva a cabo sistemáticamente desde hace décadas en los territorios ocupados, y que comportan una serie de brutalidades, como la limpieza étnica deliberada y masiva, la demolición de viviendas y la confiscación de tierras y propiedades palestinas, el bloqueo ilegal de la Franja de Gaza y la matanza de civiles, incluidas mujeres y niños inocentes, todas ellas manifestaciones claras de crímenes de guerra.

Otro ejemplo son las crueldades ejercidas por la Arabia Saudita en sus seis años de agresión en el Yemen, en los que han muerto miles de civiles, entre ellos mujeres y niños; se han atacado indiscriminadamente hogares, mezquitas, hospitales, escuelas, mercados, misiones diplomáticas e incluso bodas y funerales, y se mata de hambre a la población civil como método de guerra, lo cual ha provocado la peor crisis humanitaria contemporánea del mundo.

Además, en ambos casos, objetos indispensables para la supervivencia de los civiles, como son los alimentos, las instalaciones de agua potable y los hospitales, han sido objeto de ataques armados sistemáticos o de interrupciones deliberadas, y lugares civiles, como los puertos y aeropuertos, han sufrido estrictos bloqueos ilegales.

Otro caso es la imposición unilateral de sanciones inhumanas contra Siria, que impiden la importación de bienes humanitarios, como alimentos y medicinas, lo cual perjudica gravemente la salud y la vida de las personas. En la práctica, sus efectos adversos son equivalentes a la inanición y, por lo tanto, deben detenerse inmediatamente.

Si bien puede que, debido a la aparición de nuevos métodos y medios de hacer la guerra, surgidos a raíz de los avances tecnológicos, sea necesario establecer nuevas normas, que, según el artículo 13 de la Carta, es competencia de la Asamblea General, las normas existentes relativas a la protección de la población y los bienes civiles son bastante claras y suficientes.

Aunque haya situaciones que no estén contempladas por dichas normas, la población sigue estando bajo la protección y la autoridad de los principios del derecho internacional, “tales como resultan de los usos establecidos entre Naciones civilizadas, de las leyes de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública”, como se indica expresamente en la Convención relativa a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de 29 de julio de 1899 y su anexo: Reglamento relativo a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre.

En efecto, lo que debe hacer el Consejo de Seguridad es garantizar la protección de la población y los bienes civiles en los conflictos armados, obligar a los responsables a poner fin inmediatamente a esas prácticas y hacerles responder por esos crímenes. Esto es de suma importancia en las circunstancias actuales, en las que las consecuencias adversas de la pandemia de enfermedad por coronavirus están empeorando las ya graves situaciones humanitarias en varios países en conflicto.

Además, cuando ciertos bienes civiles, como las instalaciones de agua potable, sufren ataques o quedan de alguna manera inutilizados, las principales víctimas son, lamentablemente, los niños. Según UNICEF, en los conflictos prolongados:

“Es 20 veces más probable que los niños menores de 5 años mueran de diarrea relacionada con el agua no apta para el consumo y el saneamiento que a causa de la violencia en los conflictos.”

También cabe destacar que, cuando se atacan, se destruyen o se inutilizan bienes civiles, se dificulta gravemente el retorno y el reasentamiento de las comunidades desplazadas, así como las tareas de reconstrucción en situaciones posteriores a los conflictos.

La República Islámica del Irán seguirá poniendo su empeño en promover el conocimiento de las normas del derecho internacional humanitario en el plano nacional y en aumentar su aplicación plena y efectiva en el plano internacional.

Anexo 35**Declaración de la Misión Permanente de Italia ante las Naciones Unidas**

Italia agradece a la Presidencia vietnamita la organización de este debate abierto y se suma a la declaración de la Unión Europea (anexo 32). Nos complace sumarnos también a la declaración presentada por Suiza en nombre del Grupo de Amigos sobre la protección de los civiles en los conflictos armados (anexo 47). Asimismo, deseamos plantear algunas reflexiones a título nacional.

La protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil está consagrada en los Protocolos Adicionales de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949, relativos a la prohibición de los ataques contra bienes entre los que se incluyen los alimentos y las zonas agrícolas en que se producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego. La protección de los alimentos, así como de la infraestructura necesaria para su producción y su suministro y para la distribución del agua, es sin duda crucial para proteger a la población civil en general y, por tanto, también para mantener la paz y la seguridad internacionales.

Italia se enorgullece de ser parte en todos los Convenios y Protocolos de Ginebra sobre el derecho internacional humanitario y de haber sido uno de los copatrocinadores de la resolución 2417 (2018), que reconoce el vínculo existente entre el hambre y los conflictos y condena la práctica de hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra.

Al mismo tiempo, hay que resaltar que el derecho internacional humanitario ha evolucionado de manera considerable desde que se aprobaron los dos Protocolos Adicionales hace más de 40 años. Como se señala en el último informe del Secretario General sobre la protección de los civiles (S/2020/366), la noción contemporánea de infraestructura esencial incluye también a los hospitales y a las escuelas.

A pesar de la resolución 2286 (2016), sobre la protección del personal y las instalaciones sanitarias en los conflictos armados, que Italia copatrocinó, seguimos siendo testigos de demasiados ataques contra hospitales y médicos de primera línea. Esto es particularmente inaceptable en el contexto actual de pandemia, en el que las infraestructuras sanitarias no solo prestan servicios de atención primaria, sino que también son los pilares fundamentales de la campaña de vacunación y unos instrumentos irremplazables para mejorar la resiliencia y la preparación de los sistemas de salud nacionales. Desde esta perspectiva, los hospitales deben considerarse factores importantes para promover una mejor recuperación de la pandemia.

Dado que los Protocolos Adicionales ofrecen una lista no exhaustiva, cabe señalar que las instalaciones educativas también forman parte de la infraestructura crítica. En las crisis humanitarias, millones de niños se ven privados del acceso a las escuelas, que con demasiada frecuencia son atacadas o utilizadas con fines militares. El UNICEF estima que, en situaciones de emergencia, la educación es el primer servicio que se suspende y el último que se reactiva. Si los niños no pueden acceder a la educación, corren un mayor riesgo de ser víctimas de la violencia y los abusos, como la violencia sexual, el trabajo infantil, la trata de personas y las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado.

En la mayoría de los casos, el abandono escolar en contextos de crisis es una consecuencia directa de los ataques contra centros educativos en tiempos de guerra, el uso de los edificios escolares con fines militares, el reclutamiento forzado, o la utilización y el secuestro de niños, principalmente por parte de grupos armados no estatales. Esta situación expone a los niños a un sufrimiento desmesurado y prolongado que, si no se aborda de una manera adecuada, puede socavar el desarrollo humano de los individuos y, en consecuencia, el desarrollo social y económico de

las propias comunidades. Parece que esta situación se agudiza durante este período marcado por la pandemia de enfermedad por coronavirus, ya que el cierre de escuelas y las limitaciones para acceder a los servicios sociales y sanitarios exponen a los niños a un riesgo aún mayor de violaciones y abusos.

Habida cuenta de todos los motivos mencionados, Italia se encuentra entre los Estados que han suscrito la Declaración sobre Escuelas Seguras de 2015 para la protección de la educación frente a los ataques, y es una firme defensora de su aplicación. Asimismo, estamos dispuestos a contribuir a la creación de sociedades resilientes, puesto que somos conscientes del papel crucial de la educación en situaciones de emergencia. Varias iniciativas de ayuda humanitaria apoyadas por la cooperación italiana en zonas en crisis se han dedicado de manera sistemática al sector de la educación.

Desde el punto de vista humanitario, la protección de los civiles en las zonas de conflicto también se lleva a cabo mediante actividades relativas a las minas, como la limpieza de territorios de minas antipersonal y de otros restos de guerra, la destrucción de existencias, la educación sobre el peligro de las minas, la asistencia médica a los supervivientes, y las actividades de sensibilización internacional. Por ello, Italia apoya las actividades de desminado humanitario en Libia, el Iraq, el Afganistán, el Sudán, Colombia, la República Democrática del Congo y Somalia. Con ese mismo espíritu, Italia apoya el proyecto de declaración política destinado a proteger a la población civil de las armas explosivas en zonas densamente pobladas.

La necesidad de proteger los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil es un emblema de la naturaleza multifacética de los desafíos actuales en materia de seguridad. Dado que nuestras sociedades y economías son cada vez más complejas y están cada vez más interconectadas, hay que reconocer y tener en cuenta la creciente interdependencia existente entre la producción de alimentos, los sistemas de abastecimiento de agua, las redes de suministro eléctrico, los hospitales y las escuelas.

El Consejo de Seguridad debe prestar más atención a estas cuestiones transversales y apoyar un enfoque global y preventivo a fin de abordar sus posibles efectos en la seguridad mundial. Por ello, hoy acogemos con beneplácito la aprobación de la resolución 2572 (2021), que Italia ha copatrocinado basándose en sus convicciones.

Estamos dispuestos a apoyar que las Naciones Unidas desempeñen un papel más importante en la identificación de las mejores prácticas con el fin de proteger esa infraestructura crítica y de concienciar acerca de la importancia de aplicar con eficacia el derecho internacional humanitario.

Anexo 36**Declaración del Representante Permanente del Japón ante las Naciones Unidas, Ishikane Kimihiro**

Quisiera comenzar agradeciendo a Viet Nam por haber convocado esta importante sesión. Asimismo, me gustaría dar las gracias a todos los ponentes, incluidos el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia y el Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, por sus exposiciones informativas.

Como firme defensor del concepto de seguridad humana, el Japón concede gran importancia al tema del debate de hoy: la protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil. Existe una amplia gama de bienes y servicios indispensables que no se limita a los que figuran en el artículo 54 del Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra: alimentos y zonas agrícolas para su producción, cultivos, ganado, instalaciones y suministros de agua potable, e instalaciones de riego. Por ejemplo, la población civil no puede sobrevivir sin instalaciones médicas, sistemas sanitarios y de gestión de las aguas residuales, o sistemas de energía.

La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) está afectando en mayor medida a los sectores más vulnerables de la sociedad, como las personas afectadas por los conflictos armados, y ha puesto de manifiesto la importancia de que se sigan prestando servicios médicos esenciales a quienes luchan contra el virus en situaciones de conflicto ya de por sí delicadas. Hay que proteger las instalaciones médicas pertinentes y el acceso a los servicios médicos de los ataques y la destrucción.

Este año se cumple el quinto aniversario de la resolución 2286 (2016) sobre la atención de la salud en los conflictos armados, a la que el Japón contribuyó como corredactor en 2016. A pesar de esa resolución y de la posterior resolución 2417 (2018), sobre el conflicto y el hambre, aprobada en 2018, es lamentable que sigamos siendo testigos de ataques reiterados contra el personal médico y humanitario y sus instalaciones en las zonas de conflicto. Recientemente, en febrero, el Consejo aprobó la resolución 2565 (2021) e instó a todas las partes a proteger la infraestructura vital para la prestación de ayuda humanitaria destinada a los servicios esenciales de vacunación y atención médica conexa. El Consejo de Seguridad debe hacer todo lo posible para facilitar la aplicación de dichas resoluciones.

En diciembre de 2019, el Dr. Nakamura Tetsu, representante de una organización no gubernamental humanitaria japonesa, murió en un atentado terrorista junto con sus colegas afganos en la parte oriental del Afganistán, cuando viajaba en coche para ir a supervisar su proyecto de riego. El Dr. Nakamura se dedicó durante decenios a la atención de la salud y al desarrollo agrícola del pueblo afgano. Estaba convencido de que la paz y la estabilidad en el país, así como su reconstrucción, no pueden lograrse sin construir una base sólida para el suministro de alimentos y agua. El Japón condena enérgicamente el ataque atroz contra este trabajador humanitario, cuya única intención era ayudar a la población civil y mejorar sus medios de vida.

El Japón se compromete a contribuir de forma activa a la protección de los civiles y de los bienes indispensables para su supervivencia. En marzo, nuestro país aportó una contribución de más de 30 millones de dólares al Comité Internacional de la Cruz Roja destinados a sus actividades de emergencia y rehabilitación en el marco de la pandemia de COVID-19 con el fin de prestar servicios relacionados con el agua y mejorar el acceso a la atención médica de las víctimas de los conflictos armados, por ejemplo, en Siria, el Afganistán, el Yemen, Sudán del Sur y Somalia. También en marzo, el Japón aportó alrededor de 4,5 millones de dólares a las operaciones del UNICEF en Siria, como la reconstrucción de sistemas de agua y alcantarillado,

destinadas a mejorar el acceso al agua potable y el saneamiento de la población de la parte oriental de Al-Guta. Asimismo, apoyamos a los centros de salud para mujeres y niños proporcionándoles equipos médicos.

El Japón está decidido a seguir haciendo todo lo posible a fin de garantizar la protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil en los conflictos armados. Seguiremos colaborando estrechamente con otros Estados Miembros, el sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones humanitarias internacionales y las organizaciones de la sociedad civil a fin de contribuir a esa labor.

Anexo 37

Declaración del Representante Permanente Adjunto de Liechtenstein ante las Naciones Unidas, Georg Sparber

Liechtenstein da las gracias a Viet Nam por haber organizado este debate y reconoce la importancia de este tema para la labor del Consejo de Seguridad, así como para toda la agenda de protección de los civiles.

En particular, la destrucción de bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, como los alimentos, las cosechas, el ganado y el agua, no es solo una consecuencia de los conflictos, sino también una causa profunda, ya que la población está cada vez más enfrentada debido a la escasez de los recursos necesarios para la supervivencia. Los ataques que provocan la destrucción de dichos bienes aumentan la inseguridad de las personas, a menudo durante mucho tiempo, en ocasiones con esa intención específica por parte de los autores, en cuyo caso equivalen a crímenes de guerra.

El Consejo de Seguridad dispone de los instrumentos necesarios para disuadir de tales acciones garantizando la rendición de cuentas. Debe abordar la seguridad desde una perspectiva amplia y a largo plazo, situando la seguridad humana en el centro de su labor. Asimismo, debe plantearse potenciar la contribución que la protección de los civiles puede aportar a la prevención de conflictos futuros y a la perpetuación de los que están en curso.

En primer lugar, la forma más eficaz de proteger a la población civil es evitar los conflictos armados, y, de hecho, el objetivo de prevenirlos fue la idea que impulsó la creación de las Naciones Unidas. En la Carta de las Naciones Unidas queda patente que el uso de la fuerza es, en efecto, ilegal, excepto en casos excepcionales claramente definidos. Consideramos que el efecto disuasorio de la penalización de las guerras ilegales es una parte esencial de la agenda de protección de los civiles.

La activación de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional el 17 de julio de 2018 sobre los crímenes de agresión supone un avance importante. Alentamos a todos los Estados a ratificar las enmiendas de Kampala del Estatuto de Roma sobre el crimen de agresión. Asimismo, recordamos a los miembros del Consejo que la posibilidad de remitir situaciones de agresión a la Corte Penal Internacional es un nuevo elemento disuasorio muy potente que está a su disposición. En el contexto de la protección de los civiles tras el desencadenamiento de un conflicto armado, el Estatuto de Roma establece que el término

"condiciones de existencia" podrá incluir, entre otras cosas, el hecho de privar a esas personas de los recursos indispensables para la supervivencia, como los alimentos o los servicios médicos, o de expulsarlas de sus hogares de manera sistemática."

Por lo tanto, acogemos con gran satisfacción la decisión adoptada en 2019 por la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma —por iniciativa de Suiza— de subsanar una laguna del Estatuto añadiendo al artículo 8 la inanición de civiles en conflictos armados no internacionales. Dada la naturaleza rápidamente cambiante de la guerra, es importante considerar también la relevancia de las ciberoperaciones en ese debate. Para ello, Liechtenstein, junto con otros diez Estados partes en la Corte Penal Internacional, ha creado un Consejo de Asesores formado por eminentes expertos en derecho internacional con el fin de examinar el modo de aplicar el Estatuto de Roma, incluidos sus elementos sobre la privación deliberada de recursos indispensables para la supervivencia, en el contexto de las ciberoperaciones. Agradecemos a nuestros asociados que se hayan sumado a esta labor y esperamos con interés el próximo informe del Consejo de Asesores sobre la aplicación del Estatuto de Roma a la ciberguerra.

Permítaseme mencionar brevemente algunas situaciones en las que esta cuestión es especialmente pertinente para la labor del Consejo y que deberían sumarse a la correspondiente disposición de este órgano a actuar. En Siria, la estación de agua de Aluk, principal suministro de agua para 460.000 personas, sufrió unos 20 cortes de suministro en 2020. Esto hizo que algunas partes de la región se quedaran sin agua durante más de una semana. Los cortes en el suministro de agua, que es evidentemente indispensable para la supervivencia, son extremadamente preocupantes; y Liechtenstein recuerda que, en última instancia, es responsabilidad del Consejo garantizar que el acceso se mantenga de forma continua.

Durante muchos años, las fuerzas del Gobierno sirio han destruido suministros vitales de ayuda humanitaria destinados a su propio pueblo, por ejemplo, el mes pasado durante un ataque aéreo contra un almacén financiado por una organización no gubernamental, y han atacado instalaciones médicas en más de 400 ocasiones desde el comienzo de la guerra. Mientras tanto, la amenaza actual de algunos miembros del Consejo de Seguridad con derecho de veto de poner fin al mandato relativo al último paso fronterizo en Bab al-Hawa pone en peligro la supervivencia de 2,8 millones de civiles que necesitan asistencia en el noroeste de Siria.

Este es solo uno de los numerosos ejemplos, aunque especialmente flagrante, de cómo la amenaza constante y el uso del veto impiden al Consejo de Seguridad tomar medidas decisivas. También supone una violación grave del código de conducta del Grupo para la Rendición de Cuentas, la Coherencia y la Transparencia, en el que se consagra la expectativa de 122 Estados de mejorar la labor del Consejo precisamente en esas situaciones. La situación en el Yemen y en la región etíope de Tigré también son muy preocupantes.

Si bien Liechtenstein acoge con beneplácito el acuerdo entre el Programa Mundial de Alimentos y el Gobierno de Etiopía sobre el acceso humanitario, es evidente que la situación está lejos de garantizar que la población reciba la ayuda humanitaria necesaria. Liechtenstein saluda el reciente acuerdo del Consejo para emitir un comunicado de prensa acerca de la situación en Tigré (SC/14501), una reacción tardía por parte del Consejo que esperamos que tenga una pronta continuidad. El Consejo de Seguridad debe centrar su interés primordial en impedir que se agrave la crisis humanitaria y, en el peor de los casos, que la hambruna asole la región.

Anexo 38**Declaración de la Misión Permanente de Malta ante las Naciones Unidas**

Malta da las gracias a la Presidencia de Viet Nam por haber organizado este debate abierto a nivel ministerial sobre la protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil y por sus esfuerzos en la negociación de la resolución 2572 (2021), que ha aprobado hoy el Consejo y que nos sentimos orgullosos de copatrocinar. Asimismo, Malta agradece a los ponentes de hoy sus detalladas presentaciones, así como la labor vital que las organizaciones que representan llevan a cabo en múltiples situaciones complejas.

Malta suscribe plenamente la declaración presentada por la Unión Europea (anexo 32), al tiempo que añade algunas observaciones a título nacional.

Este debate ofrece una buena oportunidad, lamentablemente muy necesaria, para que la comunidad internacional reitere la necesidad de que todas las partes en los conflictos respeten el derecho internacional humanitario y sus principios rectores, entre los que se encuentra la obligación de garantizar la protección de los bienes e infraestructuras fundamentales para la supervivencia de la población civil en épocas de hostilidades.

Seguimos siendo testigos de violaciones manifiestas del derecho internacional humanitario en distintas situaciones de conflicto, como el Yemen, Siria, Nigeria, el Camerún, Ucrania, el Afganistán y Myanmar. Entre esas violaciones, destacamos la destrucción o los daños generalizados, tanto deliberados como involuntarios, de bienes y estructuras civiles. Esto incluye hospitales y establecimientos de salud; escuelas e instalaciones relacionadas con la educación; infraestructura civil, incluida la esencial para el suministro de asistencia humanitaria; infraestructuras de servicios públicos, como los mecanismos de suministro de agua y electricidad; y otros activos económicos vitales para el bienestar de la población civil, como el ganado y los recursos agrícolas.

Al dañar estos bienes indispensables, se crea un círculo vicioso. En primer lugar, se interrumpen los servicios esenciales, causando así un daño devastador a la población civil. Al mismo tiempo, estas situaciones también provocan un mayor sufrimiento a los civiles, debido los vínculos existentes entre los daños sufridos y la probable aparición de la inseguridad alimentaria e hídrica relacionadas con el conflicto; una mayor probabilidad de desplazamientos forzados; la posibilidad de que se produzcan consecuencias medioambientales debido a los daños causados a la infraestructura crítica; una propagación agravada de las enfermedades infecciosas, debida, entre otros factores, a la escasez de medicamentos; y, a un nivel más amplio, el empeoramiento de la situación humanitaria.

Resulta preocupante que las tendencias actuales y futuras planteen dificultades aún mayores a la hora de evitar que los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil sufran daños. Permítaseme destacar dos situaciones concretas.

En primer lugar, la urbanización y la alta densidad de población, en particular en situaciones de conflicto, inevitablemente dan lugar a una mayor vulnerabilidad de la población civil y sus bienes, por ejemplo, a través del compendio formado por combatientes y la población civil y sus bienes conexos.

En segundo lugar, el uso malintencionado de la tecnología digital plantea otros riesgos, como demuestra el número de ciberataques dirigidos contra infraestructuras críticas, en especial en los ámbitos de la sanidad y de la energía.

En vista de las circunstancias, la comunidad internacional está legalmente obligada a recordar y respetar el derecho internacional humanitario y sus disposiciones. Comprometámonos a salvaguardar la protección de los bienes y las

infraestructuras imprescindibles para la supervivencia de la población civil y a garantizar que se siga prestando la asistencia humanitaria necesaria para la vida, sin imponer obstáculos innecesarios.

Entre las medidas específicas adicionales que deben fomentarse se encuentran las siguientes.

En cuanto a las instalaciones médicas, hay que recordar la aprobación unánime de la resolución 2286 (2016) en 2016, así como sus disposiciones siempre pertinentes que salvaguardan dichas instalaciones médicas y tratan de velar por que los trabajadores humanitarios y médicos no sean objeto de ataques.

Estas mismas protecciones deben extenderse a los centros educativos. En este sentido, Malta se enorgullece de haber respaldado la Declaración sobre Escuelas Seguras e insta a otros Estados Miembros a que se unan a los 107 que han dado ese paso.

La creciente prevalencia de la guerra urbana requiere una reevaluación de la práctica militar anterior con el fin de garantizar una protección eficaz de la población civil y de las infraestructuras relacionadas. A este respecto, la República de Malta expresa su apoyo a la iniciativa liderada por Irlanda de aprobar una declaración política, y espera participar de forma constructiva en la labor para aprobar una declaración política que busque reforzar la protección de los civiles frente a los efectos de las armas explosivas en las zonas urbanas.

Permítaseme concluir destacando de nuevo la postura proactiva de Malta para hacer avanzar la agenda sobre la protección de los civiles en los conflictos armados dentro de la estructura de las Naciones Unidas. Prueba de ello es el hecho de que Malta copatrocina el proyecto de resolución del Consejo de Seguridad sobre la protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil (S/2021/402), si bien subrayamos nuestro deseo de que se haga más hincapié en la protección del medio ambiente. Este enfoque servirá de principio rector en caso de que se confíe a Malta la responsabilidad de ser miembro del Consejo de Seguridad durante el período comprendido entre 2023 y 2024.

Anexo 39**Declaración del Representante Permanente de Myanmar ante las Naciones Unidas, Kyaw Moe Tun**

Sr. Presidente: Quiero felicitarlo una vez más por su dirección competente como Presidente del Consejo. Quisiera dar las gracias a todos los ponentes por sus declaraciones exhaustivas.

En primer lugar, quisiera reiterar brevemente los esfuerzos realizados por Myanmar para proteger a los civiles en los conflictos armados, en especial a los niños, durante la gestión del Gobierno civil elegido democráticamente. En julio de 2019, Myanmar ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados tras la promulgación de una nueva Ley de Derechos del Niño, que prohíbe toda forma de violencia contra la infancia. Además de ser parte en la Convención sobre los Derechos del Niño, Myanmar también se adhirió a la tipificación de las seis violaciones graves como delito.

Estas son la labor y las contribuciones realizadas por el Gobierno civil elegido democráticamente, dirigido por el Presidente U Win Myint y la Consejera de Estado Daw Aung San Suu Kyi, con respecto a la protección de los niños en los conflictos armados.

Sin embargo, la situación en Myanmar ha provocado un cambio radical en la labor y las contribuciones del Gobierno orientadas a la protección de los civiles tras el golpe militar del 1 de febrero de 2021. En efecto, todo el pueblo de Myanmar ha estado sufriendo los actos inhumanos y brutales cometidos por las fuerzas militares y de seguridad, así como su ataques sistemáticos y selectivos.

Como se sabe perfectamente en todo el mundo, el 1 de febrero, por motivos irracionales, los militares dieron un golpe de Estado y detuvieron a los líderes civiles elegidos de manera democrática. Tras el golpe de Estado, toda la población de Myanmar opuso resistencia a los militares a través de distintos medios, como el movimiento de desobediencia civil de los funcionarios, las protestas pacíficas en todo el país y diversos tipos de huelgas.

Para acabar con las protestas y reprimir a los que se oponen a la dictadura militar, el grupo militar ha estado lanzando ataques indiscriminados y desproporcionados contra la población civil, utilizando bombas de gas lacrimógeno, balas de goma, francotiradores, munición activa, fusiles, armamento pesado —por ejemplo, lanzacohetes portátiles— y granadas de mano. Esto ha provocado actos atroces y brutales, violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Desde el golpe de Estado hasta el 23 de abril de 2021, las fuerzas militares y de seguridad habían acabado con la vida de más de 730 personas, entre ellas decenas de niños, y habían detenido y acusado a más de 3.300. Asimismo, esas fuerzas sometieron a miles de personas a torturas inhumanas. El número de víctimas mortales aumenta cada día.

Tal y como se recoge a diario en los medios de comunicación internacionales y locales y en los medios sociales, los actos brutales y las atrocidades que están cometiendo los militares están haciendo que la población de Myanmar se sienta realmente impotente. Esta situación tan grave y horrible refleja el hecho de que las fuerzas militares y de seguridad del Estado han abandonado su deber constitucional de proteger a la población civil y, por el contrario, están atacando y asesinando a su propio pueblo.

Entre los asesinados por los militares se encuentran manifestantes pacíficos, personas que vivían en paz en sus hogares, jóvenes con gran potencial y niños muy pequeños, entre ellos un niño de 7 años, otro de 5 y otro de 3. Dado que Myanmar es un Estado parte en la Convención sobre los Derechos del Niño y firmó la tipificación como delito de las seis violaciones graves contra los niños, estos horribles asesinatos contravienen flagrantemente la Convención y el acuerdo.

De igual forma, quisiera destacar las detenciones arbitrarias, los asesinatos sistemáticos, las torturas crueles durante la detención y la continua represión, así como el secuestro de familiares como rehenes para detener a personas en busca y captura. Esos actos inhumanos, sistemáticos y selectivos perpetrados por las fuerzas militares y de seguridad han violado claramente el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En este mismo instante, las fuerzas militares y de seguridad siguen llevando a cabo esos actos inhumanos en zonas rurales y urbanas de Myanmar.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para reafirmar que las fuerzas militares y de seguridad de Myanmar no tienen ninguna intención de proteger a la población civil; por el contrario, están incumpliendo su deber como Estado anfitrión de protegerla. La cruda realidad es que las fuerzas militares y de seguridad de Myanmar están atacando y asesinando a los civiles de su propio país. Por ello, ya es hora de que las Naciones Unidas y la comunidad internacional tomen medidas para proteger al pueblo de Myanmar sin demora.

En este momento, nuestras prioridades principales son salvar las vidas de civiles inocentes, proteger al pueblo de Myanmar de los actos brutales de los militares y garantizar que la ayuda humanitaria llegue a las personas necesitadas.

Salvar vidas y evitar el sufrimiento son tareas nobles para la humanidad. Debido a la terrible situación actual en Myanmar, quisiera hacer un llamamiento a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad en particular para que dediquen todos los medios necesarios a ayudar a proteger al pueblo de Myanmar de las atrocidades y los actos brutales e inhumanos cometidos por los militares a través de una acción colectiva, concreta y unificada, adoptada de manera oportuna y decisiva.

Quisiera expresar nuestro agradecimiento a la delegación de Viet Nam por haber impulsado la resolución 2573 (2021), cuya aprobación respaldó Myanmar.

Anexo 40**Declaración de la Misión Permanente del Pakistán ante las Naciones Unidas**

Permítaseme comenzar agradeciendo a la Misión Permanente de Viet Nam la celebración por videoconferencia de este debate de alto nivel tan importante del Consejo de Seguridad sobre la protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, en el marco del tema relativo a la protección de los civiles en los conflictos armados.

Asimismo, damos las gracias al Secretario General Adjunto de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, al Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja y a otros ponentes por sus detalladas exposiciones informativas.

Los civiles siempre han sido las principales víctimas de la guerra, han estado sometidos al exterminio masivo, los ataques indiscriminados, la deportación, los secuestros, los saqueos y el internamiento; todo ello les ocasiona unos daños enormes.

La comunidad internacional ha respondido a la brutalidad de la guerra mediante la codificación de dos conjuntos de medidas de protección a través del derecho internacional humanitario: en primer lugar, la protección de los civiles y los bienes de carácter civil; y, en segundo lugar, la protección de otros bienes específicamente protegidos contra los ataques.

Por lo tanto, la protección de los civiles durante los conflictos armados es una piedra angular del derecho internacional humanitario.

El artículo 54 del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra (1977) — Protocolo I— prevé la protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, entre otros, los productos alimenticios, las zonas agrícolas destinadas a su producción, las cosechas, el ganado, las instalaciones y suministros de agua potable, y las obras de riego. Asimismo, el derecho internacional humanitario también prohíbe el uso de la inanición como método de guerra.

A pesar de esa prohibición categórica, es evidente que a menudo esas leyes y normas no se han aplicado.

En el informe anual del Secretario General de 2020 sobre la protección de los civiles (S/2020/366) se subrayó la multiplicación de los ataques directos o indiscriminados contra hogares, escuelas, hospitales, mercados, lugares de culto e infraestructuras civiles esenciales. Según el UNICEF, esos ataques impiden el desarrollo a largo plazo y repercuten en el acceso a la educación de toda una generación.

Las pruebas empíricas demuestran que los ataques a lugares culturales y religiosos, el asedio militar y los castigos colectivos se han utilizado con frecuencia para promover objetivos militares o políticos en situaciones de ocupación extranjera y de supresión del derecho de los pueblos a la libre determinación.

En ocasiones, esos territorios ocupados están sometidos a toques de queda permanentes, cortes de comunicaciones, cierre de instituciones educativas, prohibición de celebrar reuniones religiosas y públicas, detención ilegal y arbitraria de personalidades públicas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de jóvenes, y cierre de empresas locales y de la actividad económica; todo ello fundamental para los medios de vida y la supervivencia de la población.

Estas tácticas, destinadas a coaccionar a la población civil a fin de someterla, constituyen sin duda violaciones de la resolución 2417 (2018) y del derecho internacional humanitario.

También ha quedado demostrado que la destrucción de bienes indispensables para la supervivencia de la población civil y la interrupción de los servicios esenciales son los principales problemas para el retorno seguro y voluntario de los refugiados.

En un contexto de posconflicto, debemos dar prioridad a la rehabilitación y reconstrucción de las infraestructuras civiles y al restablecimiento de los servicios esenciales, ya que estas medidas pueden facilitar la recuperación socioeconómica y crear un entorno propicio para la repatriación voluntaria de los refugiados.

Debido a los costos significativos relacionados con la rehabilitación y reconstrucción de infraestructuras, el amplio sistema de coordinadores residentes de las Naciones Unidas debería utilizarse para ayudar a los países en situación de posconflicto a crear la capacidad necesaria para desarrollar y ejecutar proyectos de infraestructuras apropiados.

Una cuestión importante del debate de hoy es cómo proteger a la población civil y los bienes indispensables para su supervivencia. Sin embargo, ¿cómo se puede abordar esa situación cuando la represión de la población civil es el propio objeto del conflicto?

El Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo ha subrayado en repetidas ocasiones que la lógica de la represión del terrorismo no debe proporcionar una ruta de fuga para reprimir a los civiles que tratan de lograr que se respeten sus derechos fundamentales, incluido el derecho a la libre determinación.

El reto de hacer frente a las violaciones graves del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos se ve agravado por la falta de equidad en la respuesta internacional. En algunas situaciones, se da una respuesta rápida e incluso sólida. En otras, los autores gozan prácticamente de impunidad a la hora de cometer delitos.

El Consejo de Seguridad, en su calidad de órgano principal de las Naciones Unidas encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales, debe actuar con valentía en todas las situaciones en las que se vea amenazada la supervivencia de millones de civiles atrapados en el círculo vicioso de la violencia y la guerra.

Anexo 41**Declaración de la Misión Permanente de Polonia ante las Naciones Unidas**

En primer lugar, quisiera dar las gracias a la delegación de Viet Nam por haber elegido como tema de este debate abierto la pertinente cuestión de la protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil. Sr. Presidente: Permítaseme también expresarle mi más sincero agradecimiento por la exitosa Presidencia de su país en el Consejo de Seguridad durante este mes y por la calidad de su liderazgo durante los intensos debates celebrados en este Salón.

Polonia suscribe las declaraciones formuladas en nombre de la Unión Europea (anexo 32) y por la Misión Permanente de Suiza ante las Naciones Unidas (anexo 47) en nombre del Grupo de Amigos sobre la protección de los civiles, que reiteran la importancia de proteger a los civiles y las infraestructuras esenciales en las zonas de conflicto.

Polonia está profundamente preocupada por la magnitud de los ataques contra los bienes indispensables para la supervivencia de los civiles en las zonas de conflicto. Con demasiada frecuencia, no se trata de simples incidentes, sino de una táctica deliberada de guerra y terror adoptada por los combatientes. Esa violación flagrante del derecho internacional humanitario es indignante e intolerable.

Privar a los civiles de infraestructuras esenciales para su supervivencia es especialmente peligroso en situaciones de hambruna e inseguridad alimentaria causadas por los conflictos. Hace dos años, durante la Presidencia de Polonia del Consejo de Seguridad, se aprobó por unanimidad la resolución 2417 (2018), sobre la inseguridad alimentaria ocasionada por los conflictos. Hoy en día, su objetivo clave de proteger los suministros humanitarios y el acceso a las respuestas a la inseguridad alimentaria causada por los conflictos parece más pertinente que nunca, en un momento en que luchamos contra las presiones generalizadas impuestas por la enfermedad por coronavirus.

Los centros educativos siguen siendo las principales fuentes de inspiración para que las nuevas generaciones desarrollen todo su potencial. En ese sentido, constituyen una condición indispensable para el desarrollo de las sociedades, la economía y la humanidad en general. A este respecto, nos preocupa enormemente el aumento de la violencia contra la educación. Nos comprometemos a trabajar para ponerle fin de inmediato. Con este objetivo, saludamos y apoyamos las iniciativas encaminadas a mitigar los efectos de los conflictos en la educación, como la Declaración sobre Escuelas Seguras.

El acceso humanitario inmediato, pleno e ininterrumpido en situaciones de conflicto es un requisito importante para una acción humanitaria eficaz. Lamentablemente, este dista mucho de ser el caso, ya que el personal médico y humanitario, sus equipos y suministros, así como hospitales enteros y otras instalaciones médicas, siguen siendo objetivos de grupos armados y terroristas. Condenamos enérgicamente estos ataques y reiteramos nuestro compromiso de luchar por que los autores de estos crímenes atroces rindan cuentas ante la justicia.

Por último, pero no menos importante, quisiéramos subrayar que los ataques contra infraestructuras críticas están afectando de manera desproporcionada a quienes son más vulnerables a las consecuencias perjudiciales de los conflictos armados, entre ellos las personas con discapacidad, las mujeres y los niños. Debemos mejorar la protección de estos grupos a fin de que se respeten sus derechos fundamentales y se satisfagan sus necesidades básicas.

Para concluir, permítaseme asegurar al Consejo que Polonia está dispuesta a apoyar cualquier iniciativa en el marco de las Naciones Unidas para proteger a los civiles, previniendo y abordando la violencia cometida contra bienes indispensables para su supervivencia.

Anexo 42**Declaración del Representante Permanente de Portugal ante las Naciones Unidas, Francisco Duarte Lopes**

Portugal suscribe la declaración presentada por la Unión Europea (anexo 32) y, a título nacional, quisiera formular las siguientes observaciones.

Portugal agradece a Viet Nam, en su calidad de Presidente del Consejo de Seguridad, la organización de este debate abierto y lo felicita por haber situado la protección de los civiles y de las infraestructuras esenciales en las zonas de conflicto entre una de las prioridades de su mandato en el Consejo de Seguridad.

Los ataques deliberados contra civiles desprotegidos constituyen crímenes de guerra y, en algunos casos, crímenes de lesa humanidad que merecen una rendición de cuentas adecuada. La destrucción, el daño o la inutilización de bienes indispensables para la supervivencia de la población civil tiene efectos negativos en los derechos humanos y el bienestar de la población y, en última instancia, en su derecho a la vida.

Portugal apoya el desarrollo de estrategias integrales de prevención de conflictos, a saber, la promoción de políticas de desarrollo sostenible, encaminadas a consolidar la paz y proteger a los civiles, respetando plenamente la prevalencia del diálogo político y del derecho internacional.

Solo podemos garantizar una paz sostenible a través de un enfoque integrado, basado en la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Como se ha demostrado ampliamente desde que se incluyó por primera vez en los mandatos de mantenimiento de la paz hace 21 años, la protección de los civiles debe considerarse una prioridad transversal a lo largo de todo el ciclo del conflicto.

Uno de los principios fundamentales de los mandatos de protección de los civiles en el mantenimiento de la paz es que dicha protección es la principal responsabilidad de los Gobiernos. El personal de mantenimiento de la paz encargado de proteger a los civiles tiene la autoridad y la responsabilidad de proporcionar protección cuando un Gobierno no puede o no quiere proteger. Por lo tanto, la protección de los civiles es un pilar fundamental de la prevención de conflictos y de las operaciones de mantenimiento y consolidación de la paz.

Los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil están protegidos por el artículo 54 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949, que prohíbe atacar, destruir, sustraer o inutilizar dichos bienes.

Los debates sobre subtemas específicos de la protección de los civiles son importantes, ya que permiten un análisis más detallado de las esferas y los problemas que preocupan, lo que da lugar a estrategias más específicas. En este caso concreto, la protección de los bienes indispensables tiene un efecto transversal en el objetivo general de proteger a la población civil. Además, conlleva externalidades positivas al permitirnos abordar otras agendas relacionadas, como la de las mujeres y la paz y la seguridad y la de los niños y los conflictos armados.

Los ataques contra escuelas tienen un efecto especialmente duradero, que pone en peligro el futuro de generaciones enteras y afecta de manera desproporcionada a las niñas. En este contexto, la Declaración sobre Escuelas Seguras es un documento fundamental, al igual que la resolución 1998 (2011), que insta a las partes a abstenerse de llevar a cabo acciones que obstaculicen el acceso de los niños a la educación y a los servicios sanitarios. Portugal se enorgullece del papel que desempeñó en la aprobación de dicha resolución durante su mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad entre 2011 y 2012.

Asimismo, abordar subtemas específicos de la protección de los civiles es especialmente pertinente a medida que surgen nuevos retos y los conflictos se vuelven más complejos. Proteger los bienes indispensables se convierte en una tarea clave en el contexto de la guerra urbana, el cambio climático y el terrorismo.

En cuanto a las pérdidas materiales, es probable que la destrucción de instalaciones sanitarias y educativas sea una de las consecuencias más evidentes y perjudiciales de los conflictos. Sin embargo, los conflictos pueden tener implicaciones mucho más amplias, complejas y perniciosas en términos de destrucción, daño o inutilización de bienes esenciales. Por ejemplo, los ataques contra productos alimenticios, cosechas, ganado, el agua potable y el saneamiento, así como instalaciones de tratamiento de residuos, redes de suministro energético, las principales infraestructuras de movilidad —como los aeropuertos, los ferrocarriles y las principales rutas de acceso—, y las instalaciones sanitarias y educativas ponen en grave peligro el bienestar inmediato y a largo plazo de las poblaciones. Por ello, las situaciones de conflicto, ya de por sí complejas, evolucionan rápidamente hacia crisis humanitarias extremadamente graves. El resultado es el desplazamiento forzado, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, la propagación de enfermedades infecciosas, la ausencia de una atención médica y la obstrucción de las oportunidades educativas. Desde esta perspectiva, se trata de algo tan destructivo como la violencia directa y los ataques contra la población.

La destrucción, el daño o la inutilización de bienes indispensables tiene otras implicaciones significativas en el marco de los mandatos de protección de los civiles al obstaculizar la asistencia humanitaria.

A la luz de lo anterior, la aprobación de la resolución 2341 (2017) fue clave para establecer la protección de las infraestructuras críticas contra las amenazas terroristas y mejorar la cooperación internacional y regional. En la resolución 2417 (2018) se señaló el vínculo existente entre los conflictos armados y la inseguridad alimentaria provocada por los conflictos; se instó a todas las partes en conflicto a que cumplieran sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario en materia de protección de los civiles; y se condenó el hecho de que se recurra a la práctica de hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra y de que se deniegue de manera ilícita el acceso de la asistencia humanitaria a la población civil.

A pesar del llamamiento que el Secretario General hizo en marzo de 2020 a favor de un alto el fuego mundial inmediato a fin de centrarnos en la lucha contra la enfermedad por coronavirus (COVID-19), los conflictos en curso siguen perjudicando a poblaciones de todo el mundo. En este sentido, la resolución 2565 (2021) fue fundamental al pedir que se reforzara la cooperación internacional para facilitar el acceso equitativo y asequible a las vacunas contra la COVID-19 en situaciones de conflicto armado y posconflicto, y durante emergencias humanitarias complejas.

Quisiera formular varias observaciones respecto de algunas de las cuestiones en las que se centra este debate.

Con el fin de apoyar al Gobierno anfitrión en su responsabilidad primordial de proteger a la población civil, es importante participar en el diálogo y la promoción política, como el apoyo a la reconciliación, los acuerdos de paz o la mediación, y la creación de capacidades.

A la luz de ciertos desafíos, como la urbanización, el cambio climático y la pandemia de COVID-19, es de suma importancia que los mandatos relativos a la protección de los civiles en las operaciones de paz incluyan objetivos claros, así como estrategias globales, integradas y transversales dirigidas a todo el ciclo del conflicto que tengan en cuenta la lentitud de los procesos de rehabilitación y reconstrucción en la fase de posconflicto. La protección de los bienes indispensables debe incluir una

vertiente de prevención, además de la de reconstrucción. La protección de los bienes indispensables se debe tener en cuenta en las fases de posconflicto, rehabilitación y reconstrucción como un elemento importante para la recuperación socioeconómica y la consolidación de la paz.

Es fundamental garantizar y reforzar la formación de todos los miembros de las operaciones de mantenimiento de la paz. Esto incluye la formación en derecho internacional humanitario dentro de las fuerzas armadas, una obligación en virtud del derecho internacional humanitario consuetudinario y de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales. El Consejo de Seguridad y la Asamblea General han recordado esta obligación en repetidas ocasiones.

Entablar diálogo y mantener el contacto con los agentes locales facilita la aplicación de los mandatos de protección de los civiles, en particular en lo que respecta a la protección de bienes indispensables, ya que estos agentes son los que mejor conocen los problemas y las necesidades sobre el terreno.

También es importante reforzar las alianzas con los asociados internacionales para la asistencia humanitaria y la creación de capacidades. El Comité Internacional de la Cruz Roja, por ejemplo, es un agente clave en los marcos humanitario e internacional.

Los procesos de seguimiento y presentación de informes son fundamentales para la toma de decisiones sobre el terreno, ya que permiten elaborar estrategias más concretas.

Por último, la promoción de la rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad deben reflejar las consecuencias de la destrucción, los daños o la inutilización de bienes indispensables, y no solo las consecuencias directas de los actos de violencia.

Portugal sigue comprometido con la defensa del derecho internacional humanitario y de los principios de la asistencia humanitaria y reafirma la importancia del Consenso Europeo sobre la Ayuda Humanitaria, cuya visión común sirve de guía a la acción de la Unión Europea en materia de asistencia humanitaria.

La presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea, en el marco de su programa humanitario, destaca la importancia del cumplir el derecho internacional humanitario, de respetar y salvaguardar los principios humanitarios y de garantizar el acceso humanitario en situaciones de conflicto. Esto incluye garantizar la protección de los civiles en los conflictos armados y la protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil. Puedo asegurarles que estas cuestiones también seguirán siendo prioritarias para nuestras acciones en el ámbito de las Naciones Unidas.

Anexo 43**Declaración del Representante Permanente de la República de Corea ante las Naciones Unidas, Cho Hyun**

Sr. Presidente: Ante todo, me gustaría agradecerle la convocatoria del oportuno debate abierto de hoy sobre la protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil.

Hasta la fecha, la comunidad internacional siempre ha insistido en la necesidad de proteger los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, como los artículos alimenticios, las cosechas, las instalaciones de agua potable, los sistemas de energía y las instalaciones médicas, durante los conflictos armados. Sin embargo, lamentablemente, somos testigos de las repercusiones directas e indirectas que a día de hoy siguen teniendo los conflictos armados y los atentados para estos bienes, y sus consecuencias justifican la atención permanente y la acción colectiva de la comunidad internacional. La protección de los bienes de carácter civil es importante no solo para satisfacer las necesidades humanitarias de los civiles en los conflictos armados, sino también para su resiliencia y para consolidar la paz después de los conflictos.

Además, la realidad de los conflictos evoluciona constantemente a causa de la pandemia, las nuevas tecnologías, la urbanización de los conflictos armados y otros factores nuevos que agravan aún más la situación de maneras variadas y complejas. La importancia de garantizar la protección de los bienes de carácter civil en los conflictos armados ha sido reconocida y documentada en numerosas ocasiones, entre otras, en el informe del Secretario General de 2020 sobre la protección de los civiles en los conflictos armados (S/2020/366) y en numerosas resoluciones, como la 2175 (2014), la 2286 (2016), la 2417 (2018) y la 2565 (2021). También quisiera reiterar nuestro apoyo al llamamiento del Secretario General en favor de un alto el fuego mundial anunciado el 23 de marzo de 2020 y a la resolución 2532 (2020), contra la crisis de la enfermedad por coronavirus (COVID-19).

La comunidad internacional se ha esforzado por establecer principios y orientaciones en materia de protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil. Atacar, destruir, retirar o inutilizar dichos bienes está prohibido por el derecho internacional humanitario, incluidos los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales. En sus numerosas resoluciones y declaraciones, el Consejo de Seguridad también ha subrayado la necesidad de que las partes en un conflicto armado respeten el derecho internacional, incluidas la protección de los civiles y los bienes de carácter civil y la salvaguarda de la asistencia humanitaria para quienes la necesitan. Las partes en un conflicto armado, incluidos los grupos armados no estatales, deben tener en cuenta estas leyes y actuar de acuerdo con ellas.

La República de Corea reitera su compromiso de seguir apoyando los esfuerzos de la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas, en este ámbito. Hemos proseguido nuestros esfuerzos en ese sentido, entre otras cosas, haciendo que las normas en cuestión queden reflejadas en nuestra legislación, manuales y guías de los organismos y entidades pertinentes a nivel nacional.

Además, habida cuenta de los retos económicos y sociales que plantea la pandemia de COVID-19, la República de Corea ha realizado importantes contribuciones en el marco del programa “AOD Corea: generando CONFIANZA” para mejorar de forma integral la capacidad de resiliencia de los países en desarrollo apoyando sus redes de protección educativa, empresarial y social, y ha aportado 5 millones de dólares al Fondo de las Naciones Unidas de Respuesta a la COVID-19 y Recuperación.

La República de Corea seguirá colaborando con las Naciones Unidas y la comunidad internacional en su empeño por proteger los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil.

Anexo 44**Declaración de la Representante Permanente de Sudáfrica ante las Naciones Unidas, Mathu Joyini**

Agradezco a la Presidencia de Viet Nam la convocatoria de este debate abierto a nivel ministerial sobre el tema “Protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil”, en relación con el tema titulado “La protección de los civiles en los conflictos armados”. Permítaseme también dar las gracias al Sr. Mark Lowcock, el Sr. Peter Maurer y el Sr. Kevin Rudd por sus exposiciones informativas.

La protección de los civiles ha sido el tema central de innumerables discusiones y debates en las Naciones Unidas y sus órganos subsidiarios durante decenios, y sin embargo seguimos siendo testigos de violaciones del derecho internacional humanitario y de sufrimientos indecibles. Los objetivos del derecho internacional humanitario y los del Consejo de Seguridad se superponen, en el sentido de que ambos intentan llevar la paz a las poblaciones civiles.

Los conflictos armados siguen teniendo consecuencias devastadoras para las vidas de los civiles, en particular las mujeres, los niños y los jóvenes, que se ven afectados de forma desproporcionada por los conflictos. En algunos casos, los ataques indiscriminados hacen que los civiles se vean obligados a huir de sus hogares, dando lugar a un elevado número de personas desplazadas tanto internamente como a nivel internacional. Estas poblaciones vulnerables necesitan asistencia humanitaria para sobrevivir.

A Sudáfrica le sigue preocupando el actual deterioro a nivel mundial de la situación humanitaria a causa de los conflictos armados y a otras amenazas emergentes, como los conflictos inducidos por el clima. Además, la COVID-19 ha agravado aún más la situación humanitaria en las situaciones de conflicto.

Los conflictos armados prolongados menoscaban los esfuerzos de los Estados afectados para reparar y mantener la infraestructura civil esencial, lo que impide la prestación de servicios esenciales a los civiles durante períodos más largos. En este sentido, es importante que el Consejo de Seguridad colabore estrechamente con los asociados regionales e internacionales para afrontar estos retos. A este respecto, Sudáfrica subraya la importancia de los proyectos de impacto rápido y otras actividades de consolidación de la paz centradas en la creación de instituciones, que han demostrado su utilidad para aliviar el sufrimiento de los civiles necesitados.

Hoy, 27 de abril, se cumplen 27 años de libertad desde que Sudáfrica derrotó al apartheid. Mientras los sudafricanos celebran hoy su Día de la Libertad, se nos recuerda que la libertad no puede alcanzarse realmente si la población civil está en peligro debido a los ataques contra los bienes indispensables para su supervivencia.

Por lo tanto, Sudáfrica condena cualquier forma de restricción del acceso humanitario y la privación de los civiles de bienes indispensables para su supervivencia. También condenamos el uso del hambre y la inanición como táctica de guerra en los conflictos armados, así como la obstrucción deliberada de la prestación de servicios esenciales a las poblaciones necesitadas.

Este debate nos recuerda que el objetivo primordial del derecho internacional humanitario consiste en proteger a la población civil y su infraestructura patrimonial para evitar las crisis y catástrofes humanitarias. Las partes en conflicto tienen la responsabilidad de garantizar la protección de la infraestructura civil esencial, como los sistemas y mercados alimentarios, las instalaciones sanitarias y educativas, los sistemas de energía, las rutas de transporte, incluidos los aeropuertos internacionales, y las instalaciones de agua y saneamiento. También es fundamental que los Estados receptores garanticen un acceso seguro a los servicios civiles esenciales sin interrupciones.

Los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977 constituyen la piedra angular del derecho internacional humanitario. Como signatarios de los Convenios de Ginebra, todos los Estados tienen la obligación de proteger a los civiles, y el incumplimiento de esa obligación da lugar a crisis y catástrofes humanitarias y al sufrimiento de la población. Además, dicho incumplimiento plantea una amenaza para la seguridad alimentaria y la nutrición, en especial en situaciones de conflicto en las que se bloquean o destruyen deliberadamente corredores humanitarios para impedir que la ayuda alimentaria y el personal sanitario accedan a la población afectada y a los grupos vulnerables.

En último término, las conculcaciones del derecho internacional humanitario y, en concreto, el uso de la inanición como método de guerra, ponen en peligro a los civiles y reducen el acceso a los servicios esenciales. Ello implica, de manera automática, que la población civil se vea privada de su libertad y del disfrute de sus derechos humanos básicos y sus libertades fundamentales. Por consiguiente, exhortamos a todas las partes en conflictos armados, incluidos los grupos de oposición armados, a que asuman la responsabilidad de garantizar la protección de la población civil y de los bienes de carácter civil indispensables para su supervivencia. Quienes no cumplan con las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional humanitario deben rendir cuentas por esas violaciones. Asimismo, instamos a los Estados afectados a que lleven a los responsables ante la justicia y exhortamos al Consejo de Seguridad a que siga incluyendo los nombres de los autores de violaciones al imponer sanciones al respecto.

Todas las partes en un conflicto deben respetar las disposiciones del derecho internacional humanitario, en particular, los principios de distinción y proporcionalidad y la obligación de adoptar todas las precauciones necesarias para no poner en peligro ni dañar a la población civil o los bienes de carácter civil. Además, es fundamental que el derecho internacional humanitario se aplique de manera coherente e imparcial. Ningún país y ninguna parte involucrada en un conflicto puede estar por encima de la ley.

El Consejo de Seguridad ha logrado avances en cuanto a la protección de los civiles, desde la histórica aprobación de la resolución 1265 (1999), que se traducen en la actuación eficaz sobre el terreno de las misiones de mantenimiento de la paz dotadas de ese mandato. No obstante, las numerosas limitaciones de carácter estratégico y operativo continúan planteando desafíos. Esos desafíos repercuten negativamente en la capacidad de las misiones de mantenimiento de la paz para ejercer su tarea prioritaria de protección de los civiles. En ese sentido, es fundamental que el Consejo de Seguridad estudie detenidamente cada situación de conflicto específica y vele por que las misiones de mantenimiento de la paz dispongan de un mandato claramente definido, así como de recursos, capacidades y activos suficientes, según proceda, para que puedan llevar a cabo con éxito su mandato de proteger a la población civil.

Esperamos que en el actual desarrollo de la iniciativa Acción por el Mantenimiento de la Paz Plus se tenga en cuenta la necesidad de reconsiderar algunos de los desafíos que afectan a las operaciones de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz en el ejercicio de su mandato de protección de la población civil, incluida la protección de los bienes indispensables para la supervivencia de los civiles.

Sudáfrica reconoce el papel fundamental de la labor de alerta temprana y recolección de datos de inteligencia para evitar agresiones contra infraestructura civil esencial. En ese sentido, subrayamos la importancia de establecer ese tipo de sistemas para que sea posible dar una respuesta pronta y rápida a cualquier amenaza. Ello exigirá una coordinación estrecha entre el aparato de seguridad de los Estados receptores y las misiones de mantenimiento de la paz, a fin de responder con eficacia a las amenazas que afecten de manera inminente a la población civil y la infraestructura esencial.

Sudáfrica desea subrayar la necesidad de garantizar la seguridad y la protección del personal humanitario y sanitario para que siga ejerciendo su labor esencial, así como de instar a las partes en conflicto a que den prioridad a la seguridad de este tipo de personal. En ese sentido, Sudáfrica insta a la comunidad internacional a que siga ampliando su apoyo, en particular el financiero, a las iniciativas de los Estados receptores orientadas a asegurar la protección de la población civil en situaciones de conflicto.

Sudáfrica desea manifestar su agradecimiento al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) por su inquebrantable determinación de preservar la vida y defender la dignidad de los seres humanos. Encomiamos la labor realizada por el CICR para llegar a aquellas personas que necesitan de manera urgente asistencia y socorro humanitarios. Esperamos que el CICR colabore estrechamente con la Agencia Humanitaria Africana desde el momento en que esta inicie su actividad, como respuesta práctica de la Unión Africana a los desafíos humanitarios existentes en el continente.

Para concluir, queremos proponer que el Consejo de Seguridad estudie la posibilidad de redactar un proyecto de resolución temática en el que se aborde la protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, ya que en estos momentos existen innumerables resoluciones en las que se abordan de manera parcial diversas cuestiones relacionadas con este asunto. Ello permitirá que el Consejo supervise la aplicación de sus decisiones relativas a la protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil.

Anexo 45**Declaración del Representante Permanente de España ante las Naciones Unidas, Agustín Santos Maraver**

[Original: español]

España agradece a la Presidencia vietnamita del Consejo de Seguridad la celebración de este debate abierto sobre la protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil y se alinea con la intervención del delegado de la Unión Europea (anexo 32).

La defensa del derecho internacional humanitario y la acción humanitaria basada en los principios de imparcialidad, independencia, neutralidad y humanidad son prioridades de la acción exterior de España. Nuestra colaboración en la redacción de la resolución 2286 (2016), hace precisamente cinco años, pone de manifiesto el firme compromiso de España por proteger los orígenes del derecho internacional humanitario: la misión del personal médico en el conflicto armado.

Por otro lado, los diferentes niveles de protección que el derecho internacional humanitario otorga a las instalaciones civiles justifican la apuesta decidida de mi Gobierno por proteger la educación en emergencias y apoyar la Declaración sobre Escuelas Seguras y las Directrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades durante Conflictos Armados. España organizó la tercera Conferencia sobre Escuelas Seguras, celebrada en Palma de Mallorca en 2019, y el primer Seminario relativo a la aplicación de la Declaración sobre Escuelas Seguras, que tuvo lugar en Madrid hace apenas unas semanas y en el que participaron Administraciones de 19 Estados. El Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional anunció, en ese marco, el compromiso de España para liderar, junto a Noruega y la Argentina, la implementación técnica de la Declaración.

Además de los hospitales y las escuelas, debemos ser cada vez más exigentes y protectores respecto de las infraestructuras civiles críticas imprescindibles para la vida en conflictos armados, tales como el acceso al agua, los recursos naturales, los alimentos y las cosechas o las infraestructuras de generación y distribución de energía.

La protección del medio ambiente es una prioridad para todos los países en el siglo XXI. Su preservación no solo condicionará la protección de los civiles durante el conflicto, sino que también facilitará la recuperación y la salida de este, contribuyendo así a crear sociedades más resilientes. La acción humanitaria española está comprometida con la transversalización del medio ambiente en sus intervenciones y participa en proyectos con compromiso de cero residuos en sus despliegues médicos. Los desastres ligados a los efectos adversos del cambio climático van en aumento. Tienen consecuencias humanitarias significativas, tales como el desplazamiento y las migraciones forzadas, la destrucción de medios de vida y la exacerbación de necesidades, y, en última instancia, dan pie a ciclos de violencia y conflicto.

En el plano de la prevención de ataques, debemos seguir incentivando herramientas y mecanismos que puedan contribuir a evitar la pérdida de vidas humanas civiles, tales como el mecanismo de notificación humanitaria, la recolección de datos o la investigación de hechos con carácter preventivo o las conversaciones sobre derecho internacional humanitario con agentes no estatales, que concreten la responsabilidad de proteger que a todos nos incumbe.

España es una firme defensora de la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta, órgano permanente del Primer Protocolo Adicional de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949, sobre la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, para realizar investigaciones de actos que constituyan una violación grave del derecho internacional humanitario.

Apoyamos también el trabajo de la Corte Penal Internacional y promovemos la cooperación entre el Consejo de Seguridad y la Corte Penal Internacional. La protección de las víctimas es una prioridad de España y, en este sentido, mi Gobierno contribuye al Fondo Fiduciario de la Corte Penal Internacional para las Víctimas.

Finalmente, quiero poner de relieve la capacitación y formación de nuestras fuerzas armadas y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en derecho internacional humanitario, así como en la incorporación de diversos indicadores en las estrategias humanitarias vigentes, entre ellos de protección, para que los cooperantes españoles y sus socios locales estén informados y capacitados en derecho internacional humanitario.

Anexo 46**Declaración de la Misión Permanente de Suecia ante las Naciones Unidas**

Tengo el honor de hacer esta declaración en nombre de los países nórdicos, a saber, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Noruega y mi propio país, Suecia.

Nos gustaría dar las gracias a la Misión Permanente de la República Socialista de Viet Nam por haber organizado el presente debate sobre un tema tan oportuno, así como a los ponentes por sus observaciones tan informativas.

El efecto devastador que los conflictos armados ejercen sobre la población civil se ve exacerbado por la falta de protección de los bienes de los que dependen los civiles para sobrevivir, a saber, los alimentos, el saneamiento, la atención médica y otras infraestructuras civiles esenciales como la red eléctrica y de distribución de agua. El uso militar de las instalaciones educativas y los ataques a estas están privando cada vez más a los niños de su derecho a la educación y del entorno de protección que brindan las escuelas, lo que pone en peligro su salud y su vida.

En el derecho internacional humanitario se establecen protecciones jurídicas específicas para estos bienes, que son indispensables para la supervivencia de la población civil. Con arreglo al derecho internacional humanitario, está prohibido atacar, destruir, sustraer o inutilizar bienes indispensables para la supervivencia de la población, incluso a través de medios y métodos de guerra cibernéticos. Todas las partes deben respetar esas normas en cualquier circunstancia.

Los ataques continuos a la asistencia médica en los conflictos armados, pese a las obligaciones del derecho internacional humanitario, son preocupantes, sobre todo habida cuenta de los desafíos y la vulnerabilidad sin precedentes existentes desde el inicio de la pandemia de enfermedad por coronavirus. La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de que se respeten estas normas, sobre todo las obligaciones de proteger al personal y las instalaciones sanitarias en los conflictos armados establecidas en los Convenios de Ginebra de 1949 y las obligaciones aplicables a dichos trabajadores e instalaciones en virtud de los Protocolos Adicionales de 1977 y 2005. También abogamos por que se aplique plenamente la resolución 2286 (2016), sobre la protección de la asistencia sanitaria.

A este respecto, quisiéramos encomiar los grandes esfuerzos realizados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para hallar formas concretas de ayudar a los Estados a mejorar el respeto de la obligación de proteger a los servicios sanitarios en los conflictos armados mediante la publicación de la hoja informativa *Respecting and Protecting Health Care in Armed Conflicts and in Situations Not Covered by International Humanitarian Law* que el Gobierno de Suecia financió. Animamos a todos los Estados a que hagan uso de ese documento de orientación.

En la resolución histórica 2417 (2018) se hace hincapié en el vínculo existente entre los conflictos armados, la inseguridad alimentaria generada por los conflictos y la amenaza de hambruna. También se estipula que el uso de la inanición de los civiles como método de guerra puede ser constitutivo de un crimen de guerra. En la resolución 2417 (2018) se exhorta a todas las partes a que cumplan plenamente con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y a que protejan las granjas, los mercados, los molinos, los lugares de almacenamiento y otras infraestructuras necesarias para la producción y distribución de alimentos. En diciembre de 2019, se modificó el Estatuto de Roma a fin de incluir el crimen de guerra de utilizar la inanición de civiles como método de guerra en los conflictos armados no internacionales.

Los conflictos armados también conllevan amenazas para el medio ambiente que pueden ejercer un efecto perjudicial en la población local. En las Directrices del CICR sobre la *Protección del Medio Natural en los Conflictos Armados, recientemente actualizadas*, se ofrece una valiosa orientación sobre las medidas concretas que cabe adoptar para mejorar la protección del medio ambiente en los conflictos armados. Además, en su labor actual relativa a la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados, la Comisión de Derecho Internacional está recopilando y aclarando las normas pertinentes del derecho internacional.

Tanto las repercusiones directas como las indirectas de los conflictos armados pueden ejercer efectos a largo plazo sobre la población civil y ser devastadores. Los daños o la destrucción de las infraestructuras que permiten la prestación de servicios esenciales pueden obstaculizar los esfuerzos humanitarios, lo que a su vez puede conducir a conflictos más prolongados. Las minas y otros artefactos explosivos remanentes exacerban las amenazas para los civiles. Frenan las perspectivas de reconstrucción y desarrollo socioeconómico al impedir el acceso a los servicios básicos y el uso productivo de la tierra y al dificultar el retorno seguro de las comunidades desplazadas. Es preciso adoptar un enfoque más coherente y sistemático respecto de la protección de los civiles.

Las protecciones legales que ofrece el derecho internacional humanitario, como todos sabemos, solo son eficaces si se aplican y se cumplen y si se rinden cuentas. Para garantizar la protección de los civiles sigue siendo imprescindible realizar un esfuerzo genuino y concertado para cumplir las disposiciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, en especial protegiendo los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, así como reforzando la rendición de cuentas por las violaciones graves de la ley.

Anexo 47**Declaración de la Misión Permanente de Suiza ante las Naciones Unidas**

Tengo el honor de intervenir en nombre de los miembros del Grupo de Amigos de la Protección de los Civiles en los Conflictos Armados: Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Canadá, República Dominicana, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Cote d'Ivoire, Japón, Kuwait, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suecia, Reino Unido, Ucrania, Uruguay y Suiza.

Damos las gracias a la Misión Permanente de la República Socialista de Viet Nam por haber organizado el debate de hoy y a los ponentes por sus pertinentes comentarios. Apreciamos las preguntas orientativas de la nota conceptual (S/2021/335, anexo) y nos gustaría realizar tres observaciones al respecto.

En primer lugar, quisiéramos destacar que las obligaciones del derecho internacional humanitario en relación con los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil están intrínsecamente relacionadas con la protección de esa misma población civil que utiliza esos bienes. En el derecho internacional humanitario, en particular en virtud de sus principios de distinción y proporcionalidad, así como de precaución en el ataque, se imponen restricciones considerables al modo en que se llevan a cabo las hostilidades durante los conflictos armados y se prohíben los ataques contra bienes civiles y bienes indispensables para la supervivencia de la población civil. Reviste suma importancia garantizar el respeto de estas normas fundamentales por todas las partes en los conflictos armados.

En segundo lugar, además de los efectos directos e inmediatos que pueden resultar de los actos de las partes en los conflictos armados, pueden surgir efectos indirectos y a largo plazo. Estos pueden conducir a la inseguridad alimentaria, así como al deterioro de las infraestructuras y los sistemas de servicios en los conflictos prolongados, debido, por ejemplo, a la falta de acceso y mantenimiento. Sistemas enteros de salud y educación colapsan, con lo que se priva a generaciones de niños de su futuro. Ello debe contrarrestarse mediante la adopción de un enfoque holístico por parte de los Estados Miembros, las partes en los conflictos armados, el Consejo de Seguridad y el sistema de las Naciones Unidas en general, en el que se aborden las causas fundamentales de los conflictos armados, se haga hincapié en el respeto del derecho internacional humanitario, se mitiguen las consecuencias de la destrucción de bienes indispensables para la supervivencia de la población civil y se incluyan medidas preventivas para evitar la destrucción en el futuro.

En tercer lugar, el Grupo de Amigos subraya la importancia fundamental que reviste la rendición de cuentas con objeto de disuadir a los autores de las violaciones y de garantizar la justicia para las víctimas. En diciembre de 2019, se modificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional con objeto de incluir el crimen de guerra consistente en utilizar intencionadamente la inanición de civiles como método de guerra, privándolos de los bienes indispensables para su supervivencia, incluida la obstaculización intencionada de los suministros de socorro en los conflictos armados no internacionales. Ahora el Consejo puede remitir a la Corte las situaciones de conflicto armado internacionales y no internacionales en las que haya indicios de que se ha cometido ese crimen. El Grupo de Amigos alienta a los Estados partes en el Estatuto de Roma a que consideren la ratificación de esta enmienda. También pide a los Estados Miembros que incluyan referencias a estos actos en su legislación nacional, según corresponda, y que los investiguen, en consonancia con la resolución 2417 (2018), sobre los conflictos y el hambre.

Anexo 48**Declaración del Representante Permanente de Turquía ante las Naciones Unidas, Feridun H. Sinirlioglu**

Me gustaría agradecerle la organización de esta reunión y su énfasis sobre el tema crucial de la protección de los civiles y los bienes de carácter civil en un momento en el que no tenemos acceso a millones de personas necesitadas, mientras la infraestructura y los servicios esenciales se ven interrumpidos de forma habitual.

Según las Naciones Unidas, en los últimos cuatro años se ha registrado el mayor aumento de necesidades humanitarias. La combinación de los conflictos, el cambio climático y la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha agravado la ya frágil situación en los entornos humanitarios.

En la actualidad, una de cada 33 personas en el mundo necesita asistencia o protección humanitaria. El número de personas desplazadas debido a los conflictos y la violencia casi ha alcanzado la cifra sin precedentes de 80 millones.

En su último informe sobre la protección de los civiles (S/2020/366), el Secretario General señala la importancia de proteger al personal sanitario y la infraestructura esencial, así como de facilitar el acceso rápido, sin obstáculos y seguro de la asistencia humanitaria. Reforzar el respeto del derecho internacional y garantizar la rendición de cuentas por las violaciones graves son los dos desafíos más urgentes a los que se enfrenta la protección de los civiles.

Mientras el mundo atraviesa una devastadora crisis sanitaria global, los ataques indiscriminados contra la población civil y los elementos de la infraestructura civil, como hospitales, escuelas, mercados y sistemas eléctricos e hidráulicos, han agravado aún más la situación de las personas vulnerables.

La Organización Mundial de la Salud ha confirmado que se produjeron más de 300 ataques confirmados contra instalaciones de atención sanitaria en países afectados por emergencias y entornos frágiles en 2020.

Un incidente de este tipo se produjo hace muy poco en Siria, donde, el 21 de marzo, el régimen atacó el hospital de Atarib, que cuenta con el apoyo y la protección de las Naciones Unidas. En este brutal ataque murieron y resultaron heridos civiles inocentes. Los registros muestran que al menos dos trabajadores humanitarios y ocho miembros del personal médico son asesinados cada mes en Siria.

El respeto del derecho internacional humanitario también entraña la protección del personal humanitario y de la infraestructura civil. En este sentido, el mecanismo de las Naciones Unidas para evitar ataques contra lugares protegidos es un instrumento indispensable. Turquía seguirá ofreciendo toda su colaboración a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) para aplicar este mecanismo, y exhortamos a todos los países pertinentes a que hagan lo mismo.

Aunque los conflictos han desplazado a más de 30 millones de niños en todo el mundo, los niños sirios siguen estando entre los más afectados, debido a la guerra que ya dura más de diez años. Según el UNICEF, una de cada tres escuelas en Siria ya no se puede utilizar porque ha sido destruida o dañada, o se está utilizando con fines militares. Estos ataques repercuten en el acceso a la educación de toda una generación.

Las organizaciones terroristas explotan las inestabilidades y tratan de difundir su ideología separatista y adquirir legitimidad. El Secretario General ha revelado en varias ocasiones las tácticas de la organización terrorista Partido de los Trabajadores del Kurdistán/Unidades de Protección del Pueblo (PKK/YPG) en Siria, que incluyen, entre otras cosas, la imposición de programas escolares arbitrarios, la detención de profesores y el bloqueo de la asistencia humanitaria.

Esta organización terrorista también es responsable de interrumpir el suministro eléctrico en la estación hidráulica de Aluk, en el noreste de Siria, y de impedir su correcto funcionamiento. Ahora que la pandemia de COVID-19 ha hecho que las necesidades de electricidad en la región alcancen un nivel crítico, esos cortes de energía reiterados afectan gravemente a los servicios sanitarios de la región.

La destrucción o los daños a los sistemas de energía tienen efectos a largo plazo, ya que la reconstrucción o rehabilitación de los elementos de infraestructura energética requiere un trabajo integral de infraestructura y considerables recursos. La infraestructura y los sistemas de energía deben considerarse bienes indispensables para las poblaciones civiles y deben beneficiarse de una protección especial en virtud del derecho internacional humanitario.

La infame agenda del PKK en el Iraq y las consecuencias de su control arbitrario de casi 800 aldeas en el norte del país también son alarmantes. La población local manifiesta cada vez mayor inquietud ante la acusada falta de infraestructura y servicios básicos en estas zonas controladas por los terroristas. La comunidad internacional debe condenar la política del PKK de expulsar por la fuerza a los habitantes de estas zonas o de impedirles cultivar sus tierras. El sufrimiento constante de los integrantes de la comunidad yazidí en los campamentos de desplazados internos, que no pueden regresar a sus hogares ancestrales en la región de Sinyar debido a la presencia represiva y violenta del PKK y sus asociados, es un ejemplo de ello.

Mientras los conflictos causan estragos en las vidas de las personas, Turquía, como uno de los principales agentes humanitarios, sigue contribuyendo a los esfuerzos internacionales de prestación de asistencia humanitaria en numerosos lugares.

La asistencia médica que hemos proporcionado a 157 países desde el comienzo de la pandemia se suma a nuestros envíos periódicos de asistencia humanitaria a todo el mundo. Alrededor de 129 de esos países han recibido donaciones de equipos médicos esenciales y de otro tipo, y 50 países han recibido subsidios en efectivo, mientras que 75 han recibido permisos para la compra o exportación de equipos médicos.

También hemos apoyado la infraestructura sanitaria en varios países, incluidos algunos que han sido afectados por conflictos armados, ya sea construyendo o renovando hospitales, instalando hospitales de campaña o contribuyendo a la creación de capacidades del personal sanitario local.

En el noroeste de Siria, de conformidad con el acuerdo trilateral sobre la lucha contra la COVID-19, la Sociedad de la Media Luna Roja de Turquía, la OCHA y la Organización Mundial de la Salud han seguido proporcionando ayuda sanitaria y artículos relacionados por un valor que, hasta la fecha, asciende a unos 8,1 millones de dólares. En el marco de nuestros esfuerzos por restablecer la vida en el norte de Siria y recuperar la infraestructura atacada por el régimen sirio y la organización terrorista PKK/YPG, seguimos reparando y construyendo hospitales y estableciendo centros móviles de atención sanitaria.

Además de acoger al 20 % de la población de refugiados de todo el mundo, entre ellos alrededor de 4 millones de sirios que se han refugiado en Turquía, también tendemos nuestra mano amiga a diario a millones de sirios vulnerables más allá de nuestras fronteras por conducto de las operaciones humanitarias transfronterizas de las Naciones Unidas.

La continuidad de estos servicios vitales será una prueba de fuego para el Consejo de Seguridad en julio, cuando sus miembros decidirán el destino de millones de civiles inocentes. Si estas operaciones se detienen, además del pueblo sirio, toda la región, y otros lugares, se enfrentarán a una catástrofe humanitaria con graves repercusiones de seguridad y de otro tipo.

Hacemos un llamamiento al Consejo para que asuma su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales y renueve sin demora el mandato del mecanismo humanitario transfronterizo de las Naciones Unidas con puntos de paso adicionales.

No hay excusa para los ataques indiscriminados contra civiles inocentes y contra la infraestructura civil. Debemos hacer que los autores rindan cuentas y poner fin a la impunidad que sigue amenazando la paz y la seguridad a nivel mundial. Los mecanismos de rendición de cuentas genuinos desempeñan un papel fundamental en este sentido.

Acogemos con satisfacción la labor del Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente en Siria y la creación del Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar. El reciente fallo de la Corte Penal Internacional sobre su jurisdicción en los territorios palestinos ocupados es un avance jurídico importante para garantizar la rendición de cuentas y la justicia por los crímenes y las violaciones graves del derecho internacional.

La resolución ES-10/20 de la Asamblea General, sobre la protección de la población civil palestina, aprobada durante la presidencia turca de la cumbre de la Organización de Cooperación Islámica, es otro ejemplo importante de los esfuerzos internacionales para reforzar la disuasión contra los actos de violencia y el uso desproporcionado de la fuerza contra los civiles palestinos.

El derecho internacional humanitario se encuentra en la base de la protección. Los Convenios de Ginebra de 1949 proporcionan un marco bien definido para garantizar el cumplimiento del derecho internacional humanitario, que incluye una acción humanitaria neutral, imparcial y sin obstáculos. Debemos respetar y utilizar este marco.

Por otra parte, es más urgente que nunca atender el llamamiento mundial del Secretario General en favor de un alto el fuego para contribuir a crear las condiciones necesarias que permitan prestar asistencia humanitaria y proteger a la población civil y la infraestructura civil en las situaciones más urgentes.

Anexo 49**Declaración del Representante Permanente de Ucrania ante las Naciones Unidas, Sergiy Kyslytsya**

Quisiera expresar mi agradecimiento a la Presidencia de Viet Nam por haber organizado este importante debate sobre la situación actual y los desafíos que plantea la protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil en los conflictos armados, incluidas las consecuencias de la pandemia mundial de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Me enorgullece recordar que, ya en 2017, Ucrania, como miembro electo del Consejo de Seguridad, patrocinó la primera resolución del Consejo sobre la protección de la infraestructura vital (resolución 2341 (2017)), que está estrechamente relacionada con el debate de hoy.

Este debate es oportuno, ya que los conflictos armados siguen planteando numerosas amenazas para la población civil en las zonas urbanas y rurales. La comunidad internacional debe garantizar la plena protección de los bienes que son vitales para la supervivencia de la población civil, entre otras cosas, en el contexto de los problemas incipientes relacionados con las nuevas tecnologías y el armamento, el cambio climático y las consecuencias medioambientales de los conflictos armados.

Ucrania acoge con satisfacción el informe del Secretario General sobre la protección de los civiles en los conflictos armados (S/2020/366), así como sus oportunas iniciativas destinadas a mitigar las consecuencias para la seguridad de la pandemia de COVID-19. El llamamiento en favor de un alto el fuego mundial inmediato —que Ucrania, cuya población sufre actualmente una agresión armada extranjera, apoyó desde el principio— está directamente relacionado con nuestro debate de hoy.

Sigue siendo urgente cambiar nuestro enfoque sobre las cuestiones de la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la responsabilidad colectiva de prevenir, detener y garantizar la no repetición de los ataques contra los civiles en situaciones de conflicto. Lamentablemente, esta tarea sigue inconclusa, a pesar de su persistente pertinencia. Ucrania se ha convertido en un claro ejemplo de las consecuencias del incumplimiento, por parte de uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, de las normas y principios del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario. El resultado es que cada año, desde 2014, se han venido registrando cifras sin precedentes de pérdidas civiles causadas por la agresión rusa contra mi país. Cada vez que se pierde una vida se debe establecer la responsabilidad. Esta es una de las principales condiciones previas para lograr una solución sostenible del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Durante más de siete años, el acto de agresión ruso ha seguido cobrándose la vida de civiles y destruyendo infraestructura vital en mi país. Este conflicto armado internacional ha hecho que el tema de la protección de los civiles y de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil en los territorios de las regiones de Donetsk y Luhansk ocupados temporalmente, así como de la República Autónoma de Crimea y de la ciudad de Sebastopol, pase de ser un tema académico a una cuestión muy práctica y cotidiana para mi país.

El conflicto armado sigue afectando al disfrute de los derechos económicos y sociales de la población civil, en particular de los más de 5 millones de residentes en las zonas afectadas por el conflicto y de los desplazados internos. Ucrania está sufriendo las devastadoras consecuencias de los daños o la destrucción causados por el bombardeo de infraestructura civil por parte de las fuerzas de ocupación rusas, así como el uso de instalaciones civiles con fines militares. La grave situación humanitaria en las zonas afectadas por el conflicto de las regiones de Donetsk y Lugansk sigue deteriorándose. Además, el hostigamiento por la Federación de Rusia contra los

buques comerciales que atraviesan el punto donde se levanta el puente construido ilegalmente en el estrecho de Kerch, entre Rusia y la Crimea temporalmente ocupada, sumado a las restricciones que ha impuesto Rusia al transporte marítimo internacional en ese lugar, entre ellas el reciente cierre ilegal de una parte del mar Negro que lleva al estrecho, agravan aún más la situación económica, social y de seguridad.

Más del 80 % de las empresas y la infraestructura pública vital dañadas en Dombás pertenecen a categorías de riesgo ambiental peligroso o muy peligroso.

Debido a los cortes de energía, la infraestructura destruida, los equipos de bombeo inutilizados y otras causas, 39 de las minas de la región se han inundado. La inundación puede haber dado lugar a la acidificación y el desplazamiento de metales pesados en las aguas subterráneas y el medio ambiente fluvial locales, con posibles repercusiones graves para la salud humana y la vida silvestre. Algunas de las minas inundadas solían utilizarse como instalaciones de almacenamiento de residuos.

Preocupa especialmente el peligro potencial de inundación del emplazamiento de un ensayo nuclear subterráneo llevado a cabo en 1979 por el régimen soviético, en la mina de carbón de Yunkom, cerca de la ciudad ocupada de Yenakiyeve. Esto representa un riesgo real de que la contaminación radiactiva se extienda a las aguas subterráneas, a los ríos y, en última instancia, al mar de Azov.

En el contexto de la propagación de la COVID-19, la situación de la protección de la vida y la salud de los civiles en los territorios ocupados temporalmente se ha vuelto aún más alarmante y requiere una atención especial de la comunidad internacional.

Como parte en el conflicto, Rusia insiste en ignorar su deber en virtud del derecho internacional humanitario, como Potencia ocupante, de garantizar y mantener la salud pública de la población, y utiliza el reciente agravamiento de la situación humanitaria como cortina de humo para realizar nuevos ataques contra los derechos y las libertades de los residentes de Crimea.

La propagación de la pandemia no impidió que las autoridades rusas anunciaran un nuevo proceso de reclutamiento del ejército de ocupación de la Federación de Rusia, lo que constituye un crimen de guerra.

Además, Rusia sigue bloqueando el acceso adecuado y sin trabas de las misiones internacionales de vigilancia, principalmente las de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a los territorios ocupados.

La peligrosa tendencia de Rusia a abdicar de sus obligaciones jurídicas tiene que quedar debidamente reflejada y evaluada en el próximo informe temático del Secretario General sobre la protección de los civiles.

Ucrania presta especial atención a las cuestiones relacionadas con el cumplimiento del derecho internacional humanitario y los derechos humanos en los conflictos armados, y con la prevención y la respuesta a los desplazamientos forzados y la protección de las mujeres, los niños y todas las personas vulnerables afectadas por los conflictos armados.

Como parte en los principales instrumentos internacionales relacionados con la protección de los civiles, Ucrania se compromete a promover y apoyar constantemente todos los esfuerzos encaminados a fortalecer su aplicación y aboga por que se garantice el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario tanto a nivel bilateral como multilateral.

Anexo 50**Declaración de la Misión Permanente de los Emiratos Árabes Unidos ante las Naciones Unidas**

Los Emiratos Árabes Unidos desean agradecer a Viet Nam la organización de este importante y oportuno debate abierto y a Mark Lowcock, Peter Maurer y Kevin Rudd por sus exposiciones informativas.

Los Emiratos Árabes Unidos apoyan firmemente la atención cada vez mayor que presta el Consejo de Seguridad a las medidas preventivas y reactivas para proteger la infraestructura que permite a los civiles sobrevivir a los conflictos y recuperarse de ellos. También es importante que los enfoques respecto de esta cuestión tengan en cuenta la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y el cambio climático.

Ante todo, el derecho internacional humanitario actual proporciona un marco sólido en relación con este tema que debe mantenerse. Como pone de manifiesto el presente debate, ese reconocimiento debe ser nuestro punto de partida colectivo.

Habida cuenta de ello, los Emiratos Árabes Unidos desean mencionar cinco opciones que podrían contribuir a mejorar los resultados en materia de protección.

En primer lugar, los Emiratos Árabes Unidos consideran que los mecanismos de evitación de conflictos son la mejor opción para identificar y proteger los objetos civiles. Estos mecanismos establecen un entendimiento común de dichos bienes, reflejando el principio fundamental de distinción, y permiten el seguimiento de su estado a lo largo del tiempo. Las nuevas tecnologías en ese ámbito, como la utilización de datos de satélite, podrían servir para mejorar la precisión y la exhaustividad de esos mecanismos y, por ende, proteger a un mayor número de personas.

En segundo lugar, la aplicación de consideraciones de género, edad y discapacidad a la hora de identificar, proteger y restaurar dichos bienes dará un mejor resultado, ya que permitirá satisfacer todas las necesidades sociales. Esa es la base para lograr una paz y una recuperación sostenibles. En el sistema de las Naciones Unidas, los Emiratos Árabes Unidos abogan por que se dedique un presupuesto específico a la inclusión de asesores sobre género, edad y discapacidad en todas las operaciones de paz y seguridad, así como a la creación de marcadores obligatorios, como intervenciones efectivas y de costo mínimo.

En tercer lugar, la resiliencia se puede mejorar mediante el fortalecimiento de la infraestructura física y los servicios sociales antes y durante los conflictos. Los sistemas menos resilientes experimentan una mayor perturbación de los servicios básicos y de salud humana. Los desafíos planteados por la pandemia y el cambio climático subrayan ese aspecto.

Por consiguiente, los Emiratos Árabes Unidos han facilitado la distribución mundial de equipos de protección personal y vacunas contra la COVID-19 mediante alianzas bilaterales y multilaterales, lo que incluye el centro de suministros de las Naciones Unidas en Dubái y la colaboración sin fines de lucro entre los Emiratos Árabes Unidos y el Mecanismo Mundial COVAX en el ámbito logístico. Los Emiratos Árabes Unidos comprenden la importancia de desarrollar la resiliencia mediante la inversión en los sistemas de salud mundiales.

Del mismo modo, es fundamental ayudar a las comunidades a afrontar los efectos del cambio climático y la degradación del medio ambiente. Los Emiratos Árabes Unidos abogan por que las Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales inviertan de manera prioritaria en aquellas zonas vulnerables al cambio climático en las que existen situaciones de conflicto o inseguridad. Por ejemplo, prestar apoyo a los agricultores del Sahel para la producción de cultivos resistentes al calor y la gestión de los recursos hídricos permitiría abordar las necesidades de adaptación al clima y, al mismo tiempo, las causas del conflicto.

En ese sentido, los Emiratos Árabes Unidos también son partidarios de que se preste más atención a la gestión ambiental y al legado de infraestructura beneficiosa en las operaciones de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz, como un posible motor económico en los países receptores. Por ello, los Emiratos Árabes Unidos encomian el liderazgo demostrado por la Secretaría al comprometerse a hacer un uso de energía procedente en un 80 % de fuentes renovables para 2030, sobre todo mediante la segunda fase de la estrategia ambiental del Departamento de Apoyo Operacional para las misiones sobre el terreno.

Asimismo, en las medidas orientadas a fortalecer los bienes de carácter civil se deben tener en cuenta de manera prioritaria los aspectos de género, edad y discapacidad. Por ejemplo, las mujeres y las niñas tienen necesidades específicas en materia de salud sexual y reproductiva, por lo que es preciso financiar y proteger esos servicios. A tal objeto, los Emiratos Árabes Unidos prometieron contribuir con 2 millones de dólares al Fondo de Población de las Naciones Unidas, en el marco de un conjunto de medidas de ayuda por valor de 10 millones de dólares para un programa sobre violencia sexual y de género destinado a mejorar el acceso de las refugiadas rohinyás, sobre todo las que son víctimas de violencia sexual, a los servicios de salud esenciales.

En cuarto lugar, el enfoque de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad sobre el conflicto debe abarcar la planificación de la reconstrucción, sobre todo de la infraestructura crítica, para hacer frente a las repercusiones del conflicto armado. Los Emiratos Árabes Unidos se enorgullecen de haber apoyado la reconstrucción en el Iraq, en particular en beneficio de las mujeres yazidíes, y han sido testigos de primera mano de la importancia de seguir prestando atención a los bienes de carácter civil indispensables, a pesar del cese de las hostilidades.

En quinto lugar, la protección de los bienes de carácter civil tiene como objetivo final el cese de las hostilidades. Por ello, los Emiratos Árabes Unidos aprovechan esta oportunidad para reiterar su apoyo al llamamiento del Secretario General en pro de un alto el fuego mundial para facilitar la prestación de asistencia humanitaria contra la COVID-19, incluidas las vacunas, a las personas más vulnerables. Los Emiratos Árabes Unidos reiteran su compromiso de defender el derecho internacional humanitario y de hacer frente de manera constructiva a las amenazas que pesan sobre los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil.